

**PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PERCEPCIÓN FRENTE A LA GESTIÓN
PÚBLICA: EL CASO DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO-SUCRE**

Anyi Paola Ramírez Contreras



**DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES PROGRAMA DE
MAESTRÍA EN DESARROLLO SOCIAL**

**PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PERCEPCIÓN FRENTE A LA GESTIÓN
PÚBLICA: EL CASO DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO-SUCRE**

Tesis presentada a la Universidad del Norte para optar al Grado de Magíster en Desarrollo

Social

Por

Anyi Paola Ramírez Contreras

Director de Tesis: Dr. Raimundo Abello



Noviembre 2017

DEDICATORIA

A DIOS por sus infinitas bendiciones.

A mis Padres, los cuales me enfocaron de tal forma que yo pudiera comprender que todo lo que me proponga lo puedo lograr siempre y cuando me esfuerce por ello.

A mi hija, mi motor.

A todos los que siempre han confiado en mí, en especial mi abuelo Cristóbal Contreras Q.E.P.D y mi aliado de vida Raúl Mogollón.

AGRADECIMIENTOS

A Dios, en primer lugar, por cada oportunidad que me ha brindado y por iluminarme en todo este proceso. A mis padres y mi hermana, por el apoyo y por la confianza que siempre han depositado en mí. A mi hija, por ser mi inspiración para ser mejor cada día. A mi abuelo Cristóbal Contreras Q.E.P.D, que hasta su último suspiro iba lleno de fe y motivación hacia mí. A Raúl Mogollón, por hacer parte de mi crecimiento personal, académico y profesional, con su fe intacta en mi dedicación y mis capacidades. A toda mi familia, que siempre me ha transmitido mucha fuerza y confianza.

A la Universidad del Norte, que con su cualificado cuerpo de docentes aportó significativamente a mi formación académica, en especial a mis maestros y asesores en esta investigación, Raimundo Abello, Marcos Cervantes y Camilo Madariaga, quienes siempre estuvieron dispuestos a guiarme y aportar en este proceso.

RESUMEN

Este artículo expone las percepciones y valoraciones de los habitantes del municipio de Sincelejo (Colombia), frente a la participación ciudadana y frente a cada una de las dimensiones de la gestión pública: imagen, eficiencia, eficacia y transparencia; analizando detalladamente los juicios de las personas que ejercen la participación y los juicios que emiten aquellas personas que no ejercen la participación, en aras de determinar la relación entre participación ciudadana y percepción frente a la gestión pública. Para la medición, se construyó un instrumento basado en la encuesta de 'Percepción ciudadana' de la Red de ciudades Cómo Vamos, teniendo en cuenta solo las preguntas correspondientes a las variables de esta investigación. Participaron 120 personas, de las cuales 60 han ejercido la participación ciudadana y 60 no la han ejercido; los primeros fueron reclutados a través de muestreo no probabilístico tipo Bola de Nieve, los segundos fueron escogidos entre personas que transitaban a diferentes horas en los puntos más importantes y concurridos de la ciudad. La hipótesis a comprobar era que a mayor participación ciudadana, mejor percepción frente a la gestión pública; para lo cual se analizaron y tabularon los datos mediante el programa SPSS/PC para Windows. Finalmente, la hipótesis no fue confirmada y el estudio arrojó como resultado que en el municipio de Sincelejo no existe una relación positiva entre el ejercicio de la participación ciudadana y la percepción de los ciudadanos frente a cada una de las dimensiones de la gestión pública.

Palabras Claves: Participación ciudadana, gestión pública, democracia, gobernanza.

TABLA DE CONTENIDO

Pág.		
	INTRODUCCIÓN	10
	1. JUSTIFICACIÓN	14
	2. MARCO TEÓRICO	19
	2.1 Antecedentes en el Estudio de la Participación Ciudadana	19
	2.1.1 Modalidades de la Participación	20
	2.1.2 Participación Ciudadana: Aproximación al concepto y enfoques.....	22
	2.1.3 Clasificación de la participación Ciudadana atendiendo a los medios para su ejercicio: Participación autónoma y participación institucionalizada.	26
	2.1.4 Factores asociados en el ejercicio de la participación ciudadana.....	31
	2.2 Gestión Pública	37
	2.2.1 Antecedentes en el estudio de la Gestión Publica	39
	2.2.2 Nacimiento de la Nueva Gestión Pública.....	43
	2.2.3 Dimensiones de la Gestión Pública.....	47
	2.3 El enfoque de la Gobernanza	65
	2.4 Niveles de participación ciudadana en la gestión pública	71
	2. 5 La participación ciudadana desde la Gobernabilidad y desde la Gobernanza	73
	3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	81
	3.1 Formulación del Problema.....	85
	4. OBJETIVOS	86
	4.1 Objetivo General	86
	4.2 Objetivos Específicos:	86
	5. HIPÓTESIS	87
	5.1. Hipótesis general.....	87
	5.2. Hipótesis específicas.....	87

6. VARIABLES.....	88
6.1 Definición conceptual	88
6.2 Definición operacional.....	89
7. METODOLOGÍA.....	97
7.1 Tipo de Estudio	97
7.2. Participantes de la Investigación.....	97
7.3 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos	98
7.4 Procedimientos.....	99
7.5. Método de análisis de datos	99
8. RESULTADOS	100
8.1 Razones para ejercer y no ejercer la participación ciudadana en el Municipio de Sincelejo.....	100
8.2 Percepción frente a los alcances y efectos de la participación ciudadana en el municipio	103
8.3. Resultados entre participación ciudadana e imagen frente a la gestión pública	107
8.4. Resultados entre participación ciudadana y eficiencia de la gestión Pública	116
8.5 Resultados entre participación ciudadana y eficacia de la gestión pública	125
8.6 Resultados entre participación ciudadana y transparencia de la gestión pública.....	141
9. CONCLUSIONES.....	148
10. BIBLIOGRAFÍA	156
11. ANEXOS	165

TABLA DE ILUSTRACIONES

Pág.

<i>Tabla 1. Operacionalización de las variables.....</i>	<i>90</i>
<i>Tabla 2. No participación por falta de tiempo.</i>	<i>101</i>
<i>Tabla 3. No participación por falta de información.</i>	<i>101</i>
<i>Tabla 4. La participación como deber del ciudadano.....</i>	<i>102</i>
<i>Tabla 5. La Participación ciudadana en la reducción del clientelismo y la politiquería ..</i>	<i>104</i>
<i>Tabla 6. Influencia de la Participación ciudadana en las decisiones de las autoridades locales.....</i>	<i>105</i>
<i>Tabla 7. Imagen de los encuestados que participan en organismos autónomos frente al concejo de la ciudad.....</i>	<i>110</i>
<i>Tabla 8. Imagen de los encuestados que participan en espacios institucionalizados frente al concejo de la ciudad.....</i>	<i>110</i>
<i>Tabla 9. Imagen de los encuestados que no participan frente al concejo de la ciudad.....</i>	<i>111</i>
<i>Tabla 10. Imagen de los encuestados que participan en organismos autónomos frente al actual alcalde de la ciudad.....</i>	<i>112</i>
<i>Tabla 11. Imagen de los encuestados que participan en espacios institucionalizados frente al actual alcalde de la ciudad.....</i>	<i>113</i>
<i>Tabla 12. Imagen de los encuestados que no ejercen la participación ciudadana frente al actual alcalde de la ciudad.....</i>	<i>113</i>
<i>Tabla 13. Percepción de eficiencia de los encuestados que participan en organismos autónomos frente a la Unidad de Salud ESE San Francisco de Asís.....</i>	<i>118</i>
<i>Tabla 14. Percepción de eficacia de los encuestados que participan en espacios institucionalizados frente a la Unidad de Salud ESE San Francisco de Asís.....</i>	<i>119</i>

<i>Tabla 15. Percepción de eficiencia de los encuestados que no ejercen la participación ciudadana frente a la Unidad de Salud ESE San Francisco de Asís.</i>	<i>120</i>
<i>Tabla 16. Satisfacción de los encuestados con la forma en que la actual administración invierte los recursos del municipio.....</i>	<i>123</i>
<i>Tabla 17. Satisfacción de los encuestados con la gestión que ha realizado la actual administración en el área de la seguridad ciudadana y convivencia.</i>	<i>129</i>
<i>Tabla 18. Satisfacción de los encuestados con la gestión que ha realizado la actual administración por el desarrollo económico de la ciudad.</i>	<i>131</i>
<i>Tabla 19. Satisfacción de los encuestados con la gestión que ha realizado la actual administración por el área de la recreación y el deporte.</i>	<i>134</i>
<i>Tabla 20. Satisfacción de los encuestados con la gestión que ha realizado la actual administración para promover la participación ciudadana.</i>	<i>138</i>
<i>Tabla 21. Satisfacción de los encuestados con la transparencia de la actual administración.</i>	<i>141</i>
<i>Tabla 22. Satisfacción de los encuestados con la información que entrega la actual administración sobre los proyectos que desarrolla.</i>	<i>143</i>
<i>Tabla 23. Percepción en torno a la corrupción.</i>	<i>144</i>

INTRODUCCIÓN

“¿Podemos mejorar las relaciones gobierno y ciudadanía apelando a la participación ciudadana?” “¿Cuál es el balance del camino recorrido y de qué manera la investigación social puede construir una nueva agenda que contribuya a desarrollar nuevos conceptos e ideas en torno a cómo y por qué impulsar la participación ciudadana en las decisiones públicas?” Son dos preguntas que se formula Alicia Ziccardi (2004) al inicio del libro *Participación Ciudadana y Políticas Sociales del ámbito Local* (p.9).

La primera llama a la atención en la medida que da lugar a la duda y admite una respuesta negativa, es decir, aunque sea difícil pensar en ello, es posible que se recurra a la participación ciudadana como mecanismo para fortalecer la relación entre el gobierno y la ciudadanía y esto no tenga ningún efecto, o por el contrario, tenga un efecto contraproducente. Sin embargo, las experiencias que se han forjado a lo largo del tiempo y distintas investigaciones, han demostrado que la respuesta a esa pregunta tiende a ser afirmativa y que efectivamente se fortalece el vínculo entre los ciudadanos y el gobierno cuando este último permite que los individuos tomen parte activa en los asuntos públicos (Robles, 2013), (Canto, 2010), (Cano, 2008), (Cunill, 1991; 1997), (Mariñez, 2007; 2009), (Ramírez; Gascó y Llopis, 2012), (Sarmiento; Tello & Segura, 2007), (Velásquez & González, 2003), (Villareal, 2009, 2010, 2012), (Ziccardi, 1998, 2004).

En la segunda pregunta se motiva y justifica el desarrollo de esta investigación, como otras tantas que se han propuesto analizar los aportes de la participación ciudadana en la Gestión Pública y que han ido contribuyendo a la construcción de un saber que se enfoca en mejorar la relación entre el gobierno y los ciudadanos para abordar de forma más eficiente y

eficaz los problemas sociales; y ante todo, aportar en la construcción de una ciudadanía y una cultura democrática. Porque, lo fundamental de promover la participación ciudadana es precisamente ir en busca de una transformación de la sociedad a partir del protagonismo autónomo de la sociedad civil en un proyecto político cultural de cambio (Ziccardi, 2004).

En el presente estudio correlacional se identifican las percepciones y valoraciones de los ciudadanos frente a la participación ciudadana y frente a las dimensiones de la gestión pública, analizando detalladamente los juicios de las personas que ejercen la participación y los juicios que emiten aquellas personas que no ejercen la participación, en aras de poder discriminar la relación entre participación ciudadana y percepción frente a la gestión pública. Para la recolección de la información se tomaron las preguntas de la encuesta de Percepción Ciudadana que aplica la Red de Ciudades Cómo Vamos, siendo preciso aclarar que se diseñó un instrumento donde solo se tienen en cuenta las preguntas atinentes a las variables de esta investigación.

El desarrollo de este estudio inicia con un recorrido por la literatura, citando los aportes de estudios precedentes que se constituyen significativos para la presente investigación, tanto en el campo de la participación ciudadana como en el campo de la gestión pública, otorgándole especial relevancia a aquellas investigaciones donde se han abordado conjuntamente. Posteriormente, se analiza teóricamente el enfoque de la gobernanza y sus fundamentos, que es finalmente el estilo de gobierno que se pretende construir a partir de la participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos.

Con los demás momentos de la investigación se pretende determinar la relación existente entre Participación Ciudadana y la percepción de los ciudadanos frente a cada una

de las dimensiones de la Gestión Pública: imagen, eficiencia, eficacia y transparencia; planteando como hipótesis que a mayor participación ciudadana, hay una mejor percepción frente a la gestión pública, hipótesis que finalmente no fue confirmada en este estudio. Lo anterior se debe a que hay una percepción generalizada de ineficacia, ineficiencia y corrupción hacia las autoridades encargadas de la gestión pública en el municipio de Sincelejo, que tanto las personas que participan como las personas que no participan, emiten juicios negativos frente a la gestión de los gobernantes. Inclusive, se evidencia que las personas que no participan tienen una percepción menos negativa y desfavorable que aquellas personas que si ejercen la participación ciudadana.

Teniendo en cuenta el estudio de Velásquez, Rodríguez y González (2008), se puede afirmar que lo anterior es consecuencia de la fractura entre la participación ciudadana y la representación política que ha habido en el país, en especial en el ámbito local. Dicha fractura se expresa de dos formas: por una parte, el esfuerzo de las autoridades públicas de controlar los espacios de participación ciudadana para reducir su eficacia y poder, o convertirlos en espacios beneficiosos a sus intereses particulares y a sus objetivos de gobierno, mediante la cooptación de los líderes políticos por las lógicas del juego político- electoral. Por otra parte, la conversión de los escenarios de participación en un campo de disputa entre líderes sociales y actores políticos, donde ambos luchan por el control de los procesos de participación y tratan de deslegitimarse entre sí. Los líderes sociales argumentando que los actores políticos son agentes de la “politiquería” y lo que pretenden es utilizar instrumentalmente estos espacios para su exclusivo favor y, por su parte, los agentes políticos argumentando que han sido elegidos popularmente y por lo tanto merecen el monopolio de las decisiones.

Lo que ha ocurrido en el país es que la representación política ha acaparado el espacio de lo público bloqueando la intervención de los ciudadanos en las decisiones colectivas. Ni siquiera se trata de subordinación, más que eso, se trata de cooptación política de liderazgo social y de debilitamiento de las prácticas participativas (Velásquez, Rodríguez y González, 2008).

Finalmente, se llega a la conclusión que debido a que la participación ciudadana en el municipio de Sincelejo no ha sido ejercida a plenitud, porque no se logra alcanzar el resultado que los participantes esperan, que es poder influir en las decisiones de los gobernantes, estos han creado una percepción aún más negativa frente a la administración. Ramírez (2015) sostiene que las personas tienden a participar más cuando perciben que sus aportes son valorados y tienen consecuencias positivas en su entorno inmediato; por el contrario, cuando no perciben beneficio alguno, se sienten frustradas y seguramente no vuelven a participar; frustración que deviene en una percepción negativa frente a la gestión pública y una desafección política, que corresponde al alejamiento y desapego de los ciudadanos frente al sistema político. Entre los síntomas se encuentra el desinterés, la desconfianza, el distanciamiento, la impotencia, la frustración, el rechazo y las hostilidades; siendo entendibles estas consecuencias en la medida que la participación demanda tiempo y una serie de costes para el ciudadano, tales como, buscar información, analizarla y luego decidir qué acciones emprender. En concordancia, es importante para él la obtención de beneficios luego de hacer esa inversión de recursos, además de sentir que finalmente podrá incidir con su participación en las decisiones del aparato estatal.

1. JUSTIFICACIÓN

Esta investigación pretende analizar la relación existente entre la participación ciudadana y la percepción que tienen los participantes frente a la Gestión Pública que viene ejerciendo la administración del Municipio de Sincelejo. La realización de este trabajo se cimienta en la transición que ha habido en la gestión pública hacia la gobernanza, un nuevo estilo de gobierno donde se demanda una mayor participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones públicas; se trata de una nueva relación entre el Estado y la sociedad. La sinergia entre ambos logra resultados y avances productivos, esta fructífera relación y estos resultados no son precisamente producto de la efectividad de los acuerdos para desarrollar tareas conjuntas, sino que constituye un resultado probable en consecuencia con el marco institucional democrático en el cual se desarrolla (Cano, 2008).

Las burocracias tradicionales son un impedimento al buen gobierno (Cano, 2008); por tanto, deben plantearse nuevos medios para tomar mejores decisiones públicas. Este estudio se articula a aquellos otros que aúnen sus esfuerzos en la búsqueda de esos medios, en aras de constituirse en un insumo importante para aquellos actores que tienen el cometido de atender los asuntos de interés público, teniendo en cuenta que este proceso no puede ser arbitrario ni efectuarse sin evidencia empírica, sino que debe fundamentarse en bases teóricas y experienciales, evitando así, reincidir en la adopción de estrategias inoperantes que arrojan los mismos efectos indeseados y poco significativos.

En Colombia poseemos, tanto a nivel Nacional como local, un amplio marco institucional de participación, lo cual es resultado del importante valor que le otorgan a la expedición de normas y a la creación de instituciones en este país. Almonacid (2015)

manifiesta que la mayoría de políticas públicas incorporan instrumentos institucionales de participación ciudadana como los comités y consejos consultivos. Esta autora, citando a Ziccardi (2004) y Villareal (2009c), expresa que estos escenarios son institucionalizados por estar regulados normativamente y que a menudo son creados como instrumentos para la promoción de la cultura democrática, en el que se espera materializar el poder político de los ciudadanos para propiciar la eficacia en las decisiones y la gestión pública y otorgar legitimidad al gobierno. Sin embargo, esta amplia infraestructura normativa, construida posiblemente con muy buenas intenciones, no concuerda con prácticas efectivas de participación (Velásquez y González, 2003). Uribe (2009) afirma “estos mecanismos de participación no han sido utilizados por los ciudadanos; cuando han acudido a ellos no han tenido la suficiente convocatoria ni han conseguido las metas propuestas” (p.202).

“No obstante existen experiencias exitosas de intervención ciudadana en la planeación y la gestión municipal” (Velásquez y González, 2003, p.27), lo que significa que han habido personas convencidas de que la participación tiene sentido y han tomado la iniciativa de intervenir en el aparato estatal para hacer parte del proceso de toma de decisiones. En concordancia con esto, es pertinente hacer un estudio que permita identificar en qué espacios se ha ejercido esta participación, los motivos que han impulsado o inhibido a los ciudadanos de participar, los factores que favorecen u obstaculizan el ejercicio de la participación, los beneficios que arroja, y sobre todo, el aporte que ha hecho a la reducción de la corrupción; que es uno de los motivos que conlleva a que las personas generen desconfianza e insatisfacción frente a las instituciones públicas, sus gestiones y los mecanismos y espacios de participación (Uribe, 2009).

Como declaran Velásquez y González (2003) “conocer el alcance de los efectos de la participación e identificar los factores que han favorecido o limitado su existencia constituye un elemento de análisis fundamental de los procesos de participación ciudadana (p. 317). De acuerdo a esto, para seguir fomentando el cambio que el país reclama, el cual de hecho debe tener fuertes cimientos en el ámbito local, y seguir en la búsqueda de efectivizar la gestión pública, es necesario analizar la participación de los ciudadanos en los espacios diseñados para tal fin, y la percepción que poseen con respecto a la administración local, esto permitirá conocer el comportamiento y la relación existente entre ambas variables en el municipio delimitado para el presente estudio; partiendo del hecho de que comprender su nivel de proporcionalidad se constituye en un insumo fundamental para los decisores políticos. Como afirma Villarreal (2009a) “es importante investigar este asunto porque la participación ciudadana en la gestión pública constituye una condición para la gobernanza democrática” (p.415), que consiste precisamente en la intervención de actores gubernamentales y no gubernamentales en el direccionamiento de la sociedad, y es hacia la consolidación de esta nueva relación entre el gobierno y los ciudadanos que se debe propender.

En Colombia persiste la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones públicas, lo que conlleva o se traduce en insatisfacción con la gestión pública. Por esto, encontrar alternativas para modificar esa percepción será siempre un apoyo importante en esa búsqueda de crear una mejor relación entre el Estado y la sociedad. María Cecilia Güemes (2014), manifiesta que las personas estiman poco lógico contraer los costos y riesgos que implica el emprendimiento de acciones colectivas y cooperativas, cuando se sospecha que los otros son oportunistas y deshonestos; y, por el contrario, “cuando se cree que los demás

son honestos y dignos de confianza, la cooperación y acción colectiva se vuelve más probable” (p.17).

Esta cooperación y acción colectiva es necesaria atendiendo a que “la gobernación en solitario del gobierno ha perdido sentido y eficacia” (Aguilar, 2006, p. 136); por lo tanto, para gobernar las sociedades contemporáneas se necesitan más que las potestades y los recursos estatales, es necesario reconocer las capacidades y los aportes que pueden hacer otros agentes en la dirección de la sociedad, para así invitarlos a realizar este trabajo en conjunto. La dinámica consiste en intercambiar con otros actores los recursos que estén a su disposición, para que estimulados por medio de incentivos, se interesen en cooperar y concurrir en este proceso, comprendiendo que los problemas tienen significación social y por lo tanto también les afecta y atañe a ellos.

La participación ciudadana promueve un dialogo horizontal entre la ciudadanía y la administración pública, mejorando la eficiencia y eficacia de esta última en la medida que permite concitar voluntades para la construcción de consensos que conllevan a reducir las resistencias del entorno y a coordinar mejor las acciones, obteniendo de esta forma resultados que cuentan con la aprobación de los interesados. La Cepal (2007), afirma que la participación de la sociedad en la elaboración de las políticas públicas aumenta el sentido de pertenencia de la misma y promete políticas más eficaces; y, Velásquez y González (2003), sostienen por su parte que la participación ciudadana torna más eficaz y eficiente la gestión pública municipal, permite que haya más transparencia en el accionar público y posibilita la comunicación entre el gobierno y los ciudadanos; favoreciendo desde esta óptica “un cambio de visión a funcionarios, líderes y pobladores sobre su papel en el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad” (p.14).

Así, teniendo en cuenta que la participación ciudadana aporta a la eficiencia del Estado y que entre más eficaz sea este en el ejercicio de sus funciones, más estímulos tienen los actores para confiar y cooperar (Güemes, 2014), es necesario que se conciba la vinculación de la ciudadanía en la formulación de políticas públicas como una forma de ir modificando ese persistente imaginario social de desconfianza, alimentado por malas prácticas políticas, e iniciar el envío de señales que moldeen creencias y construyan las bases de una confianza generalizada. Además, este estudio permitirá generar insumos para el fortalecimiento de la estructura y dinámica de los espacios de participación ciudadana en el municipio de Sincelejo, en aras de que se perciban como espacios útiles y eficaces en la búsqueda de soluciones a los problemas de la sociedad, y así, ésta se motive a participar en ellos.

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes en el Estudio de la Participación Ciudadana

La participación ciudadana se institucionalizó en Colombia como parte del proceso de descentralización político- administrativa del Estado y fue asumida como un medio para acercar al gobierno con los ciudadanos, en una época en la que reinaba la desconfianza hacia las autoridades públicas y los entes de representación política. Para ello, se crearon mecanismos y espacios por medio de los cuales los ciudadanos podían vigilar el accionar de los gobernantes, tramitar iniciativas y debatir soluciones para sus problemáticas; en la medida que estos dispositivos aumentaban, se ampliaba la “infraestructura” institucional para la participación (Velásquez, 2011).

En Colombia se crearon los espacios de participación ciudadana en un momento de alta convulsión política y social, donde los ciudadanos se movilizaban exigiendo mayor presencia del Estado y eficiencia en la prestación de los servicios públicos; y por otra parte, un sector de la población que consideraba al modelo de desarrollo excluyente y opresor, había empuñado las armas para tomarse el poder y reclamar participación en el escenario político (Velásquez, 2011). Fue así, como en medio de un conflicto armado, nació la descentralización y surgieron los primeros canales de participación ciudadana, en aras de otorgarles a los protagonistas del movimiento social la oportunidad de ser interlocutores del Estado por medio de unos procedimientos claramente establecidos en la ley. La Constitución del 1992 concibió a la participación como un fin esencial del Estado y un derecho de todos los ciudadanos; por lo tanto, desde la década del noventa se han aprobado un sin número de leyes que dan apertura a canales y espacios para ejercer la participación ciudadana en la

gestión pública, y mediante la Ley 134 de 1994 se reglamentaron los mecanismos de participación directa: Iniciativa popular, plebiscito, referendo, consulta popular, revocatoria del mandato y el cabildo abierto.

La participación ciudadana a nivel local, los factores influyentes en el ejercicio de la misma y los efectos que produce en la gestión Pública, se tornan en un objeto de conocimiento complejo que debe ser estudiado en la medida que permite comprender la relación sociedad- estado. En el presente capítulo se exponen los principales aportes conceptuales que se han realizado en torno a la problemática planteada en este trabajo de investigación, para luego analizar críticamente los vacíos existentes y así partir hacia la construcción de un nuevo conocimiento.

2.1.1 Modalidades de la Participación

La participación ciudadana ha sido abordada desde diferentes perspectivas y dada a su manifiesta ambigüedad y la complejidad que implica diferenciarla claramente de otros fenómenos, siempre está latente la tendencia a relacionarla (muchas veces confundirla) con otras modalidades de participación. Por eso, se hace necesario especificar en qué consiste y en que no, para delimitar con claridad sus elementos esenciales y el enfoque que tiene, bajo el cual se direccionará el análisis de la presente investigación.

Cunill (1991, 1997) se encarga de establecer las diferencias entre la participación ciudadana y otros posibles tipos de participación. La autora manifiesta que es necesario deslindarla de la participación popular y de la participación comunitaria. Es más específica que la primera y no se refiere necesariamente a las acciones fundadas de autoayuda social, como es el caso de la segunda. La participación ciudadana supone necesariamente una

relación con el Estado, y si bien la participación comunitaria eventualmente también, esta relación es motivada por el anhelo de recibir de éste un impulso asistencial y/o una ayuda material para acciones, que en últimas son ejecutadas por los mismos ciudadanos, pues atañen a cuestiones relacionadas con su vida más inmediata.

Guarda relación con la participación política, pero se distancia de ella en la medida que no hace referencia a la participación mediada por políticos, ni a la que se practica cuando se escogen a las autoridades políticas. La participación política es entendida como “la intervención de los ciudadanos básicamente a través de los partidos políticos, en órganos de representación como parlamentos, concejos municipales y cualquier otro tipo que represente los intereses globales de una comunidad política u ordenamiento general” (Cunill, 1991, p. 50); es decir, está orientada por los mecanismos de la representación política. De acuerdo con Cunill (1991), la diferencia con la participación ciudadana estriba en que esta se circunscribe en la esfera de “los intereses particulares radicados en la sociedad civil” (p. 49).

La participación social, por su parte, no se puede igualar a la participación ciudadana, en tanto su práctica supone que los individuos se relacionen con otras instituciones sociales, mas no con el Estado (Langton, S., 1978, citado en Cunill, 1991), como si acontece en el caso de la segunda. La participación social implica cooperación y autogestión en las agrupaciones que los ciudadanos forjan en la sociedad civil para la defensa de sus intereses sociales, requisitos propios también de la participación ciudadana; pero, para que esta última se configure, necesitaría además que se manifieste una relación con la actividad pública, trascendiendo de la simple obtención de recursos.

Traer a colación esta clasificación era importante para comprender la intervención de los ciudadanos en la esfera pública a partir de distintas acciones colectivas. Hasta aquí se ha

abordado lo que no es la participación ciudadana y se ha tratado de establecer las diferencias entre ella y otras modalidades de participación. En este intento se han brindado algunas pinceladas de lo que implica realmente el ejercicio de la participación ciudadana; sin embargo, es necesario adentrarnos en el estudio de su dinámica para comprender cuando se practica y las dimensiones de la misma.

2.1.2 Participación Ciudadana: Aproximación al concepto y enfoques.

Para comprender mejor el concepto de participación ciudadana se hace necesario definir los dos términos que la conforman. Por lo tanto, iniciamos con el término participar, que de acuerdo a la Real Academia Española significa tomar parte en algo, recibir parte de algo o tener algo en común con otros u otros. Entonces, el término participación que deriva del verbo participar, hace referencia a la intervención de una persona en algo que le pertenece o le es común por haber un interés en ello, lo cual constituye la esencia de la participación ciudadana, en la cual el ciudadano interviene en los intereses públicos porque en eso consiste precisamente el carácter de publicidad, en que atañe a todos.

Mauricio Merino (1997) sostiene que el participar tiene un carácter social por lo que es “tomar parte”, es pertenecer a una organización y esto implica a más de una persona. Con esto indica que es necesario la organización para poder participar, porque es la forma de que se agrupen personas con intereses comunes y el deseo de defenderlos.

De acuerdo a la Real Academia Española *ciudadanía* es “cualidad y derecho de ciudadano y conjunto de los ciudadanos de un pueblo o nación”. Marshall (1998) sostiene que “La ciudadanía es aquel estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de una

comunidad” (p.37). Lo anterior implica el respeto por los derechos que le han sido reconocidos y otorgados a los ciudadanos.

Participación ciudadana es, entonces, la intervención de los ciudadanos en aquellos asuntos que le atañen o afectan. He aquí su carácter trascendental en la gobernabilidad democrática, porque es la influencia de los ciudadanos, mediante la defensa de sus intereses particulares, en la toma de decisiones de los gobernantes.

La participación ciudadana atiende al reclamo de los sujetos sociales de libertad e igualdad para hacer parte de las acciones públicas, es un tema de profundización de la democracia donde el problema central se enmarca en la rearticulación de las relaciones entre el Estado y la sociedad. Esta democratización tiene como objetivo el incremento del poder de la sociedad civil “cuya expresión en lo económico y social es la cogestión, la cooperativización, que crean entre lo privado y lo estatal un espacio de socialización, de descentralización y de autonomización de las decisiones” (Portantiero, J.C., 1989, citado en Cunill, 1997, p. 39).

La participación ciudadana puede asumir un carácter político o un carácter administrativo (Cunill, 2008). Cuando asume el carácter administrativo no se promueve una redistribución real del poder social, en la medida que este lo ostentan comunidades específicas atendiendo a los saberes técnicos que poseen o; se acota la influencia ciudadana en las decisiones solo a los intereses directamente implicados, funcionales a la burocracia estatal. Dicho de otra forma, cuando la participación ciudadana toma el carácter administrativo, solo busca la provisional optimización técnica de las decisiones y no una adjudicación auténtica del poder social. Villarreal (2009b) sostiene que cuando el ente gubernamental toma las decisiones fundamentándose solo en conocimientos técnicos, ignora

el hecho de que las políticas son parte de un proceso social, cultural y político, influenciado por un bagaje histórico en el que se entremezclan las relaciones entre los distintos actores sociales y la construcción de su autonomía o dependencia, la interacción de los mismos con el Estado y las experiencias pasadas que han tenido en la resolución de los problemas. A diferencia de la participación ciudadana con carácter administrativo, la participación ciudadana con carácter político “tiene como sujeto privilegiado a los intereses sociales subrepresentados en la formación de las decisiones, precisamente porque busca afectar los balances de poder en el marco de la construcción de ciudadanía” (Cunill, 2008, p. 125).

La participación ciudadana con carácter político es la de interés para el presente estudio, se fundamenta en que la política no se puede- y no se debe- atribuir exclusivamente a los partidos políticos; por lo tanto, la autora centrándose en esta dimensión, manifiesta que el eje de atención es aquel tipo de práctica social que implica una interrelación y compenetración entre el Estado y los actores de la sociedad civil. Y he aquí una de las particularidades de la participación ciudadana: se consolida en la intervención directa de los ciudadanos en los asuntos públicos, quienes actúan como portadores de intereses sociales (Cunill, 1997). En palabras de Ziccardi (1998) “La participación ciudadana, es la clave para transformar el espacio de lo estatal en un espacio público y contribuir a crear condiciones para consolidar una gobernabilidad democrática” (p. 3), es entonces en la esfera pública donde la sociedad civil expresa sus intereses, por eso es que siempre está en construcción, porque se nutre en la medida que los participantes se comunican y pactan acuerdos.

La participación ciudadana formal tiene tres funciones principales “otorgar legitimidad al gobierno; promover una cultura democrática; hacer más eficaces las decisiones y la gestión pública” (Ziccardi, 2004, p. 250). Teniendo en cuenta esta afirmación, la

participación ciudadana aporta a la democratización y eficiencia de las decisiones, pero esto depende del grado de deliberación que suponga. En el proceso de toma de decisiones, la deliberación se constituye en ese espacio de discusión pública en el que se plantean propuestas y se justifican apelando a los intereses públicos (Fung, 2002, citado por Cunill, 2008), en el cual se debe aceptar y otorgar el crédito al mejor argumento, prevaleciendo ante otros factores como autoridad jerárquica, dinero o fuerza. En este proceso de deliberación debe primar la comprensión mutua, la tolerancia, la confianza para lidiar con la complejidad de los problemas y el respeto por la diversidad social, lo cual se debe a que es una dinámica de dialogo donde se enfrentan diferentes posturas y posiciones de valor que afectan la elaboración de las decisiones (Cunill, 2008). Además del grado de deliberación, Ziccardi (2004) afirma:

Para crear una participación ciudadana que contribuya a consolidar buenos gobiernos, eficientes y democráticos, es necesario generar en primer término credibilidad en la ciudadanía, confianza en que su gobierno es honesto, eficiente y democrático. Esto difícilmente se logra a través del discurso político, sino que es un componente de las prácticas de gobierno, que en el cotidiano son parte de las acciones inmediatas y es allí donde se dan muchas de las características antes escritas (p. 249).

La participación ciudadana se consolida mediante la intervención de la ciudadanía en los procesos decisorios de la administración pública, para lo cual es necesario la apertura de espacios de participación, con normas claramente establecidas que rijan las relaciones de los actores que se involucran en este proceso; “se trata de que la ciudadanía no sólo ejerza sus derechos políticos a través del voto y luego delegue en los representantes de los partidos políticos la toma de decisiones, sino que se involucre en diferentes grados y etapas en el

ejercicio de gobierno, a fin de otorgar mayor eficacia a las decisiones públicas” (Ziccardi, 2004, p. 246).

El ámbito local permite establecer una relación cualitativamente mejor entre representantes y representados. Por lo tanto, el desafío de los gobernantes locales es ser capaces de crear un escenario que favorezca la interacción y el establecimiento de consensos entre los diferentes actores de este espacio local; para lo cual deben “promover la construcción de redes de actores en torno a problemas públicos, es decir, redes de política pública local; implica también fortalecer el capital social, movilizar a la ciudadanía” (Cabrero, 2004, p. 118). Además, deben tener la capacidad de articular convergencias en el momento propicio, es decir, “capacidad para generar una acción pública de alta intensidad” (p.118).

2.1.3 Clasificación de la participación Ciudadana atendiendo a los medios para su ejercicio: Participación autónoma y participación institucionalizada.

La participación ciudadana puede ser autónoma o institucionalizada (Ziccardi, 1998). La primera es la que se organiza en la sociedad misma, sin regulación de las instituciones gubernamentales; la segunda es la que se rige legal y normativamente “la participación institucionalizada es aquella que está reconocida en las leyes y reglamentos de la ciudad” (Ziccardi, 2004, p. 249).

El ejercicio de la participación ciudadana se relaciona con la defensa de intereses específicos que surgen dentro de la sociedad civil. Por lo tanto, es necesario que se forjen organizaciones sociales autónomas que actúen en representación de esos intereses, que se les reconozca oficialmente y que se establezcan canales que les permitan tener una relación con

el Estado; estas son condiciones imprescindibles para el ejercicio de la participación. A su vez, para que esas organizaciones sociales se puedan constituir, es necesario que el Estado garantice el ejercicio de los derechos intrínsecos a la calidad del ciudadano: derecho a organizarse, a celebrar reuniones, a pertenecer a partidos políticos, a acceder a la información etc., y le brinde a sus integrantes la oportunidad de actuar como actores políticos, “la preexistencia de un tejido social capaz de generar interlocutores con el Estado y de asumir los espacios posibles de poder, constituye un elemento central para viabilizar cualquier esfuerzo que se emprenda en este campo” (Cunill, 1991, p. 205).

La participación en espacios autónomos se ejerce colectivamente mediante asociaciones de vecinos, de padres, de mujeres, de madres comunitarias, de grupos étnicos, de jóvenes, culturales, deportivas, ambientales, los sindicatos, los partidos políticos, las organizaciones profesionales, entre otras. Villarreal (2012) afirma que la participación ciudadana suele practicarse mediante este gran espectro de mecanismos no convencionales o autónomos que propende avivar en los ciudadanos un espíritu cívico. Sin embargo, para que los mecanismos de participación funcionen, se requiere que haya confianza mutua entre los actores sociales y en las reglas del sistema democrático, esa confianza se edifica siempre y cuando haya sentido de pertenencia a una comunidad política y social.

Cuando se reconoce a la democracia como la forma más viable para gobernar, su deficiencia es que no tiene resuelto el asunto de la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones públicas. El problema no parece estar resuelto con el voto porque este no garantiza un vínculo eficaz entre representados y representantes; de hecho, suele devenir un distanciamiento entre ambos luego del proceso electoral. Entonces, debido a la importancia de incluir a la ciudadanía en el diseño e implementación de las políticas sociales, para que la

actuación del Estado se torne eficaz y se arrojen mejores resultados, es necesario la creación de canales y espacios de participación que permitan una relación más directa entre el gobierno y los ciudadanos (Ziccardi, 2004).

Los espacios institucionalizados de participación ciudadana se constituyen frecuentemente en consejos, comisiones o comités, y se perciben generalmente como medios del ejecutivo municipal que permiten conocer las demandas y opiniones de la población y recibir su apoyo directo (Cunill, 1991). Estos órganos se crean generalmente con fines consultivos o de fiscalización y algunos se insertan dentro de la propia estructura de la administración con fines resolutivos, permitiéndoles a los ciudadanos participar en la formulación de las políticas públicas. En este sentido, la participación ciudadana “serviría para mejorar la calidad de las políticas y decisiones públicas con un propósito mayor: la ampliación de los espacios públicos para reforzar los derechos de ciudadanía” (Mariñez, 2009, p. 19). Ziccardi (2004) sostiene que las energías, el tiempo y la intensidad participativa son elementos que varían entre ciudadanos y se ejercen desigualmente. Por lo tanto, cuando se crean los espacios de participación ciudadana es necesario definir una serie de estrategias que hagan posible reforzar el sector asociativo, involucrar al ciudadano no organizado y propender hacia una cultura más participativa.

Dentro de los espacios institucionalizados de participación se encuentran los que pretenden articular a los ciudadanos en la planeación territorial, como el Consejo de planeación local y el Consejo consultivo de ordenamiento territorial; los que se crean con una lógica sectorial, como los Consejos de Política Social y los consejos de cultura; y los que se orientan a la defensa de grupos poblacionales y de derechos humanos, como el comité para

población víctima de la violencia, el consejo de juventud, consejo de discapacidad, la mesa de primera infancia y adolescencia, entre otros.

Las condiciones del ejercicio de la participación y las características de la institucionalización de la misma se constituyen en dos factores fundamentales para que esta pueda incidir en la renovación del aparato estatal. Primero, la participación ciudadana “exige como condición indispensable la preexistencia de un régimen democrático donde la lucha por proyectos sociales y/o por intereses se realice de acuerdo a las reglas de la competencia política y donde los derechos consubstanciales a la condición de ciudadano estén plenamente garantizados” (Cunill, 1991, P. 179). Segundo, para evaluar la participación ciudadana es necesario constatar que esté vinculada en los procesos de decisión de la Administración Pública, sobre todo en aquellos espacios donde desempeñe la función de intervenir en las decisiones para que sean tomadas en cuenta (Cunill, 1991). De no efectuarse esto, se puede afirmar que la participación ciudadana sería irrelevante.

En Latinoamérica se ha avanzado significativamente en la institucionalización de diversas figuras y escenarios de participación en el aparato estatal, lo que ha permitido disminuir los espacios ocasionales dominados por la discrecionalidad de las autoridades gubernamentales (Cunill, 2008). Sin embargo, Olvera e Izunsa (2004) afirman que en América Latina se asumió el discurso de la participación ciudadana, pero que su ejercicio no fue real, que era más una simulación de apertura estatal a la ciudadanía, donde no se reflejaba en el mejoramiento del desempeño gubernamental, sino que se buscaba era la legitimación de decisiones previamente adoptadas por la burocracia estatal.

Además de ser necesaria la existencia de espacios formales e institucionales de participación, es necesaria la existencia de aquellos espacios informales que sin ningún tipo

de restricciones expresan la diversidad de identidades y visiones, y discuten abiertamente sobre los intereses colectivos; de la existencia de estos espacios depende la existencia de los espacios públicos formales (Habermas, 2005). De esta forma, se puede impedir que los espacios formales de participación sean dominados por el Estado y se desunen de las necesidades sociales, se trata entonces de una relación basada en la corresponsabilidad más no en la subordinación. La relación gobierno- sociedad civil que se propone requiere de personas organizadas y asociadas, que sin ser cooptadas por el aparato público, se les reconozca como interlocutoras válidas en los procesos de formulación de las políticas públicas (Villarreal, 2010).

Olvera e Izunsa (2004) sostienen “el discurso de la participación se funda en el concepto de sociedad civil, entendida ésta como una serie de asociaciones orientadas al bien público, con capacidad de representación ciudadana y dotadas de una legitimidad fáctica, social (p. 338). Sin embargo, existen muchas limitantes para que los ciudadanos se asocien autónomamente y ejerzan la participación en las políticas públicas, algunas de ellas se deben a la democratización del régimen y otras a la democratización de la sociedad, última que hace referencia al “grado de difusión de los principios democráticos en el conjunto de las relaciones sociales” (Vargas, 2008, citado por Villarreal, 2009b).

Además de la participación ciudadana autónoma e institucionalizada, enmarcadas ambas dentro de la democracia participativa, se disponen otros mecanismos de participación ciudadana, en el marco de la democracia directa, estos son: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato (Constitución Política de 1991, Ley 134 de 1994). Los mecanismos de democracia directa están diseñados para abarcar la participación del mayor número de ciudadanos posibles,

independientemente de que estén informados, preparados u organizados, la participación aquí es de carácter individual y pretende vincular a todos los miembros de la comunidad en el proceso de toma de decisiones (Font, 2004).

El presente estudio se centra en la participación ciudadana con un enfoque político, promovida de forma autónoma o ejercida en los espacios institucionalizados para tal fin.

2.1.4 Factores asociados en el ejercicio de la participación ciudadana

Joan Font (2004) hace alusión a una serie de factores que se conjugan al momento de ejercer la participación ciudadana, que pueden de una u otra forma promoverla o inhibirla. Este autor manifiesta que es imposible pensar en un pasado donde se promoviera y ejerciera la participación ciudadana aunque se registran algunas experiencias en un determinado momento en el que se identifica a ciudadanos con burguesía. Ese ciudadano burgués que se dedicaba a dirigir sus negocios y disponía de tiempo suficiente para mantenerse informado, dialogar sobre los temas políticos o sociales e involucrarse en el proceso de toma de decisiones. Lógicamente, aquellas personas que trabajaban 50 hora semanales o aquellas que se dedicaban a los interminables quehaceres del hogar, o aquellas otras que cuidaban niños, no podían participar; quizás, podían llegar a informarse de los temas públicos. Actualmente, ese ciudadano burgués es casi inexistente y de los ciudadanos del hoy se espera que continúen informándose y participando, y trabajen, e incluso que cuiden a sus hijos y se dediquen a los oficios del hogar.

Las primeras investigaciones en este campo confirmaron lo que era de imaginarse: ese ciudadano informado y participativo hacia parte de una población muy mínima en las sociedades occidentales, porque para la mayoría de los ciudadanos no representaban una

prioridad los temas públicos. Los ciudadanos con esta actitud desinteresada no hicieron más que asumir una postura expectante frente a los asuntos públicos, los cuales eran tratados por un sector mínimo de la sociedad que se dedicaban a la vida política de la comunidad.

Anteriormente, cuando se empezó a implementar el sistema de elección popular, la mayoría de las personas tenían solo estudios de primaria, lo que acrecentó la brecha entre esta gran mayoría y una minoría de elites políticas que disponían de la información y los conocimientos que necesitaban recibir los ciudadanos para movilizarse y votar. Sin embargo, este panorama ha mejorado considerablemente gracias a la generalización de la educación secundaria, el acceso de muchas personas a la universidad y el trabajo que han realizado los medios de comunicación de masas. Lo anterior ha permitido trascender a una “movilización cognitiva” protagonizada por aquellos ciudadanos que ya no se conforman con asumir un papel pasivo, sino que demandan acciones que impliquen mucho más que reelegir o reemplazar las elites políticas cada cuatro años.

Ahora el espectro de temas a tratar en el debate público ha aumentado y esto dificulta que se encuadre al ciudadano en el tradicional esquema de interesados o desinteresados por los asuntos públicos. Cada vez es más difícil hallar ese ciudadano informado que participa en todos los ámbitos precisamente por el amplio conocimiento que posee lo cual le permite hacerlo. Pero además, es más difícil encontrar ciudadanos completamente desinformados para los que la política sea extraña o incomprensible. Font (2004) sostiene que en cambio “ante mayor información y capacidad de procesarla por un lado, y una política más amplia y compleja por el otro, crecen los que se han llamado «públicos temáticos»” (p.25), esto hace referencia a aquellas personas que se informan y participan activamente en determinados asuntos políticos, pero no se interesan en otros campos y por lo tanto asumen una posición

de simple espectadores en ellos. Esto significa que el comportamiento electoral, la participación en determinados ámbitos y la actividad asociativa de las personas, se constituye atendiendo a sus áreas de interés, restándole importancia a las demás.

Atendiendo a lo anterior, los públicos temáticos constituyen una nueva forma de abordar la política “mucho más allá de técnicos y políticos, en tanto que contamos con un considerable núcleo de ciudadanos que pueden rivalizar con ellos en información y competencia en su ámbito de interés” (Font, 2004, p. 26).

Un gran obstáculo para el ejercicio de la participación ciudadana es el incremento de la complejidad de las temáticas y el funcionamiento de la vida política, y aunque también hay ciudadanos más preparados, pareciera que “las decisiones políticas quisieran mantener cierta distancia respecto al ciudadano medio” (Font, 2004, p. 27), debido a que el proceso de toma de decisiones demanda estar cada vez más informados y preparados. Ramírez (2015) asegura que la capacidad subjetiva de participar está ligada al nivel de educación del individuo. Por lo tanto, aquellas personas que gozan de conocimiento político gracias a la lectura y su nivel educativo, tienden a ser más participativas que aquellas que no poseen ningún nivel de estudio.

Otro factor que limita considerablemente el ejercicio de la participación del ciudadano medio es el tiempo. Este es un recurso finito y escaso al que se le debe otorgar gran respeto y valor al momento de promover la participación; es decir, se debe propender hacia la satisfacción del ciudadano por haber participado, mas no generarle la sensación de que ha actuado vanamente o ha desperdiciado su tiempo. Además de este recurso, hay otros factores que influyen en el involucramiento de los ciudadanos en los procesos colectivos, los

cuales en su gran mayoría están distribuidos de forma desigual: la formación educativa o la capacidad de acceder y de entender los asuntos políticos, el interés, la convicción de tener las capacidades para hacerlo, el sentimiento de placer o compromiso que motiva a la participación; e inclusive, la capacidad económica para poder comprar tiempo libre y dedicarlo a participar.

Milbrath y Goel (1977) sostienen que los ciudadanos activos políticamente poseen un buen nivel educativo, buenos cargos laborales y buenos ingresos económicos; recursos que les permiten gozar de tiempo libre e invertirlo en los asuntos colectivos. Verba, Schlozman y Brady (1995) manifiestan, por el contrario, que son necesarios otros recursos y que no siempre se necesitan las mismas dosis de tiempo y dinero. Para estos autores, hay otros recursos como las “habilidades cívicas”, relacionadas con competencias organizacionales y comunicativas; y el “conocimiento político”, que facilita e incita la movilización del ser hacia la política. Ramírez (2015), sostiene que los recursos socioeconómicos sin influyen en la participación.

Los recursos mencionados anteriormente no necesariamente coinciden en las mismas personas como si todo se confabulara para que estas se dedicaran a ejercer la participación ciudadana. Algunas personas pueden disponer de mucho tiempo, pero no sienten que sean competentes para desenvolverse en los temas políticos; como puede haber otras personas muy motivadas a participar y con habilidades políticas y asociativas, sin tener un avanzado nivel de formación. Font (2004) sostiene que algunos recursos facilitan la adquisición de otros, como por ejemplo el dinero, que permite comprar tiempo, o la educación, que permite adquirir destreza política; y esta distribución social desigual termina generando desigualdades políticas. A esto se debe que unas personas participen más que otras, que

generalmente sean los mismos sectores los que lo hagan y que se concentre el ejercicio de la participación ciudadana en unos pocos.

Ramírez (2015), basándose en determinados estudios y autores expone dos variables explicativas de la participación ciudadana:

-Teorías de la elección: explican los factores individuales que motivan al ciudadano a participar. Esta teoría sostiene que para los individuos es trascendental la optimización de sus recursos. Por lo tanto, afirma que la participación de los ciudadanos en la política depende de los siguientes tres elementos: el coste de participación, el beneficio que se pueda obtener y la capacidad de influir en la consecución de resultados a través de la propia participación (Anduiza y Bosch, 2004). Su fundamento radica en que la participación implica una serie de costes para el ciudadano, tales como buscar información, analizarla y luego decidir qué acciones emprender. En concordancia, es importante para él la obtención de beneficios luego de hacer esa inversión de recursos, además de sentir que va a incidir con su participación en las decisiones del aparato estatal. Esta teoría se clasifica en: teoría cognitiva y teoría de los incentivos generales. La teoría cognitiva sostiene que el acceso que poseen los ciudadanos a la información y el deseo de hacer uso de ella es lo que motiva el ejercicio de la participación. La teoría de los incentivos sostiene que la participación y los valores cívicos se ejercen si se dispone de incentivos para hacerlo: colectivos, selectivos, grupales, sociales y expresivos. Dentro de estos incentivos encontramos los incentivos de grupo que se refieren a la percepción individual de que los beneficios grupales son un buen motivo para participar. Esto se debe a que las personas consideran que mediante la acción colectiva se logran resolver los problemas sociales, por lo tanto piensan más en los beneficios grupales que en los individuales. Los incentivos expresivos hacen referencia a los sentimientos emocionales o

afectivos de las personas hacia la sociedad; lo que significa que algunas personas se animan a ser buenos ciudadanos cuando experimentan sentimientos afectivos por su país.

- **Teorías estructurales:** hacen referencia a la estructura de oportunidades que influyen en la participación ciudadana. Se clasifican en: a) Teoría del voluntarismo cívico, b) Teoría del capital social, y c) Teoría de la Justicia y la equidad social. La teoría del voluntarismo cívico se resume en las siguientes ideas: *los ciudadanos no participan porque no pueden, porque no quieren o porque no se les ha pedido*. La primera razón se atribuye a factores de tiempo, dinero y aptitudes cívicas; la segunda se debe a la percepción que tienen las personas sobre la eficacia del sistema político; y la tercera hace referencia a la invitación que se extienden entre ciudadanos para participar. De acuerdo a esta teoría, las personas con recursos participarán más. La teoría del capital social sostiene que la confianza entre las personas es la que permite que se asocien para solucionar conjuntamente los problemas. La Teoría de la justicia y la equidad sostiene que los individuos participan motivados por el deseo de reclamar mejores condiciones sociales, las cuales consideran que están en desventaja o por debajo de las condiciones que gozan otras personas

De acuerdo a la investigación realizada por Ramírez (2015), las teorías estructurales, en especial la teoría del voluntarismo cívico y de la equidad, son las que condicionan predominantemente la participación en España. En cuanto a las variables individuales, este autor concluye que a mayor disposición de recursos individuales como: educación, interés por la política, eficacia, normas sociales cívicas, orgullo comunitario y bajos niveles de desafección política; hay una mayor disposición a participar.

2.2 Gestión Pública

El Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2007) afirma que la gestión Pública es “la capacidad de los alcaldes y funcionarios gubernamentales para ejecutar los lineamientos programáticos consignados en los planes de desarrollo” (p. 6), y que el progreso de los municipios depende en gran medida de la eficiencia de esta gestión pública. Por lo tanto, esta entidad se esmera en ofrecer lineamientos para que las prácticas gubernamentales tengan un desempeño legítimo, transparente, eficaz y eficiente.

En el ejercicio de una buena gestión pública local, es necesario que el alcalde y todo su equipo de gobierno esté comprometido con el desarrollo del municipio, además de fijar claramente los objetivos, las estrategias, los programas y los recursos para desarrollar integral, eficaz y eficientemente, las acciones requeridas para cumplir satisfactoriamente lo establecido en el plan de desarrollo.

El artículo 311 de la constitución Política de Colombia establece que el municipio- como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado- es el encargado de la prestación de los servicios que determine la ley, la construcción de obras que demande el desarrollo local, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, la promoción de la participación comunitaria, y todas las otras funciones que le asigne la constitución y las leyes. De acuerdo a esto, el municipio está encargado de ofrecer eficientemente una serie de productos y servicios para lograr satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes; y así, junto con los otros niveles de gobierno, dar cumplimiento de los fines y deberes del Estado y propender por la obtención de mayores niveles de bienestar. El DNP (2007) afirma:

El concepto de gestión pública está directamente asociado a los resultados que logre una Administración, y se ha definido como: proceso dinámico, integral, sistemático y participativo, que articula la planificación, ejecución, seguimiento, evaluación, control y rendición de cuentas de las estrategias de desarrollo económico, social, cultural, tecnológico, ambiental, político e institucional de una Administración, sobre la base de las metas acordadas de manera democrática (p.11).

De acuerdo a esto, la gestión pública debe materializarse en resultados concretos que impulsen el desarrollo del territorio y el mejoramiento de la calidad de los habitantes.

La gestión de los gobernantes se sujeta a un proceso de planificación que se consolida en un Plan de Desarrollo, lo cual se ordena en el artículo 339 de la constitución política, con el fin de que se haga un uso eficiente de los recursos y se desempeñen de manera adecuada las funciones que les ha otorgado la constitución y la ley. Con respecto al uso eficiente de los recursos, se hace referencia al establecimiento de la relación costo-beneficio y a la optimización de los elementos económicos, humanos y técnicos, en aras de obtener la mayor cantidad de productos posibles, pero haciendo un uso racional de los recursos. Además de la eficiencia, un indicador para evaluar la Gestión Pública es su eficacia; es decir, el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo (DNP, 2007).

Son elementos básicos de la estructura municipal: la alcaldía, el concejo, la personería y en algunos casos, la contraloría (DNP, 2007). Sin embargo, los gobernantes de las entidades territoriales tienen autonomía para ampliar la estructura, atendiendo al tamaño del municipio y a la especialización en la prestación de los servicios. Los actores responsables del proceso

de gestión son la Administración, la dirigencia política y la comunidad. La administración local se encarga de dirigir el desarrollo del municipio; la dirigencia política representada en el concejo Municipal, hace parte del proceso de toma de decisiones en temas estratégicos y también ejerce control político; y la comunidad participa en las acciones y decisiones públicas, además de ejercer control social.

En esta relación con la comunidad, y dentro del marco de la democracia participativa, es imprescindible la rendición de cuentas por parte de los actores encargados de la gestión pública, pues solo así se podrá ejercer control social y transmitir transparencia y confianza a los ciudadanos. Por lo tanto, la administración pública debe garantizar la información y los mecanismos necesarios para que los ciudadanos intervengan en la gestión pública, la vigilen, la evalúen y elaboren propuestas para el mejoramiento de su desempeño (DNP, 2007).

2.2.1 Antecedentes en el estudio de la Gestión Pública

En la Gestión pública concebida de forma tradicional el gobierno era autosuficiente para la formulación e implementación de las políticas en cualquier ámbito, había una estructura jerárquica y una relación vertical donde el poder lo ejercían lo que estaban en la cúspide, participaba una minoría de actores sociales en las decisiones públicas, no había una conexión entre el Estado y la sociedad, a menos, que fuera a través del sistema político y, el voto es era el único medio para que la sociedad sancionara a los políticos (Villarreal, 2009b).

Aguilar (2006) asegura que en las dos últimas décadas la Administración Pública (AP) ha sido considerada como ineficaz, negligente, irracional, ineficiente e irresponsable. Sin embargo, este mismo autor afirma que la actual AP se esmera por abandonar las nefastas prácticas de desorden financiero y suministro ineficaz de bienes y servicios vivenciadas en

las décadas anteriores, las cuales terminaron deteriorando la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos; al igual que lucha por subsanar las deficiencias y los vicios del pasado político y administrativo.

Los años ochenta estuvieron marcados por una crisis fiscal y política. La AP del gobierno desarrollador no podía silenciar el quebranto financiero de las empresas públicas debido a la mala relación costo-beneficio que sostenían. Por otra parte, los ciudadanos reclamaban flexibilidad y apertura en los sistemas políticos para tener más acceso al poder público “en respuesta, la democratización del régimen político y la liberación de la economía fueron las estrategias que se consideraron obligadas e idóneas para superar la crisis y reconstruir en un nuevo nivel la capacidad de gobernar de los gobiernos desarrolladores (Aguilar, 2006, p. 62).

De acuerdo a lo anterior, los detonantes de las reformas administrativas que se llevaron a cabo en muchos países latinoamericanos fueron las crisis fiscales de los Estados desarrolladores y la democratización de los regímenes. A esto se suma el fenómeno de la globalización que cruzó fronteras y conectó dinámicas económicas, políticas y sociales en todo el mundo, permitiéndole ver a las comunidades políticas que sus economías nacionales hacían parte de estas nuevas dinámicas ilimitadas que difícilmente se controlaban con los instrumentos gubernamentales de política económica y social interna que venían utilizando. Todo esto desenlazó una serie de dudas con respecto a la pertinencia y eficacia del rol gubernamental que se venía ejerciendo durante el siglo XX frente al desarrollo económico y social de los países, factores que ya ahora se tornaban más complejos y por ende demandaban cambios y ajustes en el sistema, en aras de que no se tornara inoperante sino que pudiera responder satisfactoriamente a estos cambios.

El Banco Mundial por su parte se planteó la siguiente pregunta: “¿Cuál debe ser el papel del Estado, qué puede y qué no puede hacer, y cómo hacerlo?” (Banco Mundial, 1997, p. 1). Las respuestas que surgieron a partir de estas preguntas planteaban un cambio en la relación Estado- sociedad. A este cambio se le conoce como *Reforma del Estado*. Con las reformas del Estado se ha pretendido dotar a los gobiernos de las habilidades directivas necesarias para que sus sociedades puedan afrontar las nuevas dinámicas internas e internacionales, y se evite recaer en las situaciones anteriores de debilidad económica, ineficacia política y autoritarismo detestable. Estas reformas administrativas generalmente son producto de un movimiento mayor como la reestructuración de la sociedad civil, la democratización de los regímenes, la reedificación del sistema de leyes y/o de justicia o el levantamiento de una hacienda pública fuerte y sólida; y han sido una respuesta obligada a la dudosa calidad de los servicios públicos, el déficit fiscal de los gobiernos, a las malas prácticas económicas implementadas y en general, a erróneos procesos administrativos que han generado crisis y han debilitado el desarrollo de la sociedad como ha sucedido en varios de nuestros países latinoamericanos.

Estas fallas e incompetencias de los gobiernos se atribuyeron inicialmente a los errores procedimentales de la AP y a la gravedad de varios ámbitos de la gestión administrativa, lo cual fue apenas normal teniendo en cuenta que la administración abarca un cumulo de actividades directivas y operativas que diversos agentes realizan para optimizar las decisiones que la jefatura de una organización ha tomado y, en esos tiempos, ciertamente la AP tenía un desprestigio social debido a sus servicios deficientes, el abandono que le tenía a los ciudadanos y la tendencia de los políticos a atribuirle la responsabilidad a las burocracias de las faltas y los desaciertos cometidos (Aguilar, 2006). Sin embargo, era muy probable que

la ineficiencia gubernamental se debiera a formatos institucionales y prácticas políticas erróneas, por lo que no se le podía atribuir exclusivamente a su estructura y actuación burocratizada.

De todas maneras, a lo que en primer lugar se procedió fue a la reforma de la AP para intentar superar la crisis fiscal, y porque además, era imprescindible un reordenamiento drástico financiero de la misma para que el gobierno pudiera cumplir sus funciones públicas, en especial las encaminadas a atender las necesidades sociales. Por ende, el primer objetivo de la misma fue implantar una estricta dirección financiera que, teniendo en cuenta los lineamientos de la política de ajuste, procedió enseguida a tratar de incrementar los ingresos del Estado y a reducir radicalmente sus egresos superfluos que no hacían más que desfigurar el crecimiento económico. Junto a esto se exigió hacer mejor uso de los recursos públicos, suprimir las entidades y los programas innecesarios y hacer recorte de personal ineficiente y sobrante.

La reforma administrativa proyectada desde la óptica del ajuste financiero se propuso fundamentalmente el redimensionamiento el Estado; meta que logró relativamente rápido, obteniendo una disminución severa de su obeso aparato administrativo, sus empresas y su ámbitos de actuación. La necesidad del redimensionamiento se puede atribuir a fines ideológicos fundamentados en principios neoliberales o fines pragmáticos ineludibles para salir de la crisis financiera de ciertos Estados, o por lo menos contrarrestarla.

De acuerdo al informe del Banco Mundial (1995), la primera reforma administrativa caracterizada por el redimensionamiento para prever o evitar la crisis, consistió básicamente en lo siguiente: a. Disminución del campo de intervención estatal en la economía, lo cual fue posible a partir de las reformas constitucionales y legales que habilitaban la reactivación de

los mercados libres y la intervención de las organizaciones sociales como una medida alternativa para la resolución de los problemas sociales. b. Cancelación de varios organismos y programas gubernamentales y contratación de empresas privadas y organizaciones sin ánimo de lucro para la prestación de ciertos bienes y servicios públicos. c. Privatización y cierre de aquellas empresas públicas que no evidenciaron eficiencia ni justificaran la necesidad de su existencia. d. Despidos, programas de retiro voluntario y jubilaciones anticipadas para personas improductivas. e. Reorganización de las dependencias del gobierno a partir de la reducción de niveles jerárquicos, unidades de staff y divisiones operativas en aras de reducir el gasto corriente, para lo cual aparte de revisar los salarios de los cargos altos y medios, se redujeron o cancelaron políticas públicas distributivas y subsidios genéricos, se realizaron reformas al sistema de pensiones y se constituyeron precios reales de los servicios públicos.

Todo lo anterior consiguió una rápida reducción del tamaño del Estado y una modificación en la actuación gubernamental que ahora favorecía y propiciaba la descentralización de las decisiones, promovía la competencia interna entre organismos que prestaban un mismo servicio y, otorgaba poder para que terceros, empresas privadas u organizaciones sociales, desempeñaran ciertas funciones públicas (Cabrero y Peña, 2009). En definitiva, los países perseguían el tránsito de una administración centralizada y jerárquica, a una orientada por los dispositivos mercado, los resultados y la descentralización de actividades (OCDE, 1995).

2.2.2 Nacimiento de la Nueva Gestión Pública

En la segunda mitad de los años ochenta se afirmaron en varios países Latinoamericanos dos tendencias enfocadas a reconstruir la Administración Pública (AP),

con el fin de compensar y contraponer las malas prácticas fiscales y administrativas de los gobiernos pasados: el movimiento de la política pública y el movimiento de la gestión pública. El primero se enfocó en efficientizar las decisiones del gobierno; el segundo, en el reordenamiento del ente gubernamental (Aguilar, 2006).

En un inicio, el surgimiento de la gestión pública o la nueva gestión pública/ gerencia pública (NGP) proponía una política de ajuste fiscal más que una reestructuración y democratización del régimen político, ligada a la corriente anglosajona del *New Public Management* o del conocido “consenso neoliberal”, la NGP se concibió en nuestro contexto latinoamericano como un acervo de medidas y técnicas destinadas a optimizar económicamente la actividad de la AP. La NGP pretendía, además, evidenciar la inoperancia de la AP burocratizada por diversos factores como su exceso de tamaño y personal, su configuración vertical de mando, su inclinación a ser la única proveedora de todos los productos y servicios y la desproporcionalidad entre los recursos consumidos y la contribución a los ciudadanos. Para esto impulsó transformaciones en los sistemas de control interno y en la presupuestación pública, pretendiendo asegurar la eficacia económica y el máximo rendimiento en las actuaciones administrativas, a partir del establecimiento de una proporcionalidad entre ingreso y gasto público, y una mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos para contrarrestar las vergonzosas memorias de derroche y corrupción (Aguilar, 2006).

El aporte de la NGP ha sido notable y prometedor. Ha contribuido a construir en el gobierno una cultura de eficiencia económica donde la evaluación de los procesos se ha vuelto una práctica institucionalizada en las instituciones públicas, muy a pesar de que a muchos no les gustaba la idea de ser medidos y se rehusaban a la rendición de cuentas. La

nueva gestión pública pone énfasis en la rendición de cuentas no solo de los políticos sino también de los funcionarios de la administración, por medio de mecanismos técnicos y de poco carácter político, como evaluaciones internas de desempeño con indicadores cuantificables, donde el público expresa su opinión como clientes de programas y servicios específicos (Villarreal, 2009b).

El gerencialismo administrativo y la NGP podría considerarse como una respuesta favorable a muchos problemas que vivencia la AP en nuestro contexto latinoamericano, relacionados con la “eficiencia económica y calidad del servicio público”, pero no puede considerarse como la panacea a otros problemas de proceder administrativo, que de hecho son los que causan indignación y pérdida de confianza en los ciudadanos, como los relativos a la “legalidad, imparcialidad del poder público, la honestidad, la igualdad en el trato, la rendición de cuentas, la vitalidad deliberativa y participación de la esfera pública, la participación ciudadana” (Aguilar, 2006, p. 31).

Christopher Hood (1989) fue el primero en acuñar el término *nueva gestión pública* a los cambios directivos, operativos y organizativos que estaban ocurriendo en el ámbito público en muchos países en los años ochenta y que dieron inicio con las reformas administrativas de la Gran Bretaña y luego se propagaron a los gobiernos de otros países, empezando por los del Commonwealth. En el inicio, ambos términos “*nueva gestión pública*” y *gobernanza/gobernación*” pugnaban por imponerse, lográndolo finalmente el término gerencial *nueva gestión pública*, lo cual se puede atribuir a que su discurso proponía solo un cambio administrativo sin implicar cambios institucionales y políticos en la actuación gubernativa, a lo cual si hacía referencia el término de *gobernanza*, que no tuvo mayor aceptación por parecer muy exagerado para lo que en realidad se buscaba; o, porque el Estado

norteamericano y todos los de tradición inglesa estimaban intachable la institucionalidad y el proceder de sus sistema político, de tal forma que lo que ameritaba cuestionamiento era la operatividad de la AP.

En nuestros países latinoamericanos el concepto *nueva gestión pública* sigue manteniendo su carácter administrativo pero además adiciona elementos institucionales y políticos debido a las reformas que se han hecho en sus instituciones políticas “en el contexto latinoamericano, la reforma de la gestión se acompaña con el cambio de la gobernación” (Aguilar, 2006, P. 145).

Ch.Pollitt y G. Bouckaert (2000) expresan “la reforma de la gestión pública consiste en cambios deliberados en las estructuras y los procesos de las organizaciones del sector público con el objetivo de que funcionen mejor” (p.8). Por lo tanto, la reforma de la gestión pública ha promovido un estilo alternativo de organización, dirección y operación de los gobiernos, significativamente diferente al de los años XIX o XX, que puede considerarse posburocrático en la medida que el poder no está centralizado y ha cambiado el rol y los incentivos de los otros actores.

En la administración pública gerencial, a diferencia de la administración burocrática, el Estado trata al ciudadano como cliente, se hace hincapié en los resultados mediante los contratos de gestión, se establece una división entre los entes centralizados encargados de diseñar las políticas públicas y las unidades descentralizadas encargadas de ejecutarlas, se da la prestación de bienes públicos divisibles o de mérito por parte de empresas y organizaciones no gubernamentales y se subcontrata a terceros para la realización de actividades de apoyo (Prats, 2004).

En definitiva hay muchos elementos que diferencian la NGP con la administración tradicional de carácter burocrático: a) la reducción del tamaño del sector público, con el propósito de aligerar la administración y encaminarla a objetivos específicos; b) el acento en hacer más eficaz y eficiente las acciones administrativas, para lo cual se hacen reformas en los reglamentos y las actuaciones, prestando mayor atención en el resultado y el desempeño del personal público, que en los procedimientos; c) la descentralización de las organizaciones; d) el establecimiento de instancias administrativas públicas autónomas y descentralizadas; e) la participación de organismos privados y sociales en la implementación de las políticas públicas o la prestación de servicios públicos, bien sea de forma independiente o en conjunto con el gobierno; f) el empleo de sistemas y estímulos de mercado en la prestación de los servicios públicos con el objetivo de que los usuarios los escojan libremente, y las unidades y el personal se esmeren por hacer eficiente la prestación de los mismos; g) atención en las expectativas de la comunidad política y los usuarios de los servicios públicos para articularlas en la formulación y realización de los procesos de servicio, lo que conduce a incluir formas de gestión de calidad; h) la adopción de sistemas de evaluación del rendimiento de la AP, instituyendo los estándares e indicadores de desempeño convenientes y haciendo uso de las tecnologías de información (Kettl, 2000; Olías de Lima, 2001; Pollitt, 2000) .

2.2.3 Dimensiones de la Gestión Pública

- **Imagen:**

Como se había planteado anteriormente, las actuales administraciones públicas se esfuerzan por superar esas malas prácticas de desorden financiero, político y administrativo, y la mala gestión en la prestación de los bienes y servicios. Además, se esmeran por cambiar

esa imagen de negligencia, ineficiencia e ineficacia que habían proyectado por mucho tiempo a los ciudadanos, lo que conllevó a que estos generaran desconfianza hacia los gobiernos. Para esto se han implementado distintas estrategias como la práctica permanente de la rendición de cuentas y las evaluaciones internas de desempeño de los funcionarios, las cuales propenden por un mejoramiento continuo que posibilite una gestión más eficaz y la creación de una imagen favorable en los ciudadanos frente a dicha gestión.

Para proyectar una imagen favorable es necesario que los actores encargados de la Gestión pública evidencien resultados de desarrollo en el territorio y un mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes. También, es imprescindible que la comunidad los perciba como personas idóneas para el cargo, responsables y comprometidas con su labor. Acorde con la Carta Iberoamericana de la Función Pública (2003), la profesionalización de la función pública es un requisito fundamental para la construcción de un mejor Estado, la buena gestión pública y la gobernabilidad democrática de las sociedades actuales; y, “se entiende por tal la garantía de posesión por los servidores públicos de una serie de atributos como el mérito, la capacidad, la vocación de servicio, la eficacia en el desempeño de su función, la responsabilidad, la honestidad y la adhesión a los principios y valores de la democracia” (CLAD/UNDESA, 2003, p.3). El texto resalta que varios estudios llevados a cabo por organismos internacionales demuestran que hay una relación directamente proporcional entre “la existencia de sistemas de función pública o servicio civil investidos de tales atributos y los niveles de confianza de los ciudadanos en la administración pública, la eficacia gubernamental y la lucha contra la corrupción” (p. 3).

Finalmente, en lo que pone acento este escrito es en la idoneidad, integralidad y profesionalidad que debe haber en el recurso humano de las administraciones públicas para

la óptima prestación y funcionamiento de los servicios públicos. El DNP (2007) afirma “Para la ejecución de los servicios a cargo del municipio se debe vincular recurso humano idóneo y capacitado, pues este es el principal recurso con que cuentan las administraciones para mejorar su capacidad de gestión” (p. 68).

El gobierno local debe acentuar sus acciones en el conjunto de derechos que corresponden directamente a la oferta de bienes y servicios que, de acuerdo a lo estipulado en la Constitución y la Ley, debe proveer para asegurar “el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y los particulares” (DNP, 2011, p. 15). En concordancia con lo anterior, es necesario que las autoridades tengan presente que por ser la gestión una actividad política, deben tener capacidad de articulación con los diferentes actores que concurren en el municipio: el Concejo Municipal, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones del sector público, entre otras. También, es imprescindible que los gobernantes locales dispongan de una gran capacidad de gerencia, porque los ciudadanos, además de esperar una gestión honesta y eficiente, esperan un líder que con su gestión, promueva el desarrollo del territorio y un mejoramiento en las condiciones de vida de los habitantes. En función de esto, el alcalde debe poner mucha atención en la formulación y ejecución del Plan de Desarrollo, porque este es el instrumento que contempla todos los objetivos y las metas que espera alcanzar en su periodo de gobierno, y los programas, subprogramas, proyectos y acciones que ejecutará para su alcance. En consecuencia, el DNP (2011) afirma que la elaboración del plan de desarrollo permite hacer más efectivo el uso de los recursos.

El artículo 84 de la Ley 136 de 1994, establece que el alcalde debe ejercer la autoridad política en el municipio, ser jefe de la administración, representante legal de la entidad territorial y primera autoridad de policía en el municipio, lo cual implica que debe velar por

el funcionamiento eficaz y eficiente de todas las dependencias municipales y que debe garantizar que las personas que presten sus servicios a la entidad territorial, posean los conocimientos, los valores y las habilidades que exigen las necesidades de la función administrativa para el desempeño de un buen gobierno (DNP, 2011).

Aludiendo al Concejo Municipal, es una corporación político-administrativa de carácter colegiado, que cumple un papel fundamental en la administración y gestión Pública, el ejercicio de un buen gobierno y el desarrollo del municipio. En el ámbito local, se constituye como uno de los espacios más importantes para el ejercicio de la democracia representativa, en la medida que actúa como intermediario entre el ejecutivo municipal y los ciudadanos, siendo el principal portador de los intereses de estos últimos.

Los miembros del Concejo son elegidos mediante elección popular, lo cual significa que los ciudadanos les delegan el poder a ellos para que tomen las decisiones en nombre de todos. Este es un voto de confianza que estos miembros deben valorar, cumpliendo a cabalidad las funciones propias de su investidura y velando por el interés no solo de aquellos que lo eligieron, sino de toda la sociedad en general. Además de velar por el bienestar colectivo, los miembros del concejo están en el deber de controlar políticamente a los gobernantes, para lo cual es necesario que los ciudadanos elijan personas correctas e idóneas, que ejerzan liderazgo en sus comunidades y que se interesen y comprometan con el bienestar de toda la población (DNP, 2011).

Para que los ciudadanos construyan una imagen favorable de los miembros del concejo, esta corporación debe dar cumplimiento a sus funciones, las cual están orientadas a “Asegurar el buen uso de los recursos públicos; asegurar la eficiencia, la eficacia, calidad y

equidad en la prestación de servicios; garantizar la participación ciudadana; garantizar el buen desempeño de las funciones de la administración y fomentar la transparencia y las buenas prácticas administrativas” (DNP, p. 144).

Es importante que los ciudadanos perciban a las autoridades públicas comprometidas, con vocación de servicio y con un liderazgo político que encamine al territorio hacia el alcance de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo y hacia la obtención de un bienestar general. El DNP (2007) manifiesta que un liderazgo político efectivo se caracteriza por ser honesto y democrático. Con honesto se refiere a que los alcaldes y concejales deben ser conocedores de los recursos que disponen y las posibles alianzas que pueden realizar, para no comprometerse con metas inalcanzables; es importante que estos siempre les hablen con la verdad a los habitantes del municipio. Además, la honestidad implica transparencia en el accionar, para lo cual es imprescindible que estos actores gubernamentales hagan rendición de cuentas ante los organismos de control y toda la ciudadanía en general, estableciendo mecanismos de comunicación e interacción con los ciudadanos que contribuyan a evitar la corrupción.

Cuando se hace alusión a que el liderazgo político debe ser democrático, el DNP se refiere a la creación de espacios de dialogo, participación y concertación, donde los actores locales puedan conocer, intervenir y aportar en las decisiones que afectan a toda la comunidad. Finalmente, la consolidación de un liderazgo político efectivo y de amplia visión es “un reto que demanda el desarrollo de habilidades del alcalde y los concejales para conducir a los diferentes actores del territorio hacia la búsqueda de respuestas concretas y consensos que contribuyan a solucionar los problemas y el aprovechar las oportunidades” (DNP, 2007, p. 67).

- **Eficiencia:**

El detonante de los defectos y vicios de la Administración Pública (AP) en Latinoamérica fue su funcionamiento bajo el modelo jerárquico de la administración, Burki y Perry (1998) aseguran “el modelo jerárquico no ha funcionado bien. De hecho, el diagnóstico es que las administraciones públicas de la región poseen un control excesivo” (p. 142); además, “los diferentes estudios ilustran un cuadro anecdótico ya conocido de una administración pública demasiado centralizada, regulada, rígida y desmotivada” (p.143). Aguilar (2006) afirma que por esas características “su arreglo abre fácilmente la puerta a todos los defectos de la relación entre principal y agente y, por consiguiente, condena a los gobiernos a la ineficiencia y deshonestidad (p.193).

En su momento el modelo jerárquico fue considerado como la vía más adecuada para contrarrestar la intromisión política, la falta de profesionalismo y, en general, las prácticas corruptas que predominaban en casi todos los Estados del siglo XIX; además, era considerado como requisito fundamental para la eficiencia y honestidad de los entes gubernamentales. El modelo jerárquico planteado por Max Weber había funcionado bien en los países avanzados porque había conseguido que los políticos y funcionarios enmarcaran sus acciones dentro del interés público y se desempeñaran profesionalmente. Sin embargo, el modelo jerárquico ya no resultaba ser tan efectivo debido a que las funciones y actividades del aparato gubernamental se han expandido significativamente, arrojando como consecuencia la aparición de “grandes organizaciones públicas difíciles de controlar y más fáciles de ser “capturadas” por los intereses especiales. Esto ha conducido a ineficiencia e inflexibilidad, en tanto que los ciudadanos, más desconfiados del Estado que en tiempos pasados, han expresado una creciente insatisfacción” (Burki y Perry, 1998 p. 139).

Entonces, los países desarrollados se vieron en la necesidad de promover cambios en el modelo jerárquico de su AP, introduciendo la propuesta de un nuevo modelo que se orientara hacia el desempeño, el cliente y el mercado, además de promover la delegación en la toma de decisiones. Básicamente consistía en la inclusión de incentivos de mercado en la actuación administrativa de los gobiernos, lo que implicaba la realización de actividades públicas por parte del mercado y el fomento de la competitividad dentro del mismo sector público a partir de algunas estrategias como la contratación con prestadores externos del servicio. Además, proponía acentuar la atención sobre el producto más que en los insumos, en el resultado más que en el proceso y; otorgarle mayor responsabilidad y exigirle mayor transparencia a los funcionarios prestadores de servicios públicos (para lo cual era fundamental el uso de los sistemas de información).

Las reformas Estatales a las que se han hecho alusión se promovieron con la finalidad de reducir la ineficiente y extensa burocracia que había en las administraciones públicas, bajo el supuesto de que el problema no residía en los burócratas, es decir, en las personas encargadas del sistema administrativo, sino en el mismo sistema “gente buena atrapada en sistemas malos” (Gore, 1993, p. 2). La ineficiencia era producto de tres factores. El primero, las extensas burocracias, Gore (1993) afirmaba “Desde los años treinta hasta los años sesenta construimos grandes burocracias verticales, centralizadas para llevar a cabo los asuntos públicos, que fueron modeladas conforme a las estructuras corporativas de la época” (p.3). El segundo, la monopolización de los servicios, los cuales estaban a cargo de agencias gubernamentales que no se esforzaban por mejorar la prestación del mismo pues tenían prisioneros a los ciudadanos; esto conllevó a la ineficacia, ineficiencia y corrupción “el solo hecho de que los monopolios se caractericen porque tienen una población de consumidores

cautivos, influye en que carezcan de incentivos para contener sus costos y para aumentar la calidad de sus prestaciones” (Cunill, 2004, p.66). El tercero, la politización de la AP, que se esfuerza por evitar el escándalo y para eso adopta controles que intimiden y atemoricen al personal “el resultado es una cultura del miedo y la resignación. Para sobrevivir los empleados mantienen un bajo perfil... siguen las reglas, pasan la responsabilidad a otros y mantienen sus cabezas agachadas” (Gore, 1993, p. 5).

La solución radicaba entonces en centrarse en el ciudadano como usuario que demanda un buen servicio. Por lo tanto, debían diseñarse programas y procesos que apuntaran a esta dirección, reduciendo los gastos e implementando otro tipo de cambios como la descentralización de la administración, el establecimiento de asociaciones entre el gobierno y otros actores externos para la realización de actividades públicas, la adopción de sistemas de evaluación de desempeño para los funcionarios públicos y las unidades descentralizadas y, la supresión de unidades, programas y personal innecesario.

Con esto ya se estaba dando paso a un nuevo modo de gerenciar el sector público, que ahora se enfocaba en brindar un servicio de calidad y satisfacer las expectativas de los ciudadanos, los cuales servían a su vez de referencia para definir los estándares del servicio y los atributos del bien que se ofrecía.

La declaración OCDE (1995) acentúa en que “ha surgido un nuevo paradigma de la gestión pública, que se centra en la promoción de una cultura orientada al desempeño en un sector público menos centralizado” (p.8). Desde esta óptica, el centro de las reformas y el nuevo enfoque son: *el desempeño y la descentralización*. Las reformas se deben a que el estilo directivo tradicional es ineficaz ante las nuevas demandas sociales exigentes y diversas

que han surgido a partir de la transformación en las dinámicas económicas, y la independencia y autonomía que han generado los grupos de la sociedad civil, lo cual ha producido la necesidad de redireccionar el rol gubernamental (OCDE, 1995).

La meta del nuevo paradigma OCDE es el alto rendimiento de los programas, las unidades y los entes gubernamentales, para lo cual se deben establecer indicadores de productividad, desempeño e impacto social. Además, se deben descentralizar interna y externamente las decisiones del organismo público, eficientizar la prestación de los servicios públicos para satisfacer a los usuarios y responder a sus expectativas, hacer uso de las tecnologías de la información e introducir incentivos de mercado o cuasimercado para promover la competencia.

La Constitución Política en su artículo 339 establece que las entidades territoriales deben “asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la Ley” y; el DNP (2011), por su parte, afirma que la gestión Pública debe responder eficaz y eficientemente en la reducción de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, para lo cual, la prestación de los servicios y productos debe ser en condiciones de calidad. De acuerdo a lo anterior, el progreso de los municipios depende en gran medida de la eficiencia de la gestión pública (DNP, 2007), porque para dar cumplimiento a los objetivos y las metas trazadas, se deben optimizar todos los recursos, en aras de alcanzar buenos resultados y un excelente impacto, haciendo un uso racional de los insumos que están a disposición. El artículo 356 de la Constitución Política señala lo siguiente:

“Los recursos del Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios se destinarán a la financiación de los servicios a su cargo, dándole prioridad al servicio de salud y los servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y media y servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, garantizando la prestación y la ampliación de coberturas con énfasis en la población pobre, garantizando la prestación de los servicios y la ampliación de cobertura”.

Queda claro que no basta con mantener la continuidad en la prestación de los servicios, sino que es necesario la ampliación de la cobertura de los mismos y, además, el trabajo continuo en el aumento de su calidad; lo cual también se evidencia en lo establecido por el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (CONPES 140 de 2011), que establecen los principales objetivos en los que se debe enfocar la gestión de las entidades territoriales, algunos de ellos son: el aumento de la cobertura bruta en educación básica (preescolar, básica primaria, básica secundaria); el mejoramiento de la calidad educativa y el fortalecimiento del desarrollo de las competencias; la reducción de la mortalidad infantil y materna; el aumento del porcentaje de personas que practican alguna actividad deportiva; el incremento de la cobertura y calidad de los servicios de acueducto, alcantarillado, gas natural y energía eléctrica; el mejoramiento de la seguridad vial y el acceso al transporte; el incremento de la oferta de vivienda nueva, entre otros.

- **Eficacia:**

De acuerdo al DNP (2007), el objetivo del municipio debe ser la obtención de mayores niveles de bienes y servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus

habitantes y; “el concepto que relaciona los resultados alcanzados con las metas propuestas –en el Plan de Desarrollo– es la EFICACIA” (p.64). Atendiendo a esto, la eficacia hace alusión a la capacidad de la entidad para dar cumplimiento a las metas planteadas en el plan de desarrollo.

En el artículo 311 de la Constitución Política se establece que el municipio es la entidad fundamental de la división político administrativa y tiene a su cargo la prestación de los servicios que determine la ley, la promoción de la participación comunitaria, el progreso y desarrollo local y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. El fin último del municipio acorde con lo estipulado en la C.P., es satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos para lograr un desarrollo permanente y sostenible, para lo cual debe:

“Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y en concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y la nación, en los términos que defina la ley” (DNP, 2011, p. 162).

En el caso concreto del Sistema General de Participaciones, se estipula que se les debe garantizar a los habitantes la prestación de los servicios y la ampliación de sus coberturas. Entonces, atendiendo a lo anterior, se puede afirmar que la Gestión Pública debe traducirse en resultados concretos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y la Ley.

Para poder alcanzar resultados específicos, la administración local debe fijarse unas metas determinadas y una ruta de acción, este proceso de planificación y ejecución de

acciones debe ser evaluado constantemente para determinar su efectividad y tomar los correctivos que sean necesarios. Esas metas se establecen en el Plan de Desarrollo, al igual que las políticas, los programas y los subprogramas a implementar para el alcance de las mismas; y deben ser cuantificables para poder hacerle seguimiento, control y evaluación a los resultados de la gestión (DNP, 2007). Por lo tanto, en el Plan de desarrollo se consolidan los compromisos adquiridos en el Programa de Gobierno y a partir de ahí se constituye en la guía inspiradora de cada una de las actuaciones gubernamentales y en el instrumento de planificación que dirige la gestión de los gobernantes. La planificación es el primer momento de la Gestión, en el cual se identifican las deficiencias y los problemas que posee el municipio, y se trazan las estrategias y líneas de acción para atender esas problemáticas y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

En el Plan de Desarrollo del Municipio de Sincelejo 2016-2019, se plantea un objetivo para cada uno de los programas a implementar, ellos son: el aumento de la calidad educativa; el mejoramiento de las condiciones de Vida y Salud de la Población; el aumento de la protección a las personas mayores que se encuentren desamparadas y que no gocen de una pensión, que vivan en la indigencia o en pobreza extrema; la atención integral, oportuna, sostenible y duradera en los niños, las niñas y los adolescentes; la garantía a las víctimas del conflicto armado a la asistencia, atención y reparación integral; el desarrollo de habilidades y competencias en las personas que están en proceso de reintegración para favorecer su sostenibilidad en la legalidad; el desarrollo en los grupos étnicos de estrategias, políticas, planes, programas y proyectos de inclusión social y restablecimiento de derechos; la promoción, protección y restablecimiento de todos los derechos de las personas con discapacidad; el fortalecimiento del proceso inclusivo y equitativo de la mujer en los ámbitos

sociales, familiares, políticos y económicos; la satisfacción de las necesidades de los habitantes en el campo del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación extraescolar; el fortalecimiento de los espacios de participación juvenil; el mejoramiento de las oportunidades de los jóvenes beneficiarios del programa “jóvenes en acción” en el mercado laboral; el mejoramiento de las condiciones de vida de la población infantil, mujeres gestantes y familias en riesgo; el mejoramiento de las oportunidades de las familias beneficiarias del programa “Mas Familias en acción del PS” mediante el apoyo económico; la reducción de los índices de pobreza extrema; la prestación de los servicios públicos con calidad; el desarrollo de estrategias que posibiliten una mayor empleabilidad, emprendimiento y generación de ingresos en la ciudad; la promoción a nivel nacional e internacional de los atractivos turísticos de Sincelejo; la contribución al cierre de brechas económicas y sociales, a través de la generación de capacidades para el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación; el mejoramiento de la prestación del servicio de transporte público colectivo; la garantía de una movilidad segura y eficiente; la garantía de la sana convivencia y la seguridad; el mejoramiento del sistema vial; la contribución al desarrollo territorial de forma armónica, sostenible y planificada; el desarrollo de una gestión compartida y coordinada frente a los efectos de los fenómenos ambientales y el cambio climático, para mejorar la calidad de vida de las poblaciones y comunidades en riesgo; la formulación, gestión y desarrollo de proyectos y programas de índole cultural que permitan la articulación de diferentes sectores y culturas; la salvaguarda de la participación ciudadana en los asuntos públicos de carácter local; el desarrollo de estrategias de ordenamiento y gestión ambiental; el empoderamiento territorial, económico, ambiental y social de la zona rural de Sincelejo; el establecimiento de políticas tendientes a brindar soluciones a los requerimientos de

servicios públicos básicos de la población víctima de la violencia que se asienta en el municipio.

En lo anterior se puede observar que la actual administración pone especial atención y enfoca sus políticas en la infancia y adolescencia, el adulto mayor, las personas con discapacidad, la mujer, las víctimas de la violencia, los grupos étnicos, el ámbito de movilidad y transporte público, el sector educación, el sector salud, el sector deportivo y cultural, la seguridad ciudadana y la prestación con calidad de los servicios públicos.

La Carta Iberoamericana de la Función Pública (2003), establece los elementos que se deben concentrar en las organizaciones públicas para que sea eficaz el funcionamiento de las mismas:

El diseño estructural de las organizaciones públicas deberá incorporar, para hacer posible una gestión eficaz de los sistemas de función pública, los siguientes elementos básicos:

- Instancias especializadas en la gestión del empleo y los recursos humanos, investidas de la autoridad formal correspondiente al valor estratégico de su función y caracterizadas por una triple orientación a:
 - la racionalidad en el manejo de los recursos,
 - la innovación de las políticas y prácticas de gestión de las personas, y
 - al apoyo y asesoramiento a los directivos de línea para el desempeño de sus funciones como gestores del personal a su cargo.
- Una orientación que garantice a la dirección de los centros y las unidades productoras de los servicios públicos las atribuciones de gestión necesarias

para gestionar a su personal, con los debidos sistemas de control y responsabilización. (CLAD/UNDESA, 2003, p.29-30).

De acuerdo a lo anterior, es imprescindible que el alcalde, como encargado de la administración local, asuma funciones de planificación, organización y control de todo su equipo de trabajo y de la entidad territorial que dirige.

Haciendo referencia al control interno de las entidades, la administración municipal debe, en el ejercicio de sus funciones y procesos administrativos, adoptar los controles pertinentes que le permitan monitorear la gestión, en aras de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales que adquirió con la comunidad. Lo anterior se hace con base a los siguientes fundamentos esenciales:

El autocontrol entendido como la responsabilidad que tienen los servidores públicos en el desarrollo de sus funciones con eficiencia, eficacia y efectividad; la autorregulación entendida como la responsabilidad que tiene la entidad de reglamentar y formalizar las diferentes políticas y actuaciones administrativas y la autogestión entendida como la responsabilidad que tiene la entidad para cumplir con la finalidad social del Estado, para la cual fue creada constitucionalmente (DNP, 2007, p. 31).

Para hacer eficaz la gestión pública se opta por la descentralización de funciones dentro de la estructura de la administración, atribuyéndole competencias a los agentes descentralizados para decidir sobre los recursos financieros que le otorgan, motivándolos pero responsabilizándolos a la vez, porque se hace un proceso continuo de seguimiento y evaluación de sus acciones mediante un sistema pertinente de información y el

establecimiento de indicadores de desempeño que permiten la medición del mismo. Las unidades descentralizadas deben fijarse y enfocarse hacia metas claras y mensurables y elaborar sus presupuestos basándose en el principio de las “e” (eficiencia, eficacia y economía), haciendo un buen calculo entre costo-beneficio.

- **Transparencia:**

Haciendo hincapié en lo que se había manifestado con anterioridad, las actuales Administraciones Públicas se esmeran por dejar atrás las prácticas de desorden financiero e ineficiente prestación de bienes y servicios, entre otras cosas, por el deseo de recuperar la confianza de los ciudadanos, la cual fue deteriorada debido a los malos vicios de pasado político y administrativo. Son muchos los problemas del proceder administrativo que pueden causar indignación y pérdida de confianza en los ciudadanos, como los relativos a la “legalidad, imparcialidad del poder público, la honestidad, la igualdad en el trato, la rendición de cuentas, la vitalidad deliberativa y participación de la esfera pública, la participación ciudadana” (Aguilar, 2006, p. 31). Portillo (2004) afirma que en la gestión pública debe haber honestidad y claridad en cuanto a la administración de los recursos públicos, una rectitud moral intachable y una constante interacción con los ciudadanos mediante los canales de participación (Portillo, 2004).

En la actualidad, la evaluación de los procesos se ha vuelto una práctica institucionalizada en las instituciones públicas, muy a pesar de que a muchos no les gustaba la idea de ser medidos y se rehusaban a la rendición de cuentas. La nueva gestión pública pone énfasis en la redición de cuentas, no solo de los políticos sino también de los funcionarios de la administración, por medio de mecanismos técnicos y de poco carácter

político, como evaluaciones internas de desempeño con indicadores cuantificables, donde el público expresa su opinión como clientes de programas y servicios específicos (Villarreal, 2009b). El discurso de la rendición de cuentas es una reacción a la continuidad de las prácticas generalizadas de corrupción que caracterizan a la mayor parte de los gobiernos y a la preservación del secretismo burocrático en que se funda el poder discrecional de los políticos y de los burócratas (Olvera e Izunsa, 2004, p.340).

De acuerdo a lo establecido por el DNP (2011), es necesario que en el proceso de Gestión Pública la Administración goce del apoyo ciudadano, para lo cual se debe estipular una política de comunicación que facilite y garantice la interacción entre los gobernantes y los ciudadanos. La estrategia que se establezca debe estar enfocada a “demostrar transparencia y eficiencia en las acciones gubernamentales, generar confianza y formular reglas básicas que orienten la gestión de la información y la transferencia del conocimiento” (p. 39).

La labor del alcalde y su equipo de gobierno no es discrecional, por lo tanto las actuaciones administrativas deben ser expuestas abiertamente a la ciudadanía para que esta ejerza control y seguimiento. El DNP (2011) afirma “el flujo adecuado de información sobre la gestión pública en el territorio es una clave de transparencia, eficiencia y legitimidad en el marco del Buen Gobierno” (p.46). Son muchas las alternativas que puede convenir el alcalde con el consejo de gobierno para facilitar el flujo de información con la ciudadanía; tales como, la realización de un boletín o periódico institucional, la adopción de un programa institucional para ser divulgado por algún medio de comunicación (radio, internet, televisión y prensa), la disposición de una línea abierta o directa para atender inquietudes, la instalación en la alcaldía de un buzón donde el ciudadano pueda hacer sugerencias, quejas o reclamos,

la creación de una página web institucional que permita la interacción con la comunidad y las oficinas de atención al público. El Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones ejecuta el programa “Gobierno en Línea en las regiones”, al cual es importante que se adhieran los municipios, porque la finalidad del mismo es facilitar el acceso a las tecnologías.

El DNP (2011) establece los requisitos que debe reunir y los parámetros bajo los cuales debe ser divulgada la información por parte de las gobernaciones y alcaldías: periódica, oportuna, actualizada, útil, integral y veraz. Lo anterior indica que los gobernantes deben emitir regularmente información que les permita a los ciudadanos conocer el estado de avance de las metas, los proyectos, programas y subprogramas planteados en el Plan de Desarrollo. Esta información debe ser actualizada, con una clara relación entre las metas y los recursos empleados para el cumplimiento de las mismas, veraz y específica con respecto a los logros que no se han alcanzado y los motivos y obstáculos que impidieron la obtención de los productos deseados y debe estar estructurada con un lenguaje asequible para su comprensión, de tal forma que al analizarla permita identificar las fortalezas y debilidades en el proceso de ejecución del Plan y se puedan plantear estrategias para mejorar la gestión y los resultados. La información también debe ser enviada oportunamente al Consejo Territorial de Planeación, para que este la analice y emita conceptos. Cualquier ciudadano, en calidad de veedor o no, tiene acceso a la revisión de los contratos y ejecuciones presupuestales para las cuales se destinan recursos públicos.

Con respecto a la destinación de los recursos del Sistema General de Participaciones, el Decreto 028 de 2008 establece unos eventos que podrían afectar el uso adecuado, eficiente y transparente de los mismos, dentro de los cuales se encuentra el no envío de la información

dentro de los plazos, condiciones y formatos establecidos por el Gobierno Nacional, no entregar de forma completa y correcta la información, hacer cambios en la destinación de los recursos y no disponer de los instrumentos de participación ciudadana y rendición de cuentas.

Los Consejos Municipales y los Consejos Territoriales de Planeación deben exigir y garantizar una gestión pública transparente, promoviendo la rendición de cuentas y haciendo control político de las actuaciones de las autoridades municipales. La rendición de cuentas es ese momento de la Gestión Pública en el que los servidores públicos (incluyendo los concejales) informan y explican obligatoriamente sus actos y omisiones con respecto al desarrollo de la gestión, a las diferentes organizaciones públicas y a la ciudadanía en general. El DNP (2007) afirma “En el marco de la democracia participativa, la rendición de cuentas es una práctica social y política de interlocución entre los gobiernos y la ciudadanía, con el fin de generar transparencia, condiciones de confianza entre ciudadanos y gobernantes, y fortalecer el ejercicio del control social a la administración pública” (p.65). El control social que ejercen los ciudadanos en la Gestión Pública es un deber y un derecho que les permite actuar como veedores de la prestación de los servicios públicos a cargo del Estado y/o de aquellos particulares que ejercen funciones públicas, del efectivo cumplimiento de los fines del Estado y los procedimientos legales y, de la correcta destinación de los recursos públicos. Finalmente, la transparencia en el ejercicio del control social se constituye en una garantía de la democracia, que conlleva a la obtención de una mayor eficiencia en la gestión pública.

2.3 El enfoque de la Gobernanza

La gobernanza se afirmó en un momento en el que se hacía evidente la inoperancia del sistema burocrático y la ineficacia e ineficiencia de la implementación de las políticas,

pues no se estaban arrojando los resultados deseados. La globalización hizo que los problemas sociales se tornaran más complejos y requirieran de diversos recursos para su intervención, los cuales difícilmente se encontraban disponibles en un solo actor, ni siquiera tratándose del gobierno; requerían la inclusión de actores del sector económico y la sociedad civil que participaran activamente en las diferentes etapas de las políticas públicas (Villareal, 2009a) “esta forma de dirección de la sociedad con la participación de actores gubernamentales y extragubernamentales es lo que se conoce como gobernanza, que es la conceptualización de una nueva relación gobierno-sociedad” (Villarreal, 2009b, p.36). A partir de esta nueva propuesta de gobierno se mostró la importancia de que los decisores públicos interactuaran con los destinatarios de las políticas para que estas tuvieran mayores posibilidades de éxito, y también con otros actores no gubernamentales que podrían aportar en el proceso en aras de conseguir mejores resultados.

Aguilar (2006) afirma que en las sociedades actuales es apenas normal que se demanden y construyan otros mecanismos de dirección social debido a que ha sido evidente que los recursos que están a disposición del gobierno “(información, conocimiento, dinero, normatividad, poder, coacción, reputación, relaciones interorganizacionales e internacionales...), aun así de gran alcance, no bastan para conocer y controlar las causas que ocasionan los problemas socialmente relevantes que hacen posible que la sociedad tenga viabilidad y éxito” (p. 97). De acuerdo a esto, en el enfoque de la gobernanza el ente gubernamental es un actor más integrado al proceso directivo de la sociedad, que cumple un papel relevante y decisivo en determinados asuntos, pero que ya no detenta el poder ni la capacidad exclusiva de direccionar la dinámica de la sociedad. Por lo tanto, para gobernar las sociedades contemporáneas se necesitan más que las potestades y los recursos estatales,

es necesario reconocer las capacidades y los aportes que pueden hacer otros agentes en la dirección de la sociedad, para así invitarlos a realizar este trabajo en conjunto. Se trata entonces de intercambiar con otros actores los recursos que estén a su disposición, los cuales pueden ser de diferentes índoles como económicos, cognoscitivos, informativos, morales, tecnológicos o políticos; para que estimulados por medio de incentivos, se interesen en cooperar y concurrir en este proceso, comprendiendo que los problemas tienen significación social y por lo tanto también les afecta y atañe a ellos.

En Latinoamérica teníamos muchas razones para cuestionar el hecho de que el gobierno fuera el único agente directivo y empezar a considerar el enfoque de la gobernanza, como por citar algunas, encontramos las crisis económicas y políticas de los años ochenta, la ingobernación del autoritarismo y las limitaciones de las nuevas democracias. Sin embargo, “la cuestión de la dirección social no surgió desde adentro de los problemas de nuestros países, por lo que da la impresión de ser una cuestión importada” (Aguilar, 2006, p. 106). El problema de la gobernanza ha estado intocable en nuestros países latinoamericanos lo cual se debe a que en nuestro medio está tan arraigado el enfoque gubernamentalista de dirección de la sociedad, que se ha mantenido a pesar del neoliberalismo adoptado y las transiciones democráticas, aunque ha mostrado una y otra vez las insuficiencias y limitaciones directivas de los gobiernos. Es por esto que al momento de cuestionar, el blanco siempre son los instrumentos directivos del gobierno como el neoliberalismo y los mercados globales, más no, la capacidad del gobierno para dirigir a la sociedad.

Aguilar (2006) afirma que en nuestro imaginario latinoamericano aún persiste la idea de que el gobierno con sus instrumentos estatales es suficiente, apto y competente para gobernar la sociedad, solo necesita desprenderse de los dispositivos del mercado y de la

sociedad civil que son los que lo han tornado incapaz y además le generan desgobierno. Esto significa que nos consideramos una sociedad subordinable a un solo centro de poder o que nos encontramos muy bien representados en las decisiones del poder público. Quizás la razón de fondo para no asumir en serio la gobernanza es que en nuestras sociedades no están fuertemente consolidados los sectores económicos ni la sociedad civil, razón por la cual el gobierno se perfila como el único agente con poder, capaz de regular y solucionar los problemas de la sociedad, sin que existan otros poderes sociales que puedan negociar con él y contribuir a la conducción de la sociedad hacia una mejor calidad de vida (Cunill, 1991).

Kooiman fue de los primeros en alertar sobre el cambio que se estaba generando al final del siglo XX en la relación entre el gobierno y la sociedad para trabajar en el desarrollo de metas colectivas, y fue quien llamó la atención sobre la necesidad de estudiar esa relación y la gobernación/gobernanza por ser un tema trascendental para el venidero de las sociedades.

La gobernanza surge a partir de la observación de un nuevo vínculo entre el gobierno y la sociedad, donde ambos asumen la responsabilidad de intervenir en los problemas de la misma, comprendiendo la importancia de la cooperación en este proceso y abandonando las viejas prácticas del trabajo individualizado y en rivalidad (Kooiman, 1993, 2000, 2003). Este cambio es el resultado de la incapacidad actual de los gobiernos para conducir la sociedad, pues el poder privado se reviste de mayor fuerza que el poder público en la solución de los problemas de la sociedad (Koiman, 2000). Sin embargo, los actores políticos y económicos buscan es una interacción y complementación bajo el entendido de que ningún actor social (público o privado), es poseedor absoluto del poder requerido para dominar unilateralmente, ni de los recursos necesarios para resolver óptimamente los problemas complejos, dinámicos y diversificados de las sociedades contemporáneas (Kooiman, 1993, 2000)

Según Rhodes (1997) la (nueva) gobernanza se caracteriza por la aparición de “redes interorganizacionales autoorganizadas” que se conforman por actores públicos, privados e intergubernamentales, independientes y autónomos que trabajan a partir del intercambio de recursos y reglas de interacción compartidas. El gobierno sigue ocupando un sitio central en la red, pero su poder es limitado y su capacidad directiva es reducida, por lo que se necesita de la aceptación, los recursos y la actuación de los otros actores que conforman la red para llevar a cabo el proceso de toma de decisiones y la implementación de las mismas, y para no perder eficacia en sus acciones (Rhodes, 1997; J. Pierre, 2000).

Salamon (2002) reconceptualiza esta nueva forma de gobernar a partir de actores y recursos extragubernamentales como “la nueva gobernación”. Él hace referencia a la gobernación y no al gobierno porque en el diseño de las políticas públicas y la provisión de los servicios públicos participan más actores externos que el mismo Estado. Este autor afirma que la dinámica de la gestión pública actual ha sufrido cambios; la negociación y la persuasión entraron a reemplazar el mando y control; y las habilidades de facilitación sustituyen a las habilidades de dirección de las personas. Esto se debe a que ha habido una transición de la jerarquía a las redes, una renuncia paulatina del enfoque burocrático de los entes administrativos del gobierno en las políticas y la prestación de los servicios públicos y, su progresiva sustitución por “redes interorganizacionales”, las cuales pueden ser organizaciones privadas o sociales.

Joan Prats (2004) fundamenta la pertinencia del concepto de gobernanza en la insuficiencia directiva del gobierno para gobernar las sociedades contemporáneas, lo cual lo obliga a apoyarse en nuevos actores para poder cumplir su función pública directiva. Al igual que otros actores, Prats considera que el nuevo modo de gobernar se efectúa a partir de una

“gestión de redes”; pero, a diferencia de algunos otros, no considera que el gobierno sea un actor más en la red, pues este es el único que tiene la representatividad y autoridad democrática de su sociedad. Lo que si afirma es que las nuevas dinámicas modifican el rol del gobierno en la medida que ahora se debe integrar a redes específicas de interés público para poder dirigir, y debe asumir un papel facilitador, negociador y medidor, muy distinto al que asumía anteriormente (Prats, 2004).

La OCDE (2000) define la gobernación como “el proceso mediante el cual los ciudadanos resuelven colectivamente sus problemas y responden a las necesidades de la sociedad, empleando al ‘gobierno’ como el instrumento” (p.129). El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1997) declara que solo es posible alcanzar el desarrollo humano sustentable a partir del vínculo entre el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. El PNUD se esfuerza por dejar sentado que la gobernación de una sociedad no es la actividad dominante que ejerce un determinado órgano revestido de mando y poder, sino la acción de un sistema interdependiente de actores sociales de naturaleza pública y privada. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA), por su parte, aclara que la globalización no es sinónimo de debilitamiento del Estado porque este se mantiene como el actor clave en el escenario político interno e internacional, aunque si ha influido en el cambio de su rol; el Estado ha pasado de ser el único proveedor de la sociedad a ser un ente catalizador, orientador, negociador, generador de consensos y conector de todos los actores comprometidos en los procesos de diseño, organización, regulación y decisión (UNDESA, 2001). Aguilar (2006) afirma “Por gobernación/ gobernanza se entiende hoy, espontáneamente, el proceso o conjunto de acciones mediante el cual el gobierno dirige o conduce a la sociedad” (p. 90), en el cual no

deben obligatoriamente coincidir los ciudadanos en sus visiones frente a los temas y las decisiones que se deban tomar para regular los diferentes aspectos de la vida en sociedad; como tampoco implica que deba existir una participación igualitaria, simétrica y cooperativa por parte de los diferentes actores.

Las afirmaciones de los actores si bien difieren en algunos puntos, coinciden en su gran mayoría en que ante las nuevas dinámicas sociales y económicas, el ente gubernamental y sus recursos son necesarios pero no suficientes para actuar en pos de la realización de los ideales de la vida en sociedad, lo cual le exige asociarse a otros actores que disponen de los recursos necesarios para tales fines. Además, la relación entre el gobierno y los otros actores se caracteriza por ser interdependiente, de tal forma que se consolida a través de asociaciones y/o redes.

2.4 Niveles de participación ciudadana en la gestión pública

Cano (2008) expone que hay distintas formas de participación ciudadana en la actividad gubernamental y una primera clasificación atiende al grado de participación de los ciudadanos en la gestión pública. A continuación, se exponen los cuatro niveles de participación que ella relaciona dentro de este criterio:

- Información.

Es el nivel más básico de participación y consiste en la adquisición y divulgación de información sobre el funcionamiento y las actuaciones del gobierno, lo cual es un requisito indispensable para la transparencia y la rendición de cuentas (políticas fundamentales de las reformas de la gobernabilidad impulsadas en las dos últimas décadas), que facilita el control

del aparato gubernamental y así, la materialización de la democracia. Si bien esta escala no permite incidir sobre el funcionamiento gubernamental (solo conocerlo), si es imprescindible para promover cualquier interacción democrática entre el gobierno y la sociedad.

Para promover este nivel de participación se recurre a la normatividad que les otorga a los ciudadanos el acceso a la información y se han adoptado estrategias que les permita a ellos ejercer derechos constitucionales, tales como la libertad de opinión y expresión, el derecho a informar y a ser informado de forma veraz e imparcial y, el derecho de petición. Las leyes de acceso a la información pueden adoptar mecanismos para garantizar la circulación de la información entre el gobierno y la sociedad, como la creación de organismos que velen por el derecho a la información, la destinación de oficinas para las quejas y reclamaciones, la publicación del desarrollo de las contrataciones y los estados de cuenta, la implementación de portales electrónicos para el buzón de sugerencias, la estipulación de términos y sanciones para aquellos eventos en los que no se les quiera suministrar información a los ciudadanos, entre otros.

- Consulta

En este nivel de participación se busca conocer las preferencias, los niveles de satisfacción o las opiniones de los ciudadanos frente a algo en específico, que puede ser por ejemplo, una situación política sobre la cual el gobierno intervendrá. Aquí se disponen mecanismos tales como “encuestas de opinión, encuestas de satisfacción de usuarios, formación de consejos consultivos, así como de juntas asesoras, que, dada su capacidad técnica, pueden incidir en las decisiones públicas; lo que no sólo depende de sus conocimientos sobre el problema público a cerca del cual son consultadas, sino también de sus relaciones políticas con los decisores públicos” (Cano, 2008, p. 155). En esta

participación el grado de influencia de los ciudadanos en la gestión pública depende, ante todo, de la disposición de los actores gubernamentales para atender las opiniones de los mismos.

- Cooperación o cogestión.

Este nivel de participación hace referencia a la colaboración de los ciudadanos en la ejecución de tareas públicas, mediante la formación de comités, asociaciones u organizaciones no gubernamentales.

- Decisión.

En este nivel de participación los ciudadanos aportan en el proceso de toma de decisiones emitiendo opiniones y orientando la acción gubernamental, aquí la participación se torna un elemento indispensable para la toma de decisiones públicas y exige un alto nivel de compromiso de los ciudadanos y los actores gubernamentales para actuar en pos al interés general y cumplir con los acuerdos establecidos. El presupuesto participativo y los consejos ciudadanos con poder de decisión son mecanismos de participación implementados en este nivel decisorio.

2. 5 La participación ciudadana desde la Gobernabilidad y desde la Gobernanza

“El enfoque realista de la gobernanza es equidistante del gobierno jerárquico pero también del mercado y del solidarismo social” (Aguilar, 2006, p. 76); es decir, considera que el gobierno sigue siendo un ente indispensable para dirigir algunos ámbitos importantes de la sociedad, no como algunas tesis radicales que afirman la autosuficiencia de la misma para regularse y dirigirse y perciben los mercados y las iniciativas de la solidaridad intrasocial

como la panacea para llevar el rumbo de la vida asociada y alcanzar un bienestar; ni como otras que le otorgan al Estado la responsabilidad de dirección de la sociedad por ser el único ente apto y competente para hacerlo, como es el caso del enfoque de la gobernabilidad, que asume que la sociedad no tiene la capacidad para regularse, por eso requiere del Estado, que es el agente competente para su administración. Aguilar (2006) asegura que ese último es un caso típico en los países de América Latina, donde además se mantiene el supuesto de que las sociedades no son competentes para solucionar sus problemas de supervivencia y convivencia.

La gobernanza hace referencia a ese nuevo estilo de gobernar, diferente del tradicional jerárquico, en donde se promueve una mayor interacción entre el Estado y otros actores mediante de redes decisionales mixtas entre lo privado y lo público (Natera, 2004). La gobernanza se constituye en un proceso post-gubernamental más que antigubernamental, en la medida que el Estado es necesario para la dirección de la sociedad y es la principal fuente de gobernanza colectiva (Ramírez, 2015). Cano (2008) afirma que la emergencia de la gobernanza no debe ser vista como un deterioro o una incompetencia del Estado, sino como una habilidad del mismo para adaptarse a los cambios y las transformaciones del ambiente estatal en la última década del siglo XX. Algunos autores afirman lo contrario, consideran que fue evidente la crisis de la gobernabilidad y la dificultad del gobierno para responder ante la complejidad de la ciudadanía que ahora era más crítica frente al accionar público (Blanco y Goma, 2003). Sin embargo, sea por la capacidad de adaptación del gobierno a las nuevas dinámicas o por la crisis de la gobernabilidad, fue necesario sustituir el enfoque gubernativo tradicional de las democracias liberales y establecer otros mecanismos de interacción con la sociedad que trascendieran de los sistemas electorales.

Camou (2000), entiende la gobernabilidad como “un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas societales y la capacidad del sistema político para responderlas de manera legítima y eficaz” (p. 283). El enfoque de la gobernabilidad se orienta hacia el fortalecimiento de la institucionalidad para conseguir ese equilibrio, mientras que el enfoque de la gobernanza se orienta hacia el fortalecimiento de las redes sociales y la participación social para abordar los problemas públicos. Por lo tanto, en aras de una mejor gobernabilidad, se han realizado reformas que se cimientan en la corriente de la Nueva Gestión Pública (NGP) o *New Public Management*” (Cano, 2008).

La gobernabilidad hace alusión a los recursos que están a disposición del Estado para el ejercicio de gobernar; gobernanza, por el contrario, es un concepto que alude a un gobierno a partir de redes, donde cooperan actores sociales y privados en la realización de tareas gubernamentales. Esto se debe a que la gobernanza asume que los gobiernos gozan de capacidad institucional, por lo tanto, a diferencia del enfoque de la gobernabilidad que se encamina al fortalecimiento institucional de los gobiernos, la gobernanza se enfoca en garantizar la capacidad directiva, para lo cual es necesario vincular a factores y sujetos externos al gobierno debido a que las instituciones ya no son suficiente para ello.

La nueva gestión pública busca incorporar a los clientes en la evaluación de la calidad de los bienes y servicios prestados, la gobernanza democrática pretende generar un contrapeso a las actuaciones del aparato gubernamental mediante la vinculación de la ciudadanía en el desarrollo de los mecanismos de rendición de cuentas (Villarreal, 2009b). Cabrero y Peña (2009) explican que en la nueva gestión pública el gobierno entabla una relación con *clientes-ciudadanos individualizados*, desligados de su comunidad política y cultural con la que comparten problemas colectivos. En las prácticas fomentadas por la

gobernanza democrática, por el contrario, existe una interrelación entre el gobierno y la sociedad civil que se conforma por ciudadanos integrados en una pluralidad de organizaciones sociales que poseen y comparten preocupaciones y propósitos.

El enfoque de la gobernanza y el enfoque de la gobernabilidad se consideran distantes en la medida que resulta ser incompatible adoptar simultáneamente reformas gerencialistas y reformas que establezcan nuevas prácticas democráticas en la relación Estado-sociedad. Además, la participación ciudadana en el enfoque de la gobernanza es motivada por incentivos de “solidaridad”, a diferencia del enfoque de la gobernabilidad, en el que los incentivos son de carácter material y lo que se pretende es maximizar los beneficios particulares (Peters, 2001). Cano (2008) expresa “este postulado resulta claramente irreconciliable con el argumento que orienta la NGP, según el cual la racionalidad humana está dirigida a la obtención de ganancias” (p. 171).

Desde esta óptica, el enfoque de la gobernanza se constituye como una cuasi antítesis ideológica de la propuesta de mercado de la NGP (Peters, 2001), en la medida que se inclina por mecanismos más democráticos y políticos y exige la participación de ciudadanos dialogantes y solidarios, motivados a actuar por el interés general más que por obtener el beneficio personal. Por lo tanto, se puede afirmar que el único punto de encuentro entre la gobernanza y la NGP es que ambas consideran que las burocracias tradicionales impiden el buen gobierno, por lo cual se deben establecer nuevos medios para eficientar las decisiones públicas.

Cano (2008) sostiene que la gobernabilidad adopta una serie de reformas para complementar o sustituir las antiguas burocracias caracterizadas por la disfuncionalidad, creando una nueva relación institucional entre el gobierno y la sociedad; este enfoque se

refiere a la nueva gestión pública y se fundamenta en que el gobierno requiere al mercado y a la sociedad civil para poder gobernar en la actualidad. De acuerdo a esto, la participación ciudadana se consolida en este enfoque como una herramienta más de gestión, orientada hacia el control y complemento del gobierno. En concordancia, la participación ciudadana aquí se ve impulsada por mejorar las fallas e insuficiencias que tuvieron las administraciones pasadas, por esto la sociedad civil asume la realización de tareas que tradicionalmente le competían al gobierno, perdiendo éste la calidad de conductor exclusivo de la sociedad (Pierre y Peters, 2005). Además, se percibe la participación ciudadana útil en la medida que disminuye las responsabilidades y los costos de transacción y de operación en las acciones gubernamentales (Ackerman, 2004a). Como el objetivo de la NGP es satisfacer los intereses de los ciudadanos en su condición de usuarios, la participación ciudadana en este enfoque se encuentra generalmente en los niveles informativos, consultivo y cooperativo (Cano, 2008).

Se promueven los mecanismos de información porque se hace necesario el flujo de la misma para obtener la aclamada transparencia y rendición de cuentas perseguidas en las reformas y propuestas gerencialistas. Aquí el uso de las tecnologías y la comunicación se constituye en un ejercicio fundamental para optimizar el funcionamiento del gobierno y fortalecer la relación con los ciudadanos. De igual forma, se promueven los mecanismos consultivos porque se constituyen en la forma idónea para conocer la opinión de los ciudadanos en su calidad de usuarios, sobre la calidad de los servicios públicos y los programas gubernamentales, lo cual le permitiría al gobierno conocer sus niveles de eficiencia y las reformas que necesitaría implementar para mejorar la prestación de sus servicios. Además, se implementan mecanismos cooperativos debido a que “la cooperación representa la alternativa recurrente ante la retirada del Estado de ciertos ámbitos sociales

antes intervenidos, cooperación que la NGP pretende lograr por medio de incentivos dirigidos a seres humanos de racionalidad limitada que voluntariamente se negarían a cooperar, pero que actuando racionalmente, esto es, buscando sus propios intereses, responden a los incentivos dirigidos desde el Estado y orientan su acción hacia objetivos colectivos” (Cano, 2008, p.164).

Cunill (1997) denomina a esta participación que promueve la nueva gestión pública como “participación administrativa”, asegurando que es la que más se promueve en Latinoamérica y a la vez, criticando su enfoque, debido a que visualiza a los ciudadanos solo como clientes y, prima las intervenciones individuales, propiciando “la despolitización social y una mayor corporativización del aparato del Estado” (Cunill, 1997, p. 298).

En conclusión, el enfoque de la gobernabilidad, encaminado hacia las instituciones y los resultados de las políticas públicas, deja de lado el proceso de toma de decisiones en el cual debe primar el debate público a partir de la intervención de diferentes actores. Por lo tanto, se puede afirmar que en este enfoque no prevalece la participación ciudadana (Cano, 2008). Las razones se pueden atribuir a la onerosidad que genera acudir a mecanismos participativos cuando la gestión pública dispone de poco tiempo para alcanzar resultados eficientes. Además, la participación ciudadana puede dilatar los procesos, aumentar el conflicto y retrasar los productos esperados. Por esto, el enfoque de la gobernabilidad implementa mecanismos de participación en la medida que esta resulte funcional para conseguir los objetivos gubernamentales, pero siempre conservando el gobierno su poder directivo y la facultad exclusiva para decidir. Sin embargo, limitar el alcance de la participación ciudadana a las relaciones mercantiles y económicas con el Estado, vulnera los derechos de los ciudadanos como sujetos políticos que confluyen en un espacio público que

debe ser útil para mediar con el Estado (Peters, 2001). Por lo tanto, teniendo en cuenta que las sociedades latinoamericanas actuales se han tornado más complejas y exigen la creación de canales que les permitan tener vínculos con el Estado, se ha concentrado un mayor interés en la promoción de la participación ciudadana dentro de los procesos de decisión política y “justamente, la gobernanza participativa o nueva gobernanza democrática intenta rescatar dicha dimensión política de la participación ciudadana (Cano, 2008, p. 166).

La principal característica de la gobernanza es que promueve la participación de actores no gubernamentales en los procesos de políticas públicas, debido a que estos disponen de recursos que no poseen ni los expertos de la burocracia ni los representantes políticos. Por lo tanto, sin descuidar los otros niveles, pone acento en los niveles de decisión porque considera que solo aquí se consolida una verdadera, autónoma y vinculante participación ciudadana. Cabrero y Peña (2009) aseguran que el desarrollo de la nueva gobernanza democrática requiere, entre otros aspectos, “la inclusión de la ciudadanía con mecanismos consultivos, cooperativos, de decisión o de evaluación” (p. 326).

El Banco Mundial (BM, 1997) resaltó lo imprescindible que es acercar el Estado a la sociedad civil para que este pueda mejorar su capacidad de actuación en estas sociedades contemporáneas y complejas. Para esto, es necesario aumentar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos por medio de la creación de mecanismos e incentivos que la estimulen, como los mecanismos de consulta y consejos deliberativos que permiten conocer las demandas y opiniones de los grupos sociales. Al mismo tiempo, el BM advirtió que ese acercamiento entre el Estado y los diversos grupos debe ser equitativo; sin embargo, Aguilar (2006) afirma que es posible que existan modelos de gobernanza más participativos

que otros, pues no siempre los sectores participan de manera igualitaria y simétrica y, pueden existir algunas sociedades débiles con gobiernos protagónicos.

Mariñez (2006, 2009) considera que los gobiernos deben crear la infraestructura necesaria para facilitar el control social en la administración pública, infraestructura que propenda por la democratización de las instituciones y las prácticas ciudadanas a través de la participación de los actores no gubernamentales en la confección de las decisiones públicas. Para que se complete el proceso es necesario que los ciudadanos ocupen los espacios diseñados para la participación y utilicen, transformen y amplíen las herramientas establecidas para su ejercicio.

3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La participación ciudadana se constituye en un instrumento para presionar al aparato estatal por la materialización de los derechos que exigen de su actuación y la innovación en las políticas y prácticas administrativas; es un mecanismo de control del clientelismo y la politización del aparato público, en la medida que se configura el compartimiento del poder y; en una vía para aumentar la viabilidad y eficacia de la acción pública, pues implica concertación entre los actores comprometidos (Cunill, 1991).

Junto a la promulgación de la Constitución de 1991 surgió un gran espectro normativo que rige la participación ciudadana en Colombia; sin embargo, esta riqueza legislativa no es precisamente sinónimo de democratización de la gestión, movilización ciudadana en torno a lo público o incidencia de la ciudadanía en la formulación de políticas públicas (Velásquez y González, 2003). Por el contrario, parece acentuarse la brecha entre la oferta participativa y las acciones de los ciudadanos para ejercerla. Esto se debe a las conductas corruptas, la creciente desconfianza de la ciudadanía hacia la política y los políticos, y el contexto de relaciones en el cual se desenvuelve, el cual está fuertemente influenciado por el ethos clientelista; estos factores convergen y conllevan a la formación de una gran barrera a la participación ciudadana, pues se la asocia además con la política y esto conduce a su estigmatización (Velásquez y González, 2003).

Cano (2008) asegura que la corrupción es un problema público que ha generado detrimento económico y ha quebrantado la legitimidad gubernamental en América Latina. Por lo tanto, la sociedad civil se ha propuesto luchar en contra de la corrupción, idea que se enmarca dentro de una lógica de acción pública llamada gobernanza, que solo es posible

construir en la medida que se integren simétricamente el Estado y otros actores no gubernamentales en el proceso de direccionamiento de la sociedad.

La participación puede tener también un papel determinante en la orientación de las políticas públicas, estas permiten emprender rutas claras de acción que conlleven a la solución de los problemas, pero a partir de la eclosión de nuevos actores “legítimos” que enriquecen la agenda pública con nuevas demandas y perspectivas de abordaje de los temas públicos, consolidándose así, la transición de una democracia representativa a una crecientemente participativa (Sarmiento, Tello y Segura, 2007). No es un tema de *moda* o *preferencia*, es el efecto de la evolución del debate sobre el estado y la democracia, en aras de una mayor racionalidad en las políticas públicas (Canto, 2010).

La adopción y regulación de la democracia participativa en Colombia fue vista como la panacea al sistema político de la época, en el cual reinaba el abandono y la exclusión ciudadana por parte de las autoridades públicas, sobre todo en aquellas gestiones y decisiones que por su afectación competían a la ciudadanía. Uribe (2009) afirma que eso no ocurrió, la democracia participativa no fue al fin esa cura que todos esperaban frente a diferentes factores como el clientelismo, el bipartidismo, la ausencia de cultura política, los problemas de gobernabilidad, la exclusión social y la debilidad de la sociedad civil; por el contrario, el país hoy es más fragmentado, convulso y violento, sin movilización permanente ni organización en la sociedad civil, con una mezcla de silencios, ausencias y temores en casi todos los espacios de la vida de los ciudadanos. Siete años después, esta afirmación se sigue viendo reflejada en la percepción de los colombianos.

De acuerdo a la Encuesta de Cultura Política realizada por el DANE (2017), solo el 29,3% de los encuestados considera que Colombia es un país democrático y solo un 11,5% afirma estar muy satisfecho con la forma en que la democracia funciona en Colombia, mientras que el 49,9% manifiesta estar muy insatisfechas. El 87,9 % de las personas de 18 años y más, no confían en los Partidos y/o movimientos políticos, y el 80,2% no confían en los Consejos municipales/distritales. El 82,4%% está totalmente de acuerdo con la afirmación “a los políticos les interesan los votos y no las necesidades de la gente”; y las personas que no votaron en las elecciones locales de octubre de 2015, afirman que no lo hicieron porque consideran que los políticos son corruptos (46,2%) y porque los candidatos prometen y no cumplen (44,6%).

En el Municipio de Sincelejo, específicamente, aún persiste el clientelismo dentro de la dinámica política y una disciplina de los ciudadanos hacia la participación, lo cual se debe a muchos factores, entre ellos, la poca existencia de canales o espacios adecuados de acceso para el ejercicio de la misma (Luna, 2010).

Para que la participación desempeñe un papel decisivo en la orientación de las políticas públicas y en la modificación de las relaciones entre la ciudadanía y el gobierno local, es necesario que existan, por lo menos, dos condiciones: la primera, una firme voluntad de los gobiernos de crear las oportunidades para el ejercicio de la participación (González, Gascó y Llopis, 2012); y la segunda, la existencia de ciudadanos y organizaciones sociales que hagan uso de esas oportunidades (Cunill, 1991). Teniendo en cuenta esto, se pone en evidencia un gran dilema en las iniciativas de participación por parte de las organizaciones sociales, pues si bien hay una gran capacidad de asociación para ejercer presión y actuar en pos de la resolución de conflictos, se presenta a la vez una marcada debilidad en la

constitución de redes sociales efectivas (Luna, 2010). Esto se debe al “desencanto y un sentimiento vago de cansancio y de fracaso entre quienes apostamos sin reservas por esta estrategia de democratización de la política y la sociedad” (Uribe, 2009, p. 191); lo que Luna (2010) llama “la frustración de participar”, es decir, el sentimiento de desilusión de los ciudadanos y las organizaciones sociales frente a la incapacidad de intervenir y cumplir un rol determinante en la adopción de las decisiones políticas que le atañen.

Diversos estudios nacionales e internacionales han demostrado que existe una relación positiva entre participación ciudadana y gestión pública. Citando algunos, González, Gascó y Llopis (2012), a partir de una investigación realizada en los ayuntamientos españoles, concluyen que es importante que las administraciones públicas incentiven y promuevan la participación, debido a que ésta guarda una relación directa con la buena imagen o la satisfacción del ciudadano frente a sus administraciones locales. Desde el otro ángulo, el último informe arrojado por la encuesta de Percepción Ciudadana de la Red de Ciudades Cómo Vamos (2015) expone que percibir un buen gobierno y una ciudadanía comprometida impacta, entre otras cosas, en el forjamiento de ciudadanos participativos y con buen comportamiento.

Conociendo la relación existente entre ambas variables, es preocupante que a la fecha no haya un estudio actualizado en el municipio de Sincelejo que nos permita conocer la percepción que poseen las personas que participan y las que no participan, frente a la gestión pública y frente al ejercicio mismo de la participación.

De acuerdo a lo anterior, la presente investigación pretende responder la siguiente pregunta:

3.1 Formulación del Problema

¿Cuál es la relación existente entre Participación Ciudadana y percepción frente a la Gestión Pública en el municipio de Sincelejo?

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo General

Determinar la relación existente entre participación ciudadana y percepción frente a la gestión pública en el municipio de Sincelejo.

4.2 Objetivos Específicos:

- Reconocer el motivo de los ciudadanos para ejercer o abstenerse de ejercer la participación ciudadana
- Identificar la percepción de los ciudadanos frente a los alcances y efectos de la participación ciudadana.
- Identificar la percepción de los ciudadanos frente a la Gestión Pública del Municipio de Sincelejo.
- Determinar la relación existente entre el nivel de participación de los ciudadanos y la percepción que tienen los mismos frente a las siguientes dimensiones de la gestión Pública: Imagen, eficacia, eficiencia y transparencia.

5. HIPÓTESIS

5.1. Hipótesis general

Existe una relación positiva entre el ejercicio de la participación ciudadana y la percepción frente a la gestión pública del municipio de Sincelejo.

5.2. Hipótesis específicas

1. Existe una relación positiva entre el ejercicio de la participación ciudadana y la percepción que tienen los ciudadanos frente a la misma.
2. Existe una relación positiva entre el ejercicio de la participación ciudadana y la imagen de los ciudadanos frente a la gestión pública.
3. Existe una relación positiva entre el ejercicio de la participación ciudadana y la percepción de eficiencia frente a la gestión pública.
4. Existe una relación positiva entre el ejercicio de la participación ciudadana y la percepción de eficacia frente a la gestión pública.
5. Existe una relación positiva entre el ejercicio de la participación ciudadana y la percepción de transparencia frente a la gestión pública.
6. Las personas que participan en espacios institucionalizados tienen una mejor imagen y percepción de eficiencia frente a la gestión pública, que aquellas personas que participan en organismos autónomos.

6. VARIABLES

6.1 Definición conceptual

Participación ciudadana: intervención directa de los ciudadanos en los asuntos públicos, quienes actúan como portadores de intereses sociales (Cunill, 1997). De acuerdo al Observatorio Internacional de la Democracia Participativa, la participación ciudadana son todas aquellas prácticas Políticas por medio de las cuales las personas pretenden incidir en el campo de lo público, participar es tomar parte en la gestión de los temas públicos que afectan a la ciudadanía en el ámbito local (OIDP, 2007). Ziccardi (1998) afirma “la participación ciudadana, es la clave para transformar el espacio de lo estatal en un espacio público y contribuir a crear condiciones para consolidar una gobernabilidad democrática” (p. 3).

Gestión Pública: el Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2007) afirma que “es la capacidad de los alcaldes y funcionarios gubernamentales para ejecutar los lineamientos programáticos consignados en los planes de desarrollo” (p. 6). Además, sostiene que se refiere a un proceso dinámico, sistemático e integral que articula una serie de momentos como los son la planificación, la ejecución, el seguimiento, la evaluación y el control de las estrategias que adopte la administración para abordar los distintas áreas de acción, sobre la base de unas metas previamente convenidas democráticamente.

Imagen: hace referencia a la percepción favorable o desfavorable que crea el ciudadano frente a la gestión que realizan los dirigentes políticos de su localidad, la cual va ligada a la idoneidad y responsabilidad que estos últimos asuman en sus respectivos cargos, los resultados que se evidencien en el desarrollo del territorio y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

Eficiencia: cumplimiento de la administración pública con los objetivos y las metas trazadas, a partir de una optimización de los recursos que permita alcanzar buenos resultados y un excelente impacto, pero haciendo un uso racional de los insumos con que dispone (DNP, 2007).

Eficacia: De acuerdo al DNP (2007), el objetivo del municipio debe ser la obtención de mayores niveles de bienes y servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus habitantes y; “el concepto que relaciona los resultados alcanzados con las metas propuestas –en el Plan de Desarrollo– es la EFICACIA” (p.64). Atendiendo a esto, la eficacia hace alusión a la capacidad de la entidad para dar cumplimiento a las metas planteadas en el plan de desarrollo.

Transparencia: hace referencia a la claridad en la administración de los recursos públicos y la rectitud moral e intachable que deben tener los dirigentes políticos en su labor (Portillo, 2004), para lo cual se hace necesario mantener un proceso de rendición de cuentas e interacción permanente con los ciudadanos, mediado por una política efectiva de comunicación y flujo de información, que garantice esa interacción.

6.2 Definición operacional

El presente estudio indaga por la participación de los ciudadanos en organismos autónomos y en espacios institucionalizados, y evalúa la percepción de los ciudadanos frente a las distintas dimensiones de la gestión pública, para lo cual se construyó un instrumento basado en las preguntas de la encuesta de ‘Percepción ciudadana’ de la Red de ciudades Cómo Vamos, que tiene entre sus anillos las variables de Percepción Ciudadana y Gestión Pública. Los cuatro anillos que componen esta encuesta, pretenden en su integralidad

entender cómo están percibiendo los ciudadanos el funcionamiento de las administraciones locales, la oferta de bienes y servicios y la calidad de vida de sus ciudades, estos son: Activos de las personas, Habitación Urbano, Buen Gobierno y Ciudadanía y Entorno económico y competitividad. El anillo “*Gobierno y Ciudadanía*” es el de interés y utilidad para la presente investigación.

Tabla 1. *Operacionalización de las variables*

Variable	Dimensiones	Indicador (son los ítems)	Categorías
Participación Ciudadana	Participación autónoma	Participación en Organismos autónomos	A. Organizaciones ambientales B. Asociaciones de padres de familia y/o comités en la escuela C. Juntas de trabajo comunitario o asociaciones de vecinos D. Asociaciones cívicas o comunitarias (asociaciones de madres comunitarias, grupos juveniles, asociaciones de grupos étnicos, grupos de mujeres, entre otros) E. Organizaciones profesionales o gremios F. Asociaciones Culturales G. Partido o movimiento político H. Sindicatos I. Asociaciones deportivas J. Otro. ¿Cuál?
	Participación institucionalizada	Participación en espacios institucionalizados	A. Consejo de juventud B. Consejos de Planeación (Consejo Territorial de Planeación o Consejos Locales de Planeación) C. Mesa Municipal de Víctimas D. Mesa Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar E. Consejo municipal de Política Social F. Comité Municipal de Discapacidad G. Juntas administradoras locales JAL H. Otro. ¿Cuál?

		<p>Razones para no participar</p> <p>Razones para participar</p> <p>Incidencia y efectos de la participación ciudadana</p>	<p>01. Por falta de información</p> <p>02. No sabe cómo participar</p> <p>03. Por miedo/ Para no meterse en problemas</p> <p>04. Por falta de tiempo</p> <p>05. Por desconfianza en los organismos de participación</p> <p>06. Por insuficiencia de espacios de participación</p> <p>07. Porque no sirven o son poco efectivos</p> <p>1. El Estado no ha servido para solucionar problemas</p> <p>2. Como ciudadano es un deber participar</p> <p>3. Para recibir beneficios personales</p> <p>A. ¿Ha logrado reducir el clientelismo y la politiquería?</p> <p>B. ¿Ha logrado reducir la corrupción?</p> <p>C. ¿Ha ayudado a resolver los problemas de la gente?</p> <p>D. ¿Le ha permitido a la gente influir en las decisiones de las autoridades locales?</p> <p>E. ¿Ha fortalecido el poder de los políticos?</p> <p>F. ¿Ha fortalecido a las organizaciones sociales (Juntas de Acción Comunal, grupos de mujeres, de jóvenes, etc.)?</p>
Gestión Pública	Imagen	Percepción frente algunas entidades y algunos actores encargados de la gestión Pública.	Favorable/Desfavorable
	Eficiencia	Calificación de la gestión realizada	Escala de 1 a 5, donde 1 es <u>muy mala gestión</u> y 5 es <u>muy buena gestión</u> .

		<p>por estos actores y entidades.</p> <p>Satisfacción con la forma como la Alcaldía maneja e invierte los recursos del municipio.</p> <p>Aspectos en los que ha estado trabajando la actual Administración</p>	<p>Muy insatisfecho /Algo insatisfecho/ Ni satisfecho ni insatisfecho/ Algo satisfecho/ Muy satisfecho</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seguridad ciudadana y convivencia 2. Educación pública 3. Salud pública 4. Vivienda de interés social 5. Desarrollo económico de la ciudad y generación de empleo <p>Servicios públicos domiciliarios (eficiencia y cobertura)</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Movilidad vial y transporte 7. Recreación y deporte 8. Medio Ambiente 9. Cultura (promoción y acceso a diferentes expresiones artísticas) 10. Programas y políticas para niños 11. Programas y políticas para jóvenes 12. Programas y políticas para mujeres 13. Reducción de la pobreza 14. Participación ciudadana 15. Eficiencia y transparencia de la Gestión Pública
	Eficacia	<p>Satisfacción con las acciones realizadas en cada aspecto</p>	<p>Muy insatisfecho /Algo insatisfecho/ Ni satisfecho ni insatisfecho/ Algo satisfecho/ Muy satisfecho</p>

		<p>Gestión del Alcalde</p>	<p>Mala gestión</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Por falta de comunicación de la Administración Municipal 2. Por falta de concertación con la gente 3. Porque no ha cumplido con lo prometido en su programa de gobierno 4. Porque desconoce algunas problemáticas de la ciudad 5. Por deficiencias técnicas en su equipo de gobierno 6. Porque se ha concentrado en acciones no prioritarias 7. Porque le ha faltado habilidad política en la venta de sus proyectos 8. Por su falta de liderazgo 9. Por su debilidad para tomar decisiones 10. Por su falta de autoridad frente a la ciudadanía 11. Por su deficiente relación con el nivel nacional de gobierno 12. Por su deficiente relación con los empresarios 13. Por su deficiente relación con el Concejo de la ciudad 14. Por clientelista 15. Por los escándalos de corrupción 16. Por el mal manejo del tema de valorización <p>Buena Gestión</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Por eficiente comunicación con la Administración Municipal 2. Por la adecuada concertación con la gente 3. Porque ha cumplido con lo prometido en su programa de gobierno 4. Porque conoce las problemáticas de la ciudad
--	--	--------------------------------	---

			<p>5. Por la eficiencia técnica de su equipo de gobierno</p> <p>6. Porque se ha concentrado en acciones prioritarias</p> <p>7. Porque ha sido hábil políticamente en la venta de sus proyectos</p> <p>8. Por su autoridad frente a su equipo de gobierno</p> <p>9. Por su autoridad frente a la ciudadanía</p> <p>10. Por su liderazgo</p> <p>11. Por su capacidad de tomar decisiones oportunas y adecuadas</p> <p>12. Por su buena relación con el nivel nacional de gobierno</p> <p>13. Por su buena relación con los empresarios de la ciudad</p> <p>14. Por su buena relación con el Concejo de la ciudad</p> <p>15. Por su transparencia y honestidad</p> <p>16. Por el buen manejo del tema de valorización</p>
		Gestión del Concejo	<p>Mala Gestión</p> <p>1. No cumplen lo que prometen</p> <p>2. Son corruptos/ Se roban la plata/ Son unos ladrones</p> <p>3. No trabajan por el pueblo/ por la ciudad</p> <p>4. Son unos politiqueros</p> <p>5. Solo trabajan para su propio beneficio</p> <p>6. No se ven los resultados de su trabajo/ No se ve el trabajo</p> <p>7. No apoyan al alcalde/ No trabajan con la alcaldía</p> <p>8. No aprueban ningún proyecto</p> <p>9. Solo hablan/ debaten y no hacen nada más</p> <p>10. No conocen los problemas de la ciudad</p> <p>11. No han realizado una buena gestión/ no toman buenas decisiones</p> <p>12. No hacen nada/ no trabajan</p>

			<p>13. No trabajan en equipo</p> <p>14. Trabajan a medias / dejan los proyectos por la mitad</p> <p>Buena Gestión</p> <p>1. Están trabajando por la ciudad</p> <p>2. Son los que aprueban/ gestionan los proyectos</p> <p>3. Dan soluciones a los problemas de la comunidad/ del barrio</p> <p>4. Trabajan/ apoyan al alcalde</p> <p>5. Cumplen con lo prometido</p> <p>6. Tienen una buena gestión</p> <p>7. Conocen las problemáticas de la ciudad</p> <p>8. Trabajan por lo que el alcalde no ha hecho</p> <p>9. Se preocupan por el bienestar de la gente/ por el pueblo</p> <p>10. Trabajan por la ciudad/ se preocupan por la ciudad</p> <p>11. Han trabajado por la educación</p> <p>12. Han trabajado por la salud</p> <p>13. Hacen control político al alcalde</p> <p>14. Se preocupan por los recursos de la ciudad</p> <p>15. Cumplen lo que prometen</p> <p>16. Han trabajado por la vivienda</p> <p>17. Han trabajado por la alimentación escolar</p>
	Transparencia	Transparencia de la administración en sus actividades	Una escala de uno (1) a cinco (5), donde 1 es nada y 5 es mucho.
		Nivel de satisfacción con la Información que entrega la	Muy insatisfecho /Algo insatisfecho/ Ni satisfecho ni insatisfecho/ Algo satisfecho/ Muy satisfecho

		<p>alcaldía sobre los programas y proyectos que desarrolla</p> <p>Nivel de satisfacción con Información que entrega la alcaldía sobre los resultados obtenidos y las metas alcanzadas</p> <p>Nivel de corrupción en el municipio</p>	<p>Muy insatisfecho /Algo insatisfecho/ Ni satisfecho ni insatisfecho/ Algo satisfecho/ Muy satisfecho</p> <p>Ha disminuido mucho/Ha disminuido algo/ Sigue igual/ Ha aumentado algo/Ha aumentado mucho.</p>
--	--	--	--

7. METODOLOGÍA

7.1 Tipo de Estudio

La presente investigación es cuantitativa – correlacional. “Los estudios cuantitativos correlacionales miden el grado de relación entre dos o más variables” (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p.121), precisamente lo que se pretende con este estudio, determinar la relación existente entre el ejercicio de la Participación ciudadana y la percepción de los participantes frente a la Gestión pública del municipio de Sincelejo, atendiendo a cuatro dimensiones en específico: imagen, eficiencia, eficacia y transparencia. En este tipo de estudios se realiza inicialmente una medición individual de cada variable para posteriormente analizar la correlación que puede existir entre ellas, la cual se enuncia en la hipótesis a comprobar.

En esta investigación se somete a prueba la hipótesis de que existe correlación entre la participación ciudadana y la satisfacción con la Gestión Pública en los habitantes de este municipio.

7.2. Participantes de la Investigación

Para el presente estudio se realizó un muestreo intencional, con personas mayores de 18 años de edad, residentes en la ciudad de Sincelejo. Participaron 120 personas, de las cuales 60 han ejercido la participación ciudadana y 60 no la han ejercido. Los participantes de esta investigación que han ejercido la participación ciudadana, fueron reclutados a través de muestreo no probabilístico tipo Bola de Nieve; los sujetos que no han ejercido la participación ciudadana fueron escogidos entre personas que transitaban a diferentes horas en los puntos más importantes y concurridos de la ciudad.

Todos los participantes del estudio habían sido residentes de forma permanente en el municipio en un tiempo no inferior a un año, evitando así desconocimiento y vaguedad en la información. Además, al inicio de la encuesta se preguntó a los participantes si trabajaban en alguna de las entidades que se encontraban en una lista específica que se les presentaba, que serían las entidades por las que más adelante se les preguntaría para que emitieran valoraciones y juicios. Si las personas manifestaban trabajar en alguna de esas entidades, se les agradecía por su tiempo y se daba por culminada la encuesta. Lo anterior era con el fin de buscar la mayor imparcialidad y objetividad posible en las respuestas de los encuestados. A todos los participantes se les compartieron los objetivos del presente estudio, para que ellos voluntariamente decidieran si estaban de acuerdo en participar o no. Luego, aquellos que consentían participar, procedían a firmar el consentimiento informado y a diligenciar la encuesta.

7.3 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos

Para la medición, se construyó un instrumento basado en las preguntas de la encuesta de ‘Percepción ciudadana’ de la Red de ciudades Cómo Vamos, que aborda las variables de Percepción Ciudadana y Gestión Pública. En el área de la participación ciudadana, se remite tanto a la autónoma como la institucionalizada, y afirma “por participación ciudadana nos referimos al empleo por parte de la ciudadanía de mecanismos, tanto formales como informales, para incidir sobre la toma de decisiones que afecta su bienestar y la vida en sociedad” (Red de Ciudades Cómo Vamos, 2015, p. 93). El instrumento diseñado fue debidamente avalado por expertos y se realizó una prueba piloto que permitió hacer los ajustes pertinentes en aras de que la encuesta fuera lo más comprensible e idónea posible. Se analizaron detalladamente cada una de las preguntas y se enmarcaron dentro de las variables

y dimensiones del presente estudio, haciendo el soporte teórico necesario para la justificación de cada una, y el posterior respaldo y sustento del análisis de los resultados.

7.4 Procedimientos

Primera Fase: Revisión de la literatura y redacción del marco teórico.

Segunda Fase: Recolección de datos, se inicia el contacto con los participantes y se efectúa la aplicación del instrumento.

Tercera Fase: Tabulación y análisis de los datos mediante el programa SPSS/PC.

Cuarta Fase: Construcción del informe final y redacción de un artículo científico a partir de los resultados obtenidos.

7.5. Método de análisis de datos

Los datos obtenidos se analizaron y tabularon mediante el programa SPSS/PC para Windows.

8. RESULTADOS

A continuación se exponen los resultados obtenidos en cada uno de los objetivos específicos de este estudio. Para su realización, se encuestó un total de 120 personas mayores de 18 años; 60 personas que ejercen la participación ciudadana y 60 personas que no la ejercen. El nivel socioeconómico y el nivel de escolaridad de las mismas varía, hubo personas encuestadas que no han terminado sus estudios de primaria y hubo encuestados con nivel educativo superior y postgrado.

Los datos obtenidos se categorizan y tabulan de acuerdo a porcentajes y se ejecuta un análisis cualitativo de esta información.

8.1 Razones para ejercer y no ejercer la participación ciudadana en el Municipio de Sincelejo

El 16,6% de las personas que participan lo hacen porque consideran que el Estado no ha servido para solucionar los problemas de la sociedad, el 76,6% participa porque siente que como ciudadanos es un deber participar y el 8,3% lo hace para recibir beneficios personales.

El 41,6% de las personas que no participan, aseguran que una de las razones para no hacerlo es la falta de información, el 16,6% manifiesta que no saben cómo hacerlo, el 66,6% afirma que es por falta de tiempo, el 20% sostiene que es por desconfianza en los organismos de participación, el 6,6% lo atribuyen a la insuficiencia de espacios de participación y el 8,3% no lo hacen porque consideran que los espacios de participación no sirven o son poco efectivos.

Tabla 2. No participación por falta de tiempo.

Tabla cruzada RAZNP_04*PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS				
			PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	Total
			No participa	
RAZNP_04	SI	Recuento	40	40
		% dentro de RAZNP_04	100,0%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	100,0%	100,0%
		% del total	100,0%	100,0%
Total		Recuento	40	40
		% dentro de RAZNP_04	100,0%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	100,0%	100,0%
		% del total	100,0%	100,0%

El 66,6% de las personas que no participan afirman que es por falta de tiempo.

Tabla 3. No participación por falta de información.

Tabla cruzada RAZNP_01*PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS				
			PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	Total
			No participa	
RAZNP_01	SI	Recuento	25	25
		% dentro de RAZNP_01	100,0%	100,0%
		% dentro de participación EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	100,0%	100,0%
		% del total	100,0%	100,0%
Total		Recuento	25	25
		% dentro de RAZNP_01	100,0%	100,0%
		% dentro de participación EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	100,0%	100,0%
		% del total	100,0%	100,0%

El 41,6% de las personas que no participan, aseguran que una de las razones para no hacerlo es la falta de información.

Tabla 4. *La participación como deber del ciudadano.*

Tabla cruzada RAZSP_02*participación EN ORGANISMOS Y ESPACIOS				
			PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	Total
			Participa	
RAZSP_02	SI	Recuento	46	46
		% dentro de RAZSP_02	100,0%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	100,0%	100,0%
		% del total	100,0%	100,0%
Total		Recuento	46	46
		% dentro de RAZSP_02	100,0%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	100,0%	100,0%
		% del total	100,0%	100,0%

El 76,6% de las personas que participan lo hacen porque sienten que como ciudadanos es un deber participar.

Estos resultados confirman dos teorías: la teoría de Font (2004), quien sostiene que un factor que limita considerablemente el ejercicio de la participación del ciudadano medio es el tiempo; y la teoría de Verba, et al (1995), quienes afirman que los ciudadanos que poseen valores cívicos positivos, son propensos a participar.

Cuando una comunidad es ampliamente participativa y cívica, existe mucha probabilidad de que las personas que se adhieran a ella sigan los mismos patrones de conducta y participación (Ramírez, 2015). El interés hacia lo público, la solidaridad, el compromiso y la cooperación son valores transmitidos en la escuela, en el seno familiar o en asociaciones (Funes, 1994-citado por Montero et al, 2006), y a ello se suman las orientaciones políticas y

cívicas que asumen los ciudadanos en el transcurso de sus vidas. La participación en asociaciones permite que los integrantes adquieran conocimientos y desarrollen habilidades útiles para realizar actividades políticas complejas, además que genera una extensión y heterogeneidad en las redes sociales que beneficia la actividad política de los ciudadanos (Ramírez, 2015).

Los resultados de este estudio se asemejan a los de una investigación realizada por Velásquez (2010) en la ciudad de Bogotá, en el cual afirma que los motivos de las personas para ejercer la participación ciudadana están ligados a conceptos de solidaridad, altruismo y servicio a la comunidad; y por el contrario, las personas que no la ejercen, aluden a diferentes razones como la falta de tiempo, la débil cultura política y la desconfianza en los espacios y agentes estatales. En un estudio realizado en la ciudad de Montería, se halló que las personas poseen una gran desconfianza en las figuras de representación política y en los escenarios de participación relativos a las prácticas y vivencias de la democracia, lo cual afecta el interés de los ciudadanos por participar, quienes además consideran que en el municipio sobresale la corrupción y el clientelismo por encima de la transparencia democrática (Garcés, Palacio y Aguilar, 2010).

8.2 Percepción frente a los alcances y efectos de la participación ciudadana en el municipio

En cuanto a la incidencia de la participación ciudadana en la reducción del clientelismo y la politiquería, de las personas que han ejercido la participación, solo un 8,3% considera que ha influido, que es lo mismo que piensa el 15% de los que no han participado. Con respecto a la reducción de la corrupción, el 88,3% de los que han participado y el 90%

de los que no lo han hecho, consideran que la participación ciudadana no ha sido útil para reducir la corrupción en el municipio. Por otra parte, el 55% de las personas que participan y el 28,3% de los que no participan, consideran que la participación ciudadana ha ayudado a resolver los problemas de la gente. El 38,3% de las personas que participan y el 48,3% de las personas que no lo hacen, consideran que la participación ciudadana le ha permitido a la gente influir en las decisiones de las autoridades locales. El 58,3% de las personas que participan y el 48,3% de las que no participan, piensan que la participación ciudadana ha fortalecido el poder de los políticos. En relación a la incidencia de la participación ciudadana en el fortalecimiento de las organizaciones sociales (Juntas de Acción Comunal, grupos de mujeres, de jóvenes etc.), el 71,7% de las personas que participan y el 66,7% de las personas que no participan, consideran que la participación ciudadana ha sido útil en este fin.

Tabla 5. La Participación ciudadana en la reducción del clientelismo y la politiquería

Tabla cruzada PC4_A*PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS					
			PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS		Total
			No participa	Participa	
PC4_A	1	Recuento	9	5	14
		% dentro de PC4_A	64,3%	35,7%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	15,0%	8,3%	11,7%
		% del total	7,5%	4,2%	11,7%
	2	Recuento	51	55	106
		% dentro de PC4_A	48,1%	51,9%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	85,0%	91,7%	88,3%
		% del total	42,5%	45,8%	88,3%
		Total		Recuento	60
		% dentro de PC4_A	50,0%	50,0%	100,0%

	% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	100,0%	100,0%	100,0%
	% del total	50,0%	50,0%	100,0%

El 91,7% de las personas que participan consideran que la participación ciudadana no ha logrado reducir el clientelismo y la politiquería. El 85% de las personas que no participan consideran que la participación ciudadana no ha logrado reducir el clientelismo y la politiquería.

Tabla 6. *Influencia de la Participación ciudadana en las decisiones de las autoridades locales.*

Tabla cruzada PC4_D*PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS					
			PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS		Total
			No participa	Participa	
PC4_D	1	Recuento	29	23	52
		% dentro de PC4_D	55,8%	44,2%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	48,3%	38,3%	43,3%
		% del total	24,2%	19,2%	43,3%
	2	Recuento	31	37	68
		% dentro de PC4_D	45,6%	54,4%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	51,7%	61,7%	56,7%
		% del total	25,8%	30,8%	56,7%
Total		Recuento	60	60	120
		% dentro de PC4_D	50,0%	50,0%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	100,0%	100,0%	100,0%
		% del total	50,0%	50,0%	100,0%

El 38,3% de las personas que participan consideran que la participación ciudadana le ha permitido a la gente influir en las decisiones de las autoridades locales. El 48,3% de las personas que no participan consideran que la participación ciudadana le ha permitido a la gente influir en las decisiones de las autoridades locales.

De acuerdo a lo anterior, no hay una relación positiva entre el ejercicio de la participación ciudadana y la percepción que tienen los ciudadanos frente a los efectos y

alcances de la misma. Al parecer esta percepción de los participantes no es solo en el municipio de Sincelejo, podríamos estar frente a un imaginario social de carácter nacional, porque de acuerdo a una encuesta aplicada a los bogotanos, la participación si ha facilitado la intervención de los ciudadanos en los asuntos públicos, pero no ha logrado reducir la desconfianza en las instituciones, ni derrotar la corrupción, ni la politiquería, ni el clientelismo (Velásquez, 2010).

Un porcentaje considerable de encuestados considera que la participación ciudadana ha fortalecido el poder de los políticos. Esto se debe a que en los espacios de participación se representan intereses sociales particulares por medio de unos líderes que son designados mediante distintos procedimientos (elección, designación, nominación, autopostulación), los cuales además de defender intereses comunes con un determinado segmento de la población, buscan recibir beneficios propios que pueden ser de carácter económico, político o simbólico; otorgándole en la mayoría de las ocasiones más prioridad a los intereses personales que a la voluntad de los sectores representados (Velásquez, 2011). En la participación también se introducen lógicas clientelistas y autoritarias a través del fenómeno de cooptación política de los líderes sociales, generando una burocratización de los espacios de participación, donde los miembros activos crean informalmente sus propias reglas a través de un juego de poder y dominio que termina alejando progresivamente a la población de estos espacios (Velasquez, 2011).

Menos de la mitad de los encuestados considera que la participación ciudadana ha sido útil para influir en las decisiones de las autoridades locales. Olvera e Izunsa (2004) afirman que en América Latina se asumió el discurso de la participación ciudadana, pero que su ejercicio no fue real, que era más una simulación de apertura estatal a la ciudadanía, donde

no se reflejaba en el mejoramiento del desempeño gubernamental, sino que se buscaba era la legitimación de decisiones previamente adoptadas por la burocracia estatal.

Con respecto al desalentador resultado de la incidencia de la participación ciudadana en la reducción de la corrupción (el 88,3% de los que han participado y el 90% de los que no lo han hecho, consideran que la participación ciudadana no ha sido útil para reducir la corrupción en el municipio), Cano (2008) asegura que la corrupción es un problema público que ha generado detrimento económico y ha quebrantado la legitimidad gubernamental en América Latina. Por lo tanto, la sociedad civil se ha propuesto luchar en contra de la corrupción, idea que se enmarca dentro de la lógica de la gobernanza y que solo es posible construir en la medida que se integren simétricamente el Estado y otros actores no gubernamentales en el proceso de direccionamiento de la sociedad.

La participación ciudadana se constituye en un instrumento para presionar al aparato estatal por la materialización de los derechos que exigen de su actuación y la innovación en las políticas y prácticas administrativas; es un mecanismo de control del clientelismo y la politización del aparato público, en la medida que se configura el compartimiento del poder y; en una vía para aumentar la viabilidad y eficacia de la acción pública, pues implica concertación entre los actores comprometidos (Cunill, 1991).

8.3. Resultados entre participación ciudadana e imagen frente a la gestión pública

Para conocer la imagen que tienen los encuestados de algunas entidades públicas, además de valorar la opinión de los que no participan, se tiene en cuenta la subdivisión del grupo de personas que han ejercido la participación ciudadana: los que han participado en organismos autónomos, y por otro lado, los que han participado en espacios

institucionalizados. Se hace el análisis de esta forma para identificar una posible varianza entre un subgrupo y otro, porque si bien en ambos se participa, uno supone un contacto más directo con la administración pública que el otro.

El 71,2% de las personas que participan en organismos autónomos y el 66,7% de las personas que participan en espacios institucionalizados, tienen una imagen desfavorable de las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios (Acueducto, alcantarillado, aseo, energía, Gas combustible y telefonía pública); mientras que de las personas que no participan, la imagen desfavorable la tiene el 58,3%.

El 83,2% de las personas encuestada no conoce la Casa de Participación ciudadana; de los que no participan, el 3,3% tiene una imagen favorable y el otro 3,3% tienen una imagen desfavorable. Con respecto a los que si ejercen la participación ciudadana, el 22% tiene una imagen favorable y el 5,1% tiene una imagen desfavorable de la Casa de Participación Ciudadana. El 70,8% de las personas encuestada no conoce la Unidad de Participación Ciudadana y Veedurías de la Cámara de Comercio de Sincelejo; de los que no participan, el 15% tiene una imagen favorable y el otro 1,7% tiene una imagen desfavorable; el 31,7% de los que si ejercen la participación ciudadana tiene una imagen favorable y el 10% tiene una imagen desfavorable.

El 12,5% de los encuestados no conoce la Unidad de Salud Ese San Francisco de Asís, el 53,3% de los que no participan tienen una imagen favorable de ésta y el 30% tiene una imagen desfavorable. El 45,8% de las personas que participan en organismos autónomos y el 61,9% de las personas que participan en espacios institucionalizados tienen una imagen

favorable de la Unidad de Salud ESE San Francisco de Asís; el 53,3% de los que no participan tienen una imagen favorable de esta entidad y el 30% tiene una imagen desfavorable.

El 22,5% de los encuestados no conoce el Instituto Municipal de Deporte y Recreación- IMDER; el 47,5% de las personas que participan en organismos autónomos y el 52,4% de las personas que participan en espacios institucionalizados tienen una imagen desfavorable de esta entidad; el 38,3% de las personas que no participan tienen una imagen favorable y el 31,7% tiene una imagen desfavorable.

El 17,5% de los encuestados no conoce la entidad Metro Sabanas- Sistema Estratégico de Transporte Público en Sincelejo; el 50% de las personas que no participan tienen una imagen desfavorable y el 33,3% tiene una imagen favorable; el 57,6% de las personas que participan en organismos autónomos y el 52,4% de las personas que participan en espacios institucionalizados tienen una imagen desfavorable de esta entidad.

El 56,7% de las personas encuestadas desconocen la gestión del Fondo de vivienda y valorización FOVIS, el 33,9% de las personas que participan en organismos autónomos y el 57,1% de las personas que participan en espacios institucionalizados tienen una imagen desfavorable de esta entidad; el 10% de los que no participan tienen una imagen favorable de esta entidad y el 26,7% tiene una imagen desfavorable.

El 71,2% de las personas que participan en espacios autónomos y el 66,7% de las personas que participan en espacios institucionalizados tienen una imagen desfavorable del Concejo de la ciudad, el 14,2% de los encuestados no conoce la gestión de los actuales concejales, y el 63,3% de las personas que no ejercen participación ciudadana tiene una imagen desfavorable.

Tabla 7. Imagen de los encuestados que participan en organismos autónomos frente al concejo de la ciudad

Tabla cruzada IMA_11*PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS					
			PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS		Total
			No participa	Participa	
IMA_11	1	Recuento	10	7	17
		% dentro de IMA_11	58,8%	41,2%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS	16,4%	11,9%	14,2%
		% del total	8,3%	5,8%	14,2%
	2	Recuento	12	10	22
		% dentro de IMA_11	54,5%	45,5%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS	19,7%	16,9%	18,3%
		% del total	10,0%	8,3%	18,3%
	3	Recuento	39	42	81
		% dentro de IMA_11	48,1%	51,9%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS	63,9%	71,2%	67,5%
		% del total	32,5%	35,0%	67,5%
Total		Recuento	61	59	120
		% dentro de IMA_11	50,8%	49,2%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS	100,0%	100,0%	100,0%
		% del total	50,8%	49,2%	100,0%

El 71,2% de las personas que participan en organismos autónomos tienen una imagen desfavorable del Concejo de la ciudad.

Tabla 8. Imagen de los encuestados que participan en espacios institucionalizados frente al concejo de la ciudad

Tabla cruzada IMA_11*PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS					
			PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS		Total
			No participa	Participa	
IMA_11	1	Recuento	17	0	17
		% dentro de IMA_11	100,0%	0,0%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS	17,2%	0,0%	14,2%

	2	% del total	14,2%	0,0%	14,2%
		Recuento	15	7	22
		% dentro de IMA_11	68,2%	31,8%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS	15,2%	33,3%	18,3%
		% del total	12,5%	5,8%	18,3%
	3	Recuento	67	14	81
		% dentro de IMA_11	82,7%	17,3%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS	67,7%	66,7%	67,5%
		% del total	55,8%	11,7%	67,5%
		% del total	82,5%	17,5%	100,0%
Total		Recuento	99	21	120
		% dentro de IMA_11	82,5%	17,5%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS	100,0%	100,0%	100,0%
		% del total	82,5%	17,5%	100,0%

El 66,7% de las personas que participan en espacios institucionalizados tienen una imagen desfavorable del Concejo de la ciudad.

Tabla 9. Imagen de los encuestados que no participan frente al concejo de la ciudad

Tabla cruzada IMA_11*PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS					
			PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS		Total
			No participa	Participa	
IMA_11	1	Recuento	10	7	17
		% dentro de IMA_11	58,8%	41,2%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	16,7%	11,7%	14,2%
		% del total	8,3%	5,8%	14,2%
	2	Recuento	12	10	22
		% dentro de IMA_11	54,5%	45,5%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	20,0%	16,7%	18,3%
		% del total	10,0%	8,3%	18,3%
	3	Recuento	38	43	81
		% dentro de IMA_11	46,9%	53,1%	100,0%

El 20% de las personas que no participan tienen una imagen favorable del concejo de la ciudad y el 63,3% tiene una imagen desfavorable.

		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	63,3%	71,7%	67,5%
		% del total	31,7%	35,8%	67,5%
Total	Recuento		60	60	120
	% dentro de IMA_11		50,0%	50,0%	100,0%
	% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS		100,0%	100,0%	100,0%
	% del total		50,0%	50,0%	100,0%

El 62,7% de las personas que participan en organismos autónomos, el 61,9% de las personas que participan en espacios institucionalizados y el 53,3% de las personas que no participan tienen una imagen desfavorable del actual alcalde de la ciudad.

Tabla 10. Imagen de los encuestados que participan en organismos autónomos frente al actual alcalde de la ciudad

Tabla cruzada IMA_12*PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS					
			PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS		Total
			No participa	Participa	
IMA_12	2	Recuento	28	22	50
		% dentro de IMA_12	56,0%	44,0%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS	45,9%	37,3%	41,7%
		% del total	23,3%	18,3%	41,7%
	3	Recuento	33	37	70
		% dentro de IMA_12	47,1%	52,9%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS	54,1%	62,7%	58,3%
		% del total	27,5%	30,8%	58,3%
Total		Recuento	61	59	120
		% dentro de IMA_12	50,8%	49,2%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS	100,0%	100,0%	100,0%
		% del total	50,8%	49,2%	100,0%

El 62,7% de las personas que participan en organismos autónomos tienen una imagen desfavorable del actual alcalde de la ciudad.

Tabla 11. Imagen de los encuestados que participan en espacios institucionalizados frente al actual alcalde de la ciudad

Tabla cruzada IMA_12*PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS					
			PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS		Total
			No participa	Participa	
IMA_12	2	Recuento	42	8	50
		% dentro de IMA_12	84,0%	16,0%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS	42,4%	38,1%	41,7%
		% del total	35,0%	6,7%	41,7%
	3	Recuento	57	13	70
		% dentro de IMA_12	81,4%	18,6%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS	57,6%	61,9%	58,3%
		% del total	47,5%	10,8%	58,3%
Total		Recuento	99	21	120
		% dentro de IMA_12	82,5%	17,5%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS	100,0%	100,0%	100,0%
		% del total	82,5%	17,5%	100,0%

El 61,9% de las personas que participan en espacios institucionalizados tienen una imagen desfavorable del actual Alcalde de la ciudad.

Tabla 12. Imagen de los encuestados que no ejercen la participación ciudadana frente al actual alcalde de la ciudad

Tabla cruzada IMA_12*PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS					
			PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS		Total
			No participa	Participa	
IMA_12	2	Recuento	28	22	50
		% dentro de IMA_12	56,0%	44,0%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	46,7%	36,7%	41,7%
		% del total	23,3%	18,3%	41,7%
	3	Recuento	32	38	70
		% dentro de IMA_12	45,7%	54,3%	100,0%

El 53,3% de las personas que no participan tienen una imagen desfavorable del actual Alcalde de la ciudad.

		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	53,3%	63,3%	58,3%
		% del total	26,7%	31,7%	58,3%
Total		Recuento	60	60	120
		% dentro de IMA_12	50,0%	50,0%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	100,0%	100,0%	100,0%
		% del total	50,0%	50,0%	100,0%

El 66,1% de los encuestados no conoce el equipo de gobierno del actual alcalde, el 20,7% de las personas que participan en organismos autónomos y el 33,3% de las personas que participan en espacios institucionalizados, tienen una imagen favorable de este equipo de gobierno; el 6,8% de las personas que no participan tienen una imagen favorable y el 23,7% tiene una imagen desfavorable.

Atendiendo a lo anterior, no se presenta una relación positiva entre el ejercicio de la participación ciudadana y la imagen de los ciudadanos frente a la gestión pública. De igual forma, las personas que participan en espacios institucionalizados tienen una mejor imagen frente a la gestión pública, que aquellas personas que participan en organismos autónomos.

Para proyectar una imagen favorable es necesario que los actores encargados de la Gestión pública evidencien resultados de desarrollo en el territorio y un mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes. También, es imprescindible que se la comunidad los perciba como personas idóneas para el cargo, responsables y comprometidas con su labor.

Para que los ciudadanos construyan una imagen favorable de los miembros del concejo, esta corporación debe dar cumplimiento a sus funciones, las cual están orientadas a

“Asegurar el buen uso de los recursos públicos; asegurar la eficiencia, la eficacia, calidad y equidad en la prestación de servicios; garantizar la participación ciudadana; garantizar el buen desempeño de las funciones de la administración y fomentar la transparencia y las buenas prácticas administrativas” (DNP, 2011, p. 144).

Es importante que los ciudadanos perciban a las autoridades públicas comprometidas, con vocación de servicio y con un liderazgo político que encamine al territorio hacia el alcance de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo y hacia la obtención de un bienestar general. El DNP (2007) manifiesta que un liderazgo político efectivo se caracteriza por ser honesto y democrático.

La honestidad implica transparencia en el accionar, para lo cual es imprescindible que estos actores gubernamentales hagan rendición de cuentas ante los organismos de control y toda la ciudadanía en general, estableciendo mecanismos de comunicación e interacción con los ciudadanos que contribuyan a evitar la corrupción.

Cuando se hace alusión a que el liderazgo político debe ser democrático, el DNP se refiere a la creación de espacios de diálogo, participación y concertación, donde los actores locales puedan conocer, intervenir y aportar en las decisiones que afectan a toda la comunidad. Finalmente, la consolidación de un liderazgo político efectivo y de amplia visión es “un reto que demanda el desarrollo de habilidades del alcalde y los concejales para conducir a los diferentes actores del territorio hacia la búsqueda de respuestas concretas y consensos que contribuyan a solucionar los problemas y el aprovechar las oportunidades” (DNP, 2007, p. 67). Siendo esto lo que se persigue mediante los espacios institucionalizados de participación ciudadana, un contacto más directo con la ciudadanía y sus necesidades, que

permita la construcción conjunta de políticas destinadas al desarrollo y la solución de las problemáticas. Las personas que participan en estos espacios, generalmente, tienen mayor interacción con los dirigentes políticos y mayor conocimiento de los asuntos públicos. En este estudio se ha confirmado la teoría que estas personas tienen una imagen más favorable frente a la gestión pública que aquellas personas que no participan en los dichos espacios.

8.4. Resultados entre participación ciudadana y eficiencia de la gestión Pública

Para conocer la opinión de los encuestados sobre la eficiencia de la actual administración, se les pidió que calificaran, en una escala de 1 a 5, la gestión de diversas entidades que hacen parte de ésta y sobre las cuales debe velar por un buen funcionamiento (siendo 1 muy mala gestión y 5 muy buena gestión). Además, se les pidió a los participantes que calificaran la gestión que ha venido realizando el actual alcalde y los actuales concejales, atendiendo a que el primero es la máxima autoridad gubernativa encargada de dirigir la gestión pública en el municipio, y los segundos también son una autoridad fundamental de la administración pública que actúan como órgano deliberante de la gestión y representan ante el gobierno los intereses de los ciudadanos.

Es preciso aclarar que los encuestados solo emitían una calificación frente aquellas entidades que conocen. En el ítem de “imagen” se discrimina el número de personas que no conocen cada entidad, y los resultados atinentes a la dimensión “eficiencia” se basan únicamente en la calificación que emitieron las personas que manifestaron si conocer la entidad por la que se les preguntaba.

- **Empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios (Acueducto, alcantarillado, aseo, energía, Gas combustible y telefonía pública):** el 18,6% de las personas que participan en organismos autónomos califican en uno (1) la gestión de estas empresas, el 35,6% en dos (2), el 28,8% en tres (3), el 15,3% en cuatro (4) y el 1,7% en cinco (5). Del grupo de personas que participan en espacios institucionalizados, el 9,5% las califica con uno (1), el 38,1% con dos (2), el 23,8% con tres (3), el 23,8% con cuatro (4) y el 4,8% le otorga una calificación de cinco (5). Del grupo de los que no participan, el 6,7% las califica con uno (1), el 33,3% con dos (2), el 33,3% con tres (3) y el 26,7% con (4).
- **Casa de Participación Ciudadana:** Del grupo de personas que participan en organismos autónomos, el 12,5% le otorga una calificación de dos (2), el 43,8% le otorga una calificación de tres (3), el 31,3% le otorga una calificación de cuatro (4) y el 12,5% le otorga una calificación de cinco (5). Del conjunto de personas que participan en espacios institucionalizados, el 25% le otorga una calificación de tres (3), el 50% le otorga una calificación de cuatro (4) y el 25% le otorga una calificación de cinco (5). Del grupo de los que no participan, el 25,0% le asigna una calificación de uno (1) y el 75% le asigna una calificación de tres (3).
- **Unidad de Salud ESE San Francisco de Asís:** Del conjunto de personas que participan en organismos autónomos, el 7,4% le otorga una calificación de uno (1), el 31,5% le otorga una calificación de dos (2), el 18,5% le otorga una calificación de tres (3), el 37% le otorga una calificación de cuatro (4) y el 5,6% le otorga una calificación de cinco (5). De las personas que participan en espacios institucionalizados, el 25% le otorga una calificación de dos (2), el 30% le otorga una calificación de tres (3), el 30% le otorga una calificación de cuatro (4) y el 15% le

otorga una calificación de cinco (5). Con respecto a los que no participan, el 6% le otorga una calificación de uno (1), el 28% le otorga una calificación de dos (2), el 8% le otorga una calificación de tres (3), el 46% le otorga una calificación de cuatro (4) y el 12% le otorga una calificación de cinco (5).

Tabla 13. Percepción de eficiencia de los encuestados que participan en espacios institucionalizados frente a la Unidad de Salud ESE San Francisco de Asís.

Tabla cruzada GES_6*PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS					
			PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS		Total
			No participa	Participa	
GES_6	1	Recuento	3	4	7
		% dentro de GES_6	42,9%	57,1%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS	5,9%	7,4%	6,7%
		% del total	2,9%	3,8%	6,7%
	2	Recuento	14	17	31
		% dentro de GES_6	45,2%	54,8%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS	27,5%	31,5%	29,5%
		% del total	13,3%	16,2%	29,5%
	3	Recuento	4	10	14
		% dentro de GES_6	28,6%	71,4%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS	7,8%	18,5%	13,3%
		% del total	3,8%	9,5%	13,3%
	4	Recuento	24	20	44
		% dentro de GES_6	54,5%	45,5%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS	47,1%	37,0%	41,9%
		% del total	22,9%	19,0%	41,9%
	5	Recuento	6	3	9
		% dentro de GES_6	66,7%	33,3%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS	11,8%	5,6%	8,6%
		% del total	5,7%	2,9%	8,6%
Total		Recuento	51	54	105
		% dentro de GES_6	48,6%	51,4%	100,0%

	% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS	100,0%	100,0%	100,0%
	% del total	48,6%	51,4%	100,0%

Tabla 14. Percepción de eficiencia de los encuestados que participan en espacios autónomos frente a la Unidad de Salud ESE San Francisco de Asís.

Tabla cruzada GES_6*PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS					
			PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS		Total
			No participa	Participa	
GES_6	1	Recuento	7	0	7
		% dentro de GES_6	100,0%	0,0%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS	8,2%	0,0%	6,7%
		% del total	6,7%	0,0%	6,7%
	2	Recuento	26	5	31
		% dentro de GES_6	83,9%	16,1%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS	30,6%	25,0%	29,5%
		% del total	24,8%	4,8%	29,5%
	3	Recuento	8	6	14
		% dentro de GES_6	57,1%	42,9%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS	9,4%	30,0%	13,3%
		% del total	7,6%	5,7%	13,3%
	4	Recuento	38	6	44
		% dentro de GES_6	86,4%	13,6%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS	44,7%	30,0%	41,9%
		% del total	36,2%	5,7%	41,9%
	5	Recuento	6	3	9
		% dentro de GES_6	66,7%	33,3%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS	7,1%	15,0%	8,6%
		% del total	5,7%	2,9%	8,6%
Total	Recuento	85	20	105	
	% dentro de GES_6	81,0%	19,0%	100,0%	
	% dentro de PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS	100,0%	100,0%	100,0%	
	% del total	81,0%	19,0%	100,0%	

Tabla 15. Percepción de eficacia de los encuestados que no ejercen la participación ciudadana frente a la Unidad de Salud ESE San Francisco de Asís.

Tabla cruzada GES_6*PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS					
			PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS		Total
			No participa	Participa	
GES_6	1	Recuento	3	4	7
		% dentro de GES_6	42,9%	57,1%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	6,0%	7,3%	6,7%
		% del total	2,9%	3,8%	6,7%
	2	Recuento	14	17	31
		% dentro de GES_6	45,2%	54,8%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	28,0%	30,9%	29,5%
		% del total	13,3%	16,2%	29,5%
	3	Recuento	4	10	14
		% dentro de GES_6	28,6%	71,4%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	8,0%	18,2%	13,3%
		% del total	3,8%	9,5%	13,3%
	4	Recuento	23	21	44
		% dentro de GES_6	52,3%	47,7%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	46,0%	38,2%	41,9%
		% del total	21,9%	20,0%	41,9%
	5	Recuento	6	3	9
		% dentro de GES_6	66,7%	33,3%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	12,0%	5,5%	8,6%
		% del total	5,7%	2,9%	8,6%
Total		Recuento	50	55	105
		% dentro de GES_6	47,6%	52,4%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	100,0%	100,0%	100,0%
		% del total	47,6%	52,4%	100,0%

- **Instituto municipal de Deporte y Recreación- IMDER:** Del grupo de personas que participan en organismos autónomos, el 17,6% califica la gestión de esta entidad

en (1), el 25,5% en dos (2), el 23,5% en tres (3), el 27,5% en cuatro (4) y el 5,9% en cinco (5). Del grupo de personas que participan en espacios institucionalizados, el 10,5% le otorga una calificación de uno (1), el 36,8% le otorga una calificación de dos (2), el 21,1% le otorga una calificación de tres (3), el 26,3% le otorga una calificación de cuatro (4), el 5,3% le otorga una calificación de cinco (5). Con respecto a los que no participan, el 14,6% califica la entidad en uno (1), el 29,3% en dos (2), el 12,2% en tres (3), el 36,6% en cuatro (4) y el 7,3% en cinco (5).

- **Metro Sabanas- Sistema Estratégico de Transporte Público en Sincelejo:** El 29,2% de las personas que participan en organismos autónomos le otorgan una calificación en la gestión de uno (1), el 31,3% de dos (2), el 16,7% de tres (3) y el 22,9% de cuatro (4). Del conjunto de personas que participan en espacios institucionalizados, el 10,5% le otorga una calificación de uno (1), el 26,3% le otorga una calificación de dos (2), el 31,6% le otorga una calificación de tres (3) y el 31,6% le otorga una calificación de cuatro (4). En relación a los que no participan, el 26,5% le otorga una calificación de uno (1), el 32,7% le otorga una calificación de dos (2), el 6,1% le otorga una calificación de tres (3), el 32,7% le otorga una calificación de cuatro (4) y el 2% le otorga una calificación de cinco (5).
- **Fondo de vivienda y valorización FOVIS:** Haciendo alusión a las personas que participan en organismos autónomos, el 30% califica la gestión de esta entidad en uno (1), el 30% en dos (2), el 10% en tres (3), el 26,7% en cuatro (4) y el 3,3% en cinco (5). De las personas que participan en espacios institucionalizados, el 31,3% le otorga una calificación de uno (1), el 31,3% de dos (2), el 18,8% de tres (3), el 12,5% de cuatro (4) y el 6,3% de cinco (5). Con respecto a los que no participan, el 23,8% la

califica con uno (1), el 47,6% la califica con dos (2), el 19% la califica con cuatro (4) y el 9,5% la califica con cinco (5).

- **Concejo de la ciudad:** El 25% de las personas que participan en organismos autónomos le otorgan una calificación de uno (1) a la gestión del actual concejo municipal, el 46,2% le otorga una calificación de dos (2), el 9,6% le otorga una calificación de tres (3), el 17,3% le otorga una calificación de cuatro (4) y el 1,9% le otorga una calificación de cinco (5). Del grupo de personas que participan en espacios institucionalizados, el 19% lo califica con uno (1), el 38,1% con dos (2), el 9,5% con tres (3), el 28,6% con cuatro (4) y el 4,8% con cinco (5). Del grupo de personas que no participan, el 27,1% lo califica con uno (1), el 41,7% lo califica con dos (2), el 10,4% lo califica con tres (3) y el 20,8% lo califica con cuatro (4).
- **Actual alcalde de la ciudad:** Del grupo de personas que participan en organismos autónomos, el 18,6% le otorga una calificación de uno (1) a la gestión que ha desarrollado hasta la fecha el actual alcalde, el 28,8% le otorga una calificación de dos (2), el 16,9% le otorga una calificación de tres (3), el 32,2% le otorga una calificación de cuatro (4) y el 3,4% le otorga una calificación de cinco (5). Con respecto a los que participan en espacios institucionalizados, el 14,3% le otorga una calificación de uno (1), el 33,3% le otorga una calificación de dos (2), el 19% le otorga una calificación de tres (3), el 23,8% le otorga una calificación de cuatro (4) y el 9,5% le otorga una calificación de cinco (5). Del grupo de personas que no participan, el 10% califica la gestión en uno (1), el 33,3% en dos (2), el 11,7% en tres (3), el 36,7% en cuatro (4) y el 8,3% en cinco (5).

- **El Equipo de gobierno del alcalde (secretarios de despacho):** De los participantes en organismos autónomos, el 22,7% lo califica con uno (1), otro 22,7% lo califica con dos (2), el 13,6% lo califica con tres (3), el 31,8% lo califica con cuatro (4) y el 9,1% lo califica con cinco (5). Del conjunto de personas que participan en espacios institucionalizados, el 9,1% le otorga una calificación de uno (1), el 18,2% le otorga una calificación de dos (2), el 18,2% le otorga una calificación de tres (3), el 36,4% le otorga una calificación de cuatro (4) y el 18,2% le otorga una calificación de cinco (5). En relación a los que no participan, el 38,9% califica la gestión de este equipo con uno (1), el 27,8% con dos (2), el 11,1% con tres (3) y el 22,2% con cuatro (4).

El 20% de las personas que no participan, se encuentran muy insatisfechas con la forma como la actual administración invierte los recursos del municipio, el 35% se encuentran algo insatisfechas, el 33,3% no se encuentran ni satisfechas ni insatisfechas y el 11,7% se encuentran algo satisfechas. Con respecto a las personas que si participan, el 21,7% se encuentran muy insatisfechas con la forma como la actual administración invierte los recursos del municipio, el 41,7% se encuentran algo insatisfechas, el 25% no se encuentran ni satisfechas ni insatisfechas y el 11,7% se encuentran algo satisfechas.

Tabla 16. Satisfacción de los encuestados con la forma en que la actual administración invierte los recursos del municipio

Tabla cruzada GPEF16*PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS					
			PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS		Total
			No participa	Participa	
GPE F16	1	Recuento	12	13	25
		% dentro de GPEF16	48.0%	52.0%	100.0%

	2	% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	20,0%	21,7%	20,8%
		% del total	10,0%	10,8%	20,8%
		Recuento	21	25	46
		% dentro de GPEF16	45,7%	54,3%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	35,0%	41,7%	38,3%
	3	% del total	17,5%	20,8%	38,3%
		Recuento	20	15	35
		% dentro de GPEF16	57,1%	42,9%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	33,3%	25,0%	29,2%
		% del total	16,7%	12,5%	29,2%
	4	Recuento	7	7	14
		% dentro de GPEF16	50,0%	50,0%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	11,7%	11,7%	11,7%
		% del total	5,8%	5,8%	11,7%
	Total	Recuento	60	60	120
		% dentro de GPEF16	50,0%	50,0%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	100,0%	100,0%	100,0%
		% del total	50,0%	50,0%	100,0%

De acuerdo a estos resultados, no existe una relación positiva entre el ejercicio de la participación ciudadana y la percepción de eficiencia frente a la gestión pública. De igual forma, las personas que participan en espacios institucionalizados consideran más eficiente la gestión de la actual administración, que aquellas personas que participan en organismos autónomos.

La Constitución Política en su artículo 339 establece que las entidades territoriales deben “asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones

que les hayan sido asignadas por la Constitución y la Ley” y; el DNP (2011), por su parte, afirma que la gestión Pública debe responder eficaz y eficientemente en la reducción de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, para lo cual, la prestación de los servicios y productos debe ser en condiciones de calidad. De acuerdo a lo anterior, el progreso de los municipios depende en gran medida de la eficiencia de la gestión pública (DNP, 2007), porque para dar cumplimiento a los objetivos y las metas trazadas, se deben optimizar todos los recursos, en aras de alcanzar buenos resultados y un excelente impacto, haciendo un uso racional de los insumos que están a disposición.

8.5 Resultados entre participación ciudadana y eficacia de la gestión pública

- **Gestión del actual alcalde:**

El 11,6% de los encuestados que ejercen la participación ciudadana, considera que la gestión del actual alcalde ha sido eficaz porque ha tenido una adecuada concertación con la gente, el 15% considera que ha cumplido con lo prometido en su programa de gobierno, el 16,6% considera que conoce las problemáticas de la ciudad, el 5% considera que ha tenido eficiencia técnica en su equipo de gobierno, el 8,3% considera que se ha concentrado en acciones prioritarias, el 5% considera que ha sido hábil políticamente en la venta de sus proyectos, el 6,6% considera que ha tenido autoridad frente a su equipo de gobierno, el 11,6% considera que el actual alcalde ha tenido autoridad frente a la ciudadanía, el 11,6% considera que tiene liderazgo, el 5% considera que el actual alcalde ha tomado decisiones oportunas y adecuadas, el 3,3% considera que sostiene una buena relación con el nivel nacional de gobierno, el 3,3% considera que sostiene una buena relación con los empresarios de la ciudad,

el 1,6% considera que el actual alcalde sostiene una buena relación con el Concejo de la ciudad y el 1,6% considera que es transparente y honesto.

Por el contrario, el 18,3% del mismo grupo de los que participan, considera que al alcalde no ha sido eficaz en su gestión porque le ha faltado concertación con la gente, el 38,3% considera que no ha cumplido con lo prometido en su programa de gobierno, el 11,6% considera que desconoce algunas problemáticas de la ciudad, el 13,3% considera que no ha tenido una buena gestión por las deficiencias técnicas en su equipo de gobierno, el 10% considera que se ha concentrado en acciones no prioritarias, el 8,3% considera que le ha faltado habilidad política en la venta de sus proyectos, el 8,3% considera que le ha faltado liderazgo, el 5% considera que tienen debilidad para tomar decisiones, el 3,3% considera que le falta autoridad frente a la ciudadanía y el 6,6% considera que es clientelista.

Haciendo mención al grupo de encuestados que no ejerce la participación ciudadana, el 11,6% considera que el actual alcalde tiene una adecuada concertación con la gente, el 20% afirma que ha cumplido con lo prometido en su programa de gobierno, el 28,3% sostiene que conoce las problemáticas de la ciudad, el 8,3% piensa que ha habido eficiencia técnica en su equipo de gobierno, el 15% considera que se ha concentrado en acciones prioritarias, el 11,6% considera que ha sido hábil políticamente en la venta de sus proyectos, el 3,3% considera que ha tenido autoridad frente a su equipo de gobierno, el 8,3% afirma que ha tenido autoridad frente a la ciudadanía, el 16,6% afirma que tiene liderazgo, el 15% considera que ha tomado decisiones oportunas y adecuadas, el 3,3% manifiesta que tiene una buena relación con el nivel nacional de gobierno, el 3,3% manifiesta que tiene una buena relación con los empresarios de la ciudad, el 1,6% considera que sostiene una buena relación con el concejo de la ciudad y el 3,3% considera que es transparente y honesto.

A diferencia, del mismo grupo de personas que no ejercen la participación ciudadana, el 30% afirma que el alcalde no ha sido eficaz en su gestión porque le ha faltado concertación con la gente, el 35% afirma que no ha cumplido con lo prometido en su programa de gobierno, el 18,3% afirma que desconoce algunas problemáticas de la ciudad, el 11,6% afirma que no ha realizado una buena gestión por deficiencias técnicas en su equipo de gobierno, el 11,6% sostiene que se ha concentrado en acciones no prioritarias, el 8,3% manifiesta que le ha faltado habilidad política en la venta de sus proyectos, el 8,3% considera que le ha faltado liderazgo, el 3,3% opina que tiene debilidad para tomar decisiones, el 3,3% opina que le falta de autoridad frente a la ciudadanía, el 1,6% opina que tiene una deficiente relación con los empresarios, el 6,6% opina que es clientelista y el 3,3% opina que ha tenido un mal manejo del tema de valorización.

▪ **Gestión de los concejales:**

El 5% de las personas que participan, consideran que los concejales son eficaces en su gestión porque están trabajando por la ciudad, el 3,3% considera que si gestionan los proyectos, el 1,6% considera que dan soluciones a los problemas de la comunidad, el 3,3% considera que si trabajan y brindan apoyo al alcalde, el 1,6% considera que cumplen con lo prometido, el 16,6% considera que han hecho una buena gestión, el 1,6% considera que trabajan por lo que el alcalde no ha hecho, el 3,3% considera que conocen las problemáticas de la ciudad, el 5% considera que se preocupan por el bienestar de la gente, el 5% considera que se preocupan y trabajan por la ciudad, el 5% considera que han trabajado por la educación, el 1,6% considera que si le hacen control político al alcalde, el 1,6% afirma que se preocupan por los recursos de la ciudad y el 1,6% considera que cumplen lo que prometen.

Del mismo grupo de las personas que participan, el 30% considera que los concejales no son eficaces en su gestión porque no cumplen lo que prometen, el 30% considera que son corruptos y ladrones, el 31,6% considera que no trabajan por la ciudad, el 31,6% considera que son unos politiqueros, el 48,3% considera que solo trabajan para su propio beneficio, el 23,3% considera que no se les ven los resultados de sus trabajos, el 6,6% considera que solo hablan y no hacen más nada, el 5% considera que no conocen los problemas de la ciudad, el 20% considera que no han realizado una buena gestión, el 3,3% considera que no trabajan (no hacen nada), el 3,3% considera que no trabajan en equipo y el 1,6% considera que trabajan a medias y no finalizan los proyectos.

El 13,3% de las personas que no participan, consideran que los concejales son eficaces en su gestión porque si están trabajando por la ciudad, el 6,6% considera que si gestionan los proyectos, el 5% manifiesta que dan soluciones a los problemas de la comunidad, el 1,6% considera que si trabajan y brindan apoyo al alcalde, el 1,6% manifiesta que cumplen con lo prometido, el 16,6% considera que tienen una buena gestión, el 5% considera que conocen las problemáticas de la ciudad, el 3,3% considera que trabajan por lo que el alcalde no ha hecho, el 1,6% considera que se preocupan y trabajan por la ciudad y el 1,6% considera que se preocupan por los recursos de la ciudad.

Del mismo grupo de personas que no ejercen la participación ciudadana, el 35% considera que los concejales no cumplen lo que prometen, el 35% afirma que son corruptos y ladrones, el 30% afirma que no trabajan por la ciudad, el 33,3% afirma que son unos politiqueros, el 43,3% afirma que solo trabajan para su propio beneficio, el 23,3% sostiene que no se les ven los resultados de sus trabajos, el 3,3% sostiene que no le brindan apoyo al alcalde, el 5% sostiene que no aprueban ningún proyecto, el 5% afirma que solo hablan y no

hacen más nada, el 8,3% sostiene que no conocen los problemas de la ciudad, el 16,6% sostiene que no han realizado una buena gestión, el 6,6% afirma que no trabajan (no hacen nada), el 3,3% sostiene que no trabajan en equipo y el 5% manifiesta que trabajan a medias y no finalizan los proyectos.


▪ **Eficacia en el desarrollo de los ejes programáticos y estratégicos:**

El 25% de las personas que no participan, consideran que la actual administración no ha trabajado en el área de la seguridad ciudadana y convivencia; el 4,4% de las personas de este grupo se encuentran muy insatisfechas con la gestión que ha realizado en esta área; el 11,1% algo insatisfechas; el 46,7% ni satisfechas ni insatisfechas; el 31,1% algo satisfechas y el 6,7% muy satisfechas. Con respecto a las personas que ejercen la participación ciudadana, el 31,6% consideran que la actual administración no ha trabajado en el ámbito de la Seguridad ciudadana y convivencia; el 9,8% consideran que si se ha trabajado pero están muy insatisfechas con esa gestión; el 17,1% están algo insatisfechas; el 56,1% no están ni satisfechas ni insatisfechas, el 14,6% están algo satisfechas y el 2,4% están muy satisfechas.

Tabla 17. Satisfacción de los encuestados con la gestión que ha realizado la actual administración en el área de la seguridad ciudadana y convivencia.

Tabla cruzada P107_1*PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS					
			PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS		Total
			No participa	Participa	
P107_1	1	Recuento	2	4	6
		% dentro de P107_1	33,3%	66,7%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	4,4%	9,8%	7,0%
		% del total	2,3%	4,7%	7,0%
	2	Recuento	5	7	12
		% dentro de P107_1	41,7%	58,3%	100,0%

		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	11,1%	17,1%	14,0%
		% del total	5,8%	8,1%	14,0%
	3	Recuento	21	23	44
		% dentro de P107_1	47,7%	52,3%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	46,7%	56,1%	51,2%
		% del total	24,4%	26,7%	51,2%
	4	Recuento	14	6	20
		% dentro de P107_1	70,0%	30,0%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	31,1%	14,6%	23,3%
		% del total	16,3%	7,0%	23,3%
	5	Recuento	3	1	4
		% dentro de P107_1	75,0%	25,0%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	6,7%	2,4%	4,7%
		% del total	3,5%	1,2%	4,7%
	Total	Recuento	45	41	86
		% dentro de P107_1	52,3%	47,7%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	100,0%	100,0%	100,0%
		% del total	52,3%	47,7%	100,0%

 El 35% de las personas que no participan, consideran que la actual administración no ha trabajado en el ámbito de la educación pública; el 12,8% considera que si han trabajado en esta área, pero se encuentran muy insatisfechas con la gestión realizada; el 10,3% algo insatisfechas; el 38,5% ni satisfechas ni insatisfechas; el 33,3% algo satisfechas y el 5,1% muy satisfechas. El 35% de las personas que ejercen la participación ciudadana, consideran que la actual administración no ha trabajado en el ámbito de la Educación Pública; el 7,7% consideran que si se ha trabajado en esta área, pero están muy insatisfechas con esa gestión; el 12,8% están algo insatisfechas; el 41% no están ni satisfechas ni insatisfechas; el 35,9% están algo satisfechas y el 2,6% están muy satisfechas.




-  El 48,3% de las personas que no ejercen la participación ciudadana, consideran que la actual administración no ha trabajado en el área de la Salud Pública; el 9,7% se encuentran muy insatisfechas con la gestión realizada en esta área; el 29% se encuentran algo insatisfechas; el 32,3 no se encuentran ni satisfechas ni insatisfechas; el 19,4% se encuentran algo satisfechas y el 9,7% se encuentra muy satisfechas. El 45% de las personas que participan, consideran que la actual administración no ha trabajado en el ámbito de la Salud Pública; el 9,1% considera que si se ha trabajado pero se encuentran muy insatisfechas con esa gestión; el 15,2% se encuentran algo insatisfechas; el 45,5% no se encuentran ni satisfechas ni insatisfechas y el 30,3% se encuentran algo satisfechas.
-  El 73,3% de las personas que no participan, consideran que la actual administración no ha trabajado por el desarrollo económico de la ciudad y generación de empleo; el 18,8% se encuentran muy insatisfechas con la gestión que ha realizado la actual administración en este ámbito; otro 18,8% se encuentran algo insatisfechas; el 37,5% no se encuentran ni satisfechas ni insatisfechas; el 25% se encuentran algo satisfechas y el 9,7% se encuentran muy satisfechas. El 65% de las personas que participan, consideran que la actual administración no ha trabajado por el desarrollo económico de la ciudad y generación de empleo; el 14,3% consideran que si se ha trabajado pero están muy insatisfechas con esa gestión; el 14,3% algo insatisfechas; el 38,1% ni satisfechas ni insatisfechas y el 33,3% algo satisfechos.

Tabla 18. Satisfacción de los encuestados con la gestión que ha realizado la actual administración por el desarrollo económico de la ciudad.

Tabla cruzada P107_5*PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS
--

			PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS		Total
			No participa	Participa	
P107_5	1	Recuento	3	3	6
		% dentro de P107_5	50,0%	50,0%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	18,8%	14,3%	16,2%
		% del total	8,1%	8,1%	16,2%
	2	Recuento	3	3	6
		% dentro de P107_5	50,0%	50,0%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	18,8%	14,3%	16,2%
		% del total	8,1%	8,1%	16,2%
	3	Recuento	6	8	14
		% dentro de P107_5	42,9%	57,1%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	37,5%	38,1%	37,8%
		% del total	16,2%	21,6%	37,8%
	4	Recuento	4	7	11
		% dentro de P107_5	36,4%	63,6%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	25,0%	33,3%	29,7%
		% del total	10,8%	18,9%	29,7%
Total	Recuento		16	21	37
	% dentro de P107_5		43,2%	56,8%	100,0%
	% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS		100,0%	100,0%	100,0%
	% del total		43,2%	56,8%	100,0%

 El 58,3% de las personas que no participan, consideran que la actual administración no ha realizado acciones para hacer más eficiente la prestación de los servicios públicos y ampliar su cobertura; el 4% de las personas están muy insatisfechas; el 24% están algo insatisfechas; el 56% no están ni satisfechas ni insatisfechas; el 12% están algo satisfechas y el 4% están muy satisfechas. El 60% de las personas que

participan, consideran que la actual administración no ha realizado acciones para hacer más eficiente la prestación de los servicios públicos y ampliar la cobertura; el 12,5% consideran que si se ha trabajado en esta área, pero se encuentran muy insatisfechas con la gestión realizada; el 8,3% están algo insatisfechas; el 50% no están ni satisfechas ni insatisfechos y el 29,2% están algo satisfechas.

El 33,3% de las personas que no participan, consideran que la actual administración no ha trabajado en el ámbito de la movilidad vial y el transporte; el 7,5% se encuentran muy insatisfechas con la gestión que se ha realizado en este campo; el 22,5% están algo insatisfechas; el 37,5 no están ni satisfechas ni insatisfechas, el 27,5% algo satisfechas y el 5% muy satisfechas. El 23,3% de las personas que participan, consideran que la actual administración no ha trabajado en el ámbito de la movilidad vial y el transporte; el 17,4% consideran que si se ha trabajado pero están muy insatisfechas con la gestión que se ha realizado; el 28,3% se encuentran algo insatisfechas; el 30,4% no están ni satisfechas ni insatisfechas; el 19,6% se encuentran algo satisfechas y el 4,3% se encuentran muy satisfechas.

El 33,3% de las personas que no participan, consideran que la actual administración no ha trabajado en el ámbito de la recreación y el deporte; el 12,5% se encuentran muy insatisfechas con la gestión que ha realizado la actual administración en este ámbito; el 45% se encuentran algo insatisfechas; el 27,5% no se encuentran ni satisfechas ni insatisfechas y el 15% se encuentran algo satisfechas. El 36,6% de las personas que participan, consideran que la actual administración no ha trabajado en el ámbito de la recreación y el deporte; el 2,6% se encuentran muy insatisfechas con la gestión que se ha hecho en este ámbito; el 13,2% se encuentran algo insatisfechas;

el 42,1% no se encuentran ni satisfechas ni insatisfechas; el 31,6% se encuentran algo satisfechas y el 10,5% se encuentran muy satisfechas.

Tabla 19. Satisfacción de los encuestados con la gestión que ha realizado la actual administración por el área de la recreación y el deporte.

Tabla cruzada P107_9*participación EN ORGANISMOS Y ESPACIOS					
			participación EN ORGANISMOS Y ESPACIOS		Total
			No participa	Participa	
P107_9	1	Recuento	0	1	1
		% dentro de P107_9	0,0%	100,0%	100,0%
		% dentro de participación EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	0,0%	2,6%	1,3%
		% del total	0,0%	1,3%	1,3%
	2	Recuento	5	5	10
		% dentro de P107_9	50,0%	50,0%	100,0%
		% dentro de participación EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	12,5%	13,2%	12,8%
		% del total	6,4%	6,4%	12,8%
	3	Recuento	18	16	34
		% dentro de P107_9	52,9%	47,1%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	45,0%	42,1%	43,6%
		% del total	23,1%	20,5%	43,6%
	4	Recuento	11	12	23
		% dentro de P107_9	47,8%	52,2%	100,0%
		% dentro de participación EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	27,5%	31,6%	29,5%
		% del total	14,1%	15,4%	29,5%
	5	Recuento	6	4	10
		% dentro de P107_9	60,0%	40,0%	100,0%
		% dentro de participación EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	15,0%	10,5%	12,8%
		% del total	7,7%	5,1%	12,8%
Total	Recuento	40	38	78	
	% dentro de P107_9	51,3%	48,7%	100,0%	
	% dentro de participación EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	100,0%	100,0%	100,0%	
	% del total	51,3%	48,7%	100,0%	

- ✚ El 48,3% de las personas que no participan, consideran que la actual administración no ha trabajado por el medio ambiente; el 10,3% consideran que si se ha trabajado en ésta área, pero se encuentran muy insatisfechas con la gestión realizada; el 20,7% se encuentran algo insatisfechas; el 37,9% no se encuentran ni satisfechas ni insatisfechas; el 24,1% se encuentran algo satisfechas y el 6,9% se encuentran muy satisfechas. El 45% de las personas que participan, consideran que la actual administración no ha trabajado por el medio ambiente; el 8,7% consideran que si se ha trabajado, pero se encuentran muy insatisfechas con la gestión que se ha realizado en esta área; el 17,4% se encuentran algo insatisfechas; el 52,2% no se encuentran ni satisfechas ni insatisfechas, el 13% se encuentran algo satisfechas y el 8,7% se encuentran muy satisfechas.
- ✚ El 30% de las personas que no participan, consideran que la actual administración no ha trabajado en el ámbito de la cultura; el 4,8% consideran que si se ha trabajado por la cultura, pero están muy insatisfechas con la gestión que se ha realizado; el 16,7% están algo insatisfechas; el 35,7%, ni satisfechas ni insatisfechas; el 28,6%, algo satisfechas y el 14,3% muy satisfechas. El 40% de las personas que participan, consideran que la actual administración no ha trabajado en el ámbito de la cultura; el 2,8% consideran que si se ha trabajado, pero se encuentran muy insatisfechas con la gestión que se ha realizado; el 22,2%, algo insatisfechas; el 33,3%, ni satisfechas ni insatisfechas; otro 33,3%, algo satisfechas; y el 8,3%, muy satisfechas.
- ✚ El 38,3% de las personas que no participan, consideran que la actual administración no ha desarrollado programas y políticas que benefician a la niñez; el 8,1% consideran que si ha trabajado para el beneficio de esta población, pero se encuentran muy insatisfechas con la gestión realizada; el 21,6%, algo insatisfechas; el 35,1%, ni

satisfechas ni insatisfechas; el 24,3%, algo satisfechas; y el 10,8%, muy satisfechas.

El 40% de las personas que participan, consideran que la actual administración no ha desarrollado programas y políticas que beneficien a la niñez; el 5,6% considera que si se ha trabajado con esta población, pero están muy insatisfechas con la gestión que se ha realizado; el 8,3% de las personas se encuentran algo insatisfechas; el 50% de las personas no se encuentran ni satisfechas ni insatisfechas; el 33,3% se encuentran algo satisfechas y el 2,8% se encuentran muy satisfechas.

✚ El 45% de las personas que no participan, consideran que la actual administración no ha desarrollado programas y políticas que beneficien a la juventud; el 12,1% consideran que si se ha trabajado, pero se encuentran muy insatisfechas con esta gestión; el 18,2%, algo insatisfechas; el 36,4%, ni satisfechas ni insatisfechas, el 27,3%, algo satisfechas; y el 6,1%, muy satisfechas. El 48,3% de las personas que participan, consideran que la actual administración no ha desarrollado programas y políticas que beneficien a la juventud; el 3,2% consideran que si han se realizado acciones en este ámbito, pero están muy insatisfechas con ellas; el 16,1% de las personas se encuentran algo insatisfechas; el 45,2% no se encuentran ni satisfechas ni insatisfechas; el 32,3% se encuentran algo satisfechas y el 3,2% se encuentran muy satisfechas.

✚ El 43,3% de las personas que no participan, consideran que la actual administración no ha desarrollado programas y políticas que beneficien a la mujer; el 2,9% se encuentran muy insatisfechas con la gestión que se ha hecho en pro al bienestar de esta población; el 20,6%, algo insatisfechas; el 38,2%, ni satisfechas ni insatisfechas; el 32,4%, algo satisfechas; y el 5,9%, muy satisfechas. El 46,6% de las personas que participan, consideran que la actual administración no ha desarrollado programas y

políticas que beneficien a la mujer; el 12,5% considera que si se han desarrollado programas y políticas, pero están muy insatisfechas con ellas; el 12,5% están algo insatisfechas; el 46,9% no están ni satisfechas ni insatisfechas y el 28,1% están algo satisfechas.


✚ El 73,3% de las personas que no participan, consideran que la actual administración no ha trabajado por la reducción de la pobreza; el 31,3% considera que si han trabajado, pero están muy insatisfechas con esta gestión; el 43,8%, algo insatisfechas; el 18,8%, ni satisfechas ni insatisfechas; y el 6,3%, algo satisfechas. El 70% de las personas que participan, consideran que la actual administración no ha trabajado por la reducción de la pobreza; el 11,1% se encuentran muy insatisfechas con la gestión que se ha hecho en éste ámbito; el 22,2% se encuentran algo insatisfechas; el 55,6% no se encuentran ni satisfechas ni insatisfechas y el 11,1% se encuentran algo satisfechas.

✚ El 61,6% de las personas que no participan, consideran que la actual administración no ha trabajado en aras de incentivar y fortalecer la participación ciudadana; el 4,3% se encuentran muy insatisfechas con la gestión que se ha hecho en este campo; el 26,1%, algo insatisfechas; el 52,2%, ni satisfechas ni insatisfechas; el 13%, algo satisfechas; y el 4,3%, muy satisfechas. El 58,3% de las personas que participan, consideran que la actual administración no ha trabajado por la participación ciudadana; el 8% de las personas consideran que si se ha trabajado en esta área, pero se encuentran muy insatisfechas con la gestión realizada; el 24% se encuentran algo insatisfechas; el 36% no se encuentran ni satisfechas ni insatisfechas; el 20% se encuentran algo satisfechas y el 12% se encuentran muy satisfechas.

Tabla 20. Satisfacción de los encuestados con la gestión que ha realizado la actual administración para promover la participación ciudadana.

Tabla cruzada P107_18*participación EN ORGANISMOS Y ESPACIOS					
			PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS		Total
			No participa	Participa	
P107_18	1	Recuento	1	2	3
		% dentro de P107_18	33,3%	66,7%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	4,3%	8,0%	6,3%
		% del total	2,1%	4,2%	6,3%
	2	Recuento	6	6	12
		% dentro de P107_18	50,0%	50,0%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	26,1%	24,0%	25,0%
		% del total	12,5%	12,5%	25,0%
	3	Recuento	12	9	21
		% dentro de P107_18	57,1%	42,9%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	52,2%	36,0%	43,8%
		% del total	25,0%	18,8%	43,8%
	4	Recuento	3	5	8
		% dentro de P107_18	37,5%	62,5%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	13,0%	20,0%	16,7%
		% del total	6,3%	10,4%	16,7%
	5	Recuento	1	3	4
		% dentro de P107_18	25,0%	75,0%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	4,3%	12,0%	8,3%
		% del total	2,1%	6,3%	8,3%
		Recuento	2,1%	6,3%	8,3%

	% dentro de P107_18	23	25	48
	% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	47,9%	52,1%	100,0%
	% del total	100,0%	100,0%	100,0%
Total		47,9%	52,1%	100,0%

 El 55% de las personas que no participan, consideran que la actual administración no trabaja por hacer más eficiente y transparente su gestión; el 14,8% considera que si se ha trabajado en ello, pero se encuentran muy insatisfechas con lo que ha hecho; el 18,5%, algo insatisfechas; el 48,1%, ni satisfechas ni insatisfechas; el 14,8%, algo satisfechas; y el 3,7%, muy satisfechas. El 58,3% de las personas que participan, consideran que la actual administración no trabaja por hacer más eficiente y transparente su gestión; el 4% se encuentran muy insatisfechas con lo que se hace en este aspecto; el 32% se encuentran algo insatisfechas; el 32% no se encuentran ni satisfechas ni insatisfechas; el 20% se encuentran algo satisfechas y el 12% se encuentran muy satisfechas.

Atendiendo a estos resultados, no existe una relación positiva entre el ejercicio de la participación ciudadana y la percepción de eficacia frente a la gestión pública.

Atendiendo a los resultados obtenidos frente a la eficacia de la gestión del alcalde y de los concejales, donde la mayoría de los encuestados omiten valoraciones negativas, es necesario precisar que acorde con la Carta Iberoamericana de la Función Pública (2003), la profesionalización de la función pública es un requisito fundamental para la construcción de un mejor Estado, la buena gestión pública y la gobernabilidad democrática de las sociedades actuales; y, “se entiende por tal la garantía de posesión por los servidores públicos de una

serie de atributos como el mérito, la capacidad, la vocación de servicio, la eficacia en el desempeño de su función, la responsabilidad, la honestidad y la adhesión a los principios y valores de la democracia” (CLAD/UNDESA, 2003, p.3).

El texto resalta que varios estudios llevados a cabo por organismos internacionales demuestran que hay una relación directamente proporcional entre “la existencia de sistemas de función pública o servicio civil investidos de tales atributos y los niveles de confianza de los ciudadanos en la administración pública, la eficacia gubernamental y la lucha contra la corrupción” (p. 3).

Los miembros del concejo, frente a los cuales se hicieron valoraciones más negativas aún, son elegidos mediante elección popular, lo cual significa que los ciudadanos les delegan el poder a ellos para que tomen las decisiones en nombre de todos. Este es un voto de confianza que estos miembros deben valorar, cumpliendo a cabalidad las funciones propias de su investidura y velando por el interés no solo de aquellos que lo eligieron, sino de toda la sociedad en general. Además de velar por el bienestar colectivo, los miembros del concejo están en el deber de controlar políticamente a los gobernantes, para lo cual es necesario que los ciudadanos elijan personas correctas e idóneas, que ejerzan liderazgo en sus comunidades y que se interesen y comprometan con el bienestar de toda la población (DNP, 2011).

Aludiendo a la eficacia en el desarrollo de los ejes programáticos y estratégicos, en el Plan de Desarrollo del Municipio de Sincelejo 2016-2019, se puede observar que la actual administración pone especial atención y enfoca sus políticas en la infancia y adolescencia, el adulto mayor, las personas con discapacidad, la mujer, las víctimas de la violencia, los grupos étnicos, el ámbito de movilidad y transporte público, el sector educación, el sector salud, el

sector deportivo y cultural, la seguridad ciudadana y la prestación con calidad de los servicios públicos. Los participantes de esta investigación consideran que en las áreas que más se ha trabajado ha sido en la seguridad ciudadana, la educación, la movilidad vial y el transporte, la recreación y el deporte, la cultura y la niñez. Sin embargo, son muy pocos los que manifiestan sentirse satisfechos con la gestión realizada en cada una de esas áreas.

8.6 Resultados entre participación ciudadana y transparencia de la gestión pública

Con respecto a las personas que no ejercen la participación ciudadana:

En una escala de 1 a cinco, donde 1 es nada y 5 es mucho, las personas que no participan consideran que la actual administración ha sido transparente en la siguiente medida: el 15% consideran que la actual administración ha sido transparente en sus actividades en un 1; el 26,7%, en un 2; el 43,3%, en un 3; el 11,7%, en un 4 y el 3,3%, en un 5.

Tabla 21. Satisfacción de los encuestados con la transparencia de la actual administración.

Tabla cruzada GPT1*PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS					
			PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS		Total
			No participa	Participa	
GP T1	1	Recuento	9	5	14
		% dentro de GPT1	64,3%	35,7%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	15,0%	8,3%	11,7%
		% del total	7,5%	4,2%	11,7%
	2	Recuento	16	21	37
		% dentro de GPT1	43,2%	56,8%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	26,7%	35,0%	30,8%
		% del total	13,3%	17,5%	30,8%
	3	Recuento	26	27	53

		% dentro de GPT1	49,1%	50,9%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	43,3%	45,0%	44,2%
		% del total	21,7%	22,5%	44,2%
	4	Recuento	7	6	13
		% dentro de GPT1	53,8%	46,2%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	11,7%	10,0%	10,8%
		% del total	5,8%	5,0%	10,8%
	5	Recuento	2	1	3
		% dentro de GPT1	66,7%	33,3%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	3,3%	1,7%	2,5%
		% del total	1,7%	0,8%	2,5%
	Total	Recuento	60	60	120
		% dentro de GPT1	50,0%	50,0%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	100,0%	100,0%	100,0%
		% del total	50,0%	50,0%	100,0%

El 16,7% se encuentran muy insatisfechas con la información que entrega la actual administración sobre los programas y proyectos que desarrolla; el 31,7% se encuentran algo insatisfechas; el 31,7% no se encuentran ni satisfechas ni insatisfechas y el 20% se encuentran algo satisfechas.

El 16,7% se encuentran muy insatisfechas con la información que entrega la actual administración sobre los resultados obtenidos y las metas alcanzadas; el 38,3% se encuentran algo insatisfechas; el 31,7% no se encuentran ni satisfechas ni insatisfechas; el 11,7% se encuentran algo satisfechas y el 1,7% se encuentran muy satisfechas.

El 1,7% considera que el nivel de corrupción ha disminuido mucho respecto del último año; el 25% considera que ha disminuido algo; el 53,3% considera que sigue

igual; el 6,7% considera que ha aumentado algo y el 13,3% considera que ha aumentado mucho.

▪ **Con respecto a las personas que ejercen la participación ciudadana:**

🚦 En una escala de 1 a cinco, donde 1 es nada y 5 es mucho, las personas que participan consideran que la actual administración ha sido transparente en la siguiente medida: el 8,3% consideran que la actual administración ha sido transparente en sus actividades en un 1; el 35%, en un 2; el 45%, en un 3; el 10%, en un 4 y el 1,7%, en un 5.

🚦 El 20,3% se encuentran muy insatisfechas con la información que entrega la actual administración sobre los programas y proyectos que desarrolla; el 32,2% se encuentran algo insatisfechas; el 33,9% no se encuentran ni satisfechas ni insatisfechas y el 13,6% se encuentran algo satisfechas.

Tabla 22. Satisfacción de los encuestados con la información que entrega la actual administración sobre los proyectos que desarrolla.

Tabla cruzada GPT2*PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS					
			PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS		Total
			No participa	Participa	
GP T2	1	Recuento	10	12	22
		% dentro de GPT2	45,5%	54,5%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	16,7%	20,3%	18,5%
		% del total	8,4%	10,1%	18,5%
	2	Recuento	19	19	38
		% dentro de GPT2	50,0%	50,0%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	31,7%	32,2%	31,9%
		% del total	16,0%	16,0%	31,9%
	3	Recuento	19	20	39

	4	% dentro de GPT2	48,7%	51,3%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	31,7%	33,9%	32,8%
		% del total	16,0%	16,8%	32,8%
		Recuento	12	8	20
		% dentro de GPT2	60,0%	40,0%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	20,0%	13,6%	16,8%
		% del total	10,1%	6,7%	16,8%
Total		Recuento	60	59	119
		% dentro de GPT2	50,4%	49,6%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	100,0%	100,0%	100,0%
		% del total	50,4%	49,6%	100,0%

El 23,3% se encuentran muy insatisfechas con la información que entrega la actual administración sobre los resultados obtenidos y las metas alcanzadas; el 33,3% se encuentran algo insatisfechas; el 30% no se encuentran ni satisfechas ni insatisfechas y el 13,3% se encuentran algo satisfechas.

El 8,3% considera que el nivel de corrupción ha disminuido mucho respecto del último año; el 20% considera que ha disminuido algo; el 53,3% considera que sigue igual; el 13,3% considera que ha aumentado algo y el 5% considera que ha aumentado mucho.

Tabla 23. Percepción en torno a la corrupción.

Tabla cruzada GPT4*PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS					
			PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS		Total
			No participa	Participa	
GP T4	1	Recuento	1	5	6
		% dentro de GPT4	16,7%	83,3%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	1,7%	8,3%	5,0%
		% del total	0,8%	4,2%	5,0%

	2	Recuento	15	12	27
		% dentro de GPT4	55,6%	44,4%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	25,0%	20,0%	22,5%
		% del total	12,5%	10,0%	22,5%
	3	Recuento	32	32	64
		% dentro de GPT4	50,0%	50,0%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	53,3%	53,3%	53,3%
		% del total	26,7%	26,7%	53,3%
	4	Recuento	4	8	12
		% dentro de GPT4	33,3%	66,7%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	6,7%	13,3%	10,0%
		% del total	3,3%	6,7%	10,0%
	5	Recuento	8	3	11
		% dentro de GPT4	72,7%	27,3%	100,0%
		% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS	13,3%	5,0%	9,2%
		% del total	6,7%	2,5%	9,2%
Total	Recuento		60	60	120
	% dentro de GPT4		50,0%	50,0%	100,0%
	% dentro de PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ESPACIOS		100,0%	100,0%	100,0%
	% del total		50,0%	50,0%	100,0%

Con respecto a lo anterior, no existe una relación positiva entre el ejercicio de la participación ciudadana y la percepción de transparencia frente a la gestión pública.

La mayoría de los encuestados no se encuentran satisfechos con la información que entrega la actual administración sobre los proyectos que desarrolla ni las metas alcanzadas. Además, la mayoría considera que el nivel de corrupción sigue igual y otro porcentaje considerable considera que ha aumentado.

El DNP (2007) afirma “En el marco de la democracia participativa, la rendición de cuentas es una práctica social y política de interlocución entre los gobiernos y la ciudadanía,

con el fin de generar transparencia, condiciones de confianza entre ciudadanos y gobernantes, y fortalecer el ejercicio del control social a la administración pública” (p.65). El control social que ejercen los ciudadanos en la Gestión Pública es un deber y un derecho que les permite actuar como veedores de la prestación de los servicios públicos a cargo del Estado y/o de aquellos particulares que ejercen funciones públicas, del efectivo cumplimiento de los fines del Estado y los procedimientos legales y, de la correcta destinación de los recursos públicos. Finalmente, la transparencia en el ejercicio del control social se constituye en una garantía de la democracia, que conlleva a la obtención de una mayor eficiencia en la gestión pública.

Los gobernantes deben emitir regularmente información que les permita a los ciudadanos conocer el estado de avance de las metas, los proyectos, programas y subprogramas planteados en el Plan de Desarrollo. Esta información debe ser actualizada, con una clara relación entre las metas y los recursos empleados para el cumplimiento de las mismas, veraz y específica con respecto a los logros que no se han alcanzado y los motivos y obstáculos que impidieron la obtención de los productos deseados y debe estar estructurada con un lenguaje asequible para su comprensión, de tal forma que al analizarla permita identificar las fortalezas y debilidades en el proceso de ejecución del Plan y se puedan plantear estrategias para mejorar la gestión y los resultados.

La labor del alcalde y su equipo de gobierno no es discrecional, por lo tanto las actuaciones administrativas deben ser expuestas abiertamente a la ciudadanía para que esta ejerza control y seguimiento. El DNP (2011) afirma “el flujo adecuado de información sobre la gestión pública en el territorio es una clave de transparencia, eficiencia y legitimidad en el marco del Buen Gobierno” (p.46). El discurso de la rendición de cuentas es una reacción a la

continuidad de las prácticas generalizadas de corrupción que caracterizan a la mayor parte de los gobiernos y a la preservación del secretismo burocrático en que se funda el poder discrecional de los políticos y de los burócratas (Olvera e Izunsa, 2004, p.340).

De acuerdo a lo establecido por el DNP (2011), es necesario que en el proceso de Gestión Pública la Administración goce del apoyo ciudadano, para lo cual se debe estipular una política de comunicación que facilite y garantice la interacción entre los gobernantes y los ciudadanos. La estrategia que se establezca debe estar enfocada a “demostrar transparencia y eficiencia en las acciones gubernamentales, generar confianza y formular reglas básicas que orienten la gestión de la información y la transferencia del conocimiento” (p. 39).

9. CONCLUSIONES

En atención al objetivo de determinar la relación existente entre el nivel de participación de los ciudadanos y la percepción que tienen los mismos frente a las dimensiones de la gestión Pública: Imagen, eficacia, eficiencia y transparencia; los resultados de este estudio dejaron en evidencia que, en el caso del municipio de Sincelejo, no existe una relación positiva entre el ejercicio de la participación ciudadana y la percepción que tienen los ciudadanos frente a los efectos y alcances de la misma; el ejercicio de la participación ciudadana y la imagen de los ciudadanos frente a la gestión pública; el ejercicio de la participación ciudadana y la percepción de eficiencia frente a la gestión pública; el ejercicio de la participación ciudadana y la percepción de eficacia frente a la gestión pública; y el ejercicio de la participación ciudadana y la percepción de transparencia frente a la gestión pública. Contrariamente, si hay una relación positiva entre la participación en espacios institucionalizados y la imagen y percepción de eficacia que poseen esos participantes frente a la gestión pública.

Respecto al objetivo de reconocer los motivos de los ciudadanos para ejercer o abstenerse de ejercer la participación ciudadana, esta investigación arrojó como resultado que la mayoría de los encuestados que participan (76,6%) lo hacen porque consideran que, en su calidad de ciudadanos, es un deber. Por otra parte, los encuestados que no participan, en su gran mayoría (66,6%), lo atribuyen a la falta de tiempo. Estos resultados confirman dos teorías: la teoría de Font (2004), quien sostiene que un factor que limita considerablemente el ejercicio de la participación del ciudadano medio es el tiempo; y la teoría de Verba, et al (1995), quienes afirman que los ciudadanos que poseen valores cívicos positivos, son propensos a participar. A esto precisamente apunta el enfoque de la gobernanza (Peters,

2001), a la adopción de mecanismos más democráticos y políticos que promuevan la participación de ciudadanos dialogantes y solidarios, motivados a actuar por el interés general más que por obtener el beneficio personal.

En relación al objetivo de identificar la percepción de los ciudadanos frente a los alcances y efectos de la participación ciudadana, el presente estudio arrojó que en el municipio de Sincelejo las personas que no participan tienen una mejor percepción frente a los efectos e incidencia de la participación en la reducción del clientelismo, la politiquería y la corrupción, que las personas que participan, aunque la diferencia no es significativa; la mayoría de los encuestados consideran que la participación ciudadana no ha sido útil en la reducción de estos fenómenos. De igual forma, aquellos que participan, en un porcentaje no muy mayor a los que si participan, consideran que la participación ciudadana ha sido útil para influir en las decisiones de las autoridades locales. Pero, es preciso señalar que la mayoría de los encuestados consideran que la participación ciudadana no es útil para influir en las decisiones de las autoridades. En cuanto al alcance de la participación ciudadana en la resolución de los problemas de las personas y el fortalecimiento de las organizaciones sociales, aquellos que participan tienen una mejor percepción que aquellas personas que no participan.

Resolver los dilemas sobre la eficacia y el funcionamiento de la participación implica persistencia, teniendo en cuenta que no existen fórmulas mágicas frente al tema y que no se puede pretender que la participación resuelva todos los problemas de la ciudad. Esto se debe a que la participación está ligada a factores de carácter estructural, como la cultura política, las condiciones sociales e institucionales y las relaciones con las lógicas de la representación política, a los cuales se supedita su alcance y eficacia (Velasquez, 2010). Sin embargo, si es

necesario tener presente que el desencanto de los ciudadanos frente a la política y los políticos crea una desafección política que inhibe a los ciudadanos de participar (Ramírez, 2015). Por lo tanto, la confianza es decisiva para que los ciudadanos se asocien y participen, y es el principal indicador del capital social.

La mayoría de los encuestados, ejerzan o no la participación ciudadana en el municipio, consideran que esta no le ha permitido a la gente influir en las decisiones de las autoridades locales. Es a este fenómeno al que Luna (2010) llama “la frustración de participar”, es decir, el sentimiento de desilusión de los ciudadanos y las organizaciones sociales frente a la incapacidad de intervenir y cumplir un rol determinante en la adopción de las decisiones políticas que le atañen.

Cabrero y Peña (2009) aseguran que el desarrollo de la nueva gobernanza democrática requiere, entre otros aspectos, “la inclusión de la ciudadanía con mecanismos consultivos, cooperativos, de decisión o de evaluación” (p. 326). Sin embargo, es indispensable que en los espacios donde participan los ciudadanos para intervenir en las decisiones del aparato público, se tomen en cuenta sus aportes (Cunill, 1991); de no ser así, sería irrelevante el ejercicio de la participación. La participación ciudadana no puede ser una simulación de apertura estatal que busca legitimar decisiones previamente adoptadas por la burocracia estatal. Joan Font (2004) sostiene que un factor que limita considerablemente el ejercicio de la participación ciudadana es el tiempo, por ser un recurso finito y escaso. Por lo tanto, se debe valorar la disposición de aquellas personas que disponen parte de su tiempo a la participación, y la mejor forma de hacerlo por parte de las autoridades locales, es teniendo en cuenta sus aportes, de tal forma que el ciudadano no sienta que ha actuado vanamente y ha desperdiciado su tiempo.

Aludiendo al objetivo de identificar la percepción de los ciudadanos frente a la Gestión Pública del Municipio de Sincelejo, es preciso resaltar que el estudio arrojó que las personas que no ejercen la participación ciudadana tienen una imagen menos desfavorable de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, del instituto Municipal de Deporte y Recreación IMDER, de la Unidad de Salud Ese San Francisco de Asís, del Sistema Estratégico de Transporte Publico en Sincelejo, del Actual Alcalde y del Concejo de la Ciudad, que aquellas personas que ejercen la participación ciudadana. De igual forma, las personas que participan en espacios institucionalizados tienen una imagen más favorable de la Unidad de Salud Ese San Francisco de Asís, del Sistema Estratégico de Transporte Publico en Sincelejo, del actual Concejo y alcalde de la ciudad, y del equipo de gobierno del alcalde, que las personas que participan en organismos autónomos. En cambio, las personas que participan en espacios autónomos, tienen una imagen más favorable del Instituto Municipal de Deporte y Recreación IMDER y del Fondo de Vivienda y Valorización FOVIS, que aquellas personas que participan en espacios institucionalizados.

Ziccardi (2004) afirma que el discurso político no es lo que genera credibilidad en la ciudadanía y confianza en que el gobierno es honesto, democrático y eficiente; son las acciones mismas y las buenas prácticas gubernamentales las que generan esa confianza. La mayoría de los encuestados considera que el nivel de corrupción en el municipio sigue igual, y algunos consideran que ha aumentado; por lo cual es importante que los dirigentes políticos tengan presente lo que establece la Carta Iberoamericana de la Función Pública (2003) sobre la responsabilidad, la vocación del servicio, la honestidad la idoneidad, la integralidad y la adhesión a los principios y valores de la democracia que deben tener al momento de aspirar

y desempeñar sus cargos, para así, mejorar su gestión y aumentar el nivel de confianza de los ciudadanos en la administración pública.

Ateniendo a lo anterior, si la mayoría de los encuestados en este estudio tienen poca confianza en los actores encargados de la administración del municipio de Sincelejo, y consideran poco transparente sus acciones, significa que estos han carecido de estos atributos o deben fortalecerlos aún más, porque no es lo que están percibiendo los ciudadanos.

La imagen y confianza frente a los actores políticos también va ligada con la capacidad de gerencia de los mismos, porque los ciudadanos, además de esperar un líder eficiente y honesto, esperan un líder que con su gestión, promueva el desarrollo del territorio y el mejoramiento en la condiciones de vida de sus habitantes. En el presente estudio se identifica que la mayoría de los encuestados, ejerzan o no la participación ciudadana, consideran que no se está trabajando, o no se encuentran satisfechos, con la gestión que se ha realizado en los distintos ejes programáticos y sectores focalizados en el Plan de Desarrollo Municipal de la actual administración. Además, un número considerable de encuestados, tanto de los que ejercen la participación ciudadana, como de aquellos que no la ejercen, emiten juicios y valoraciones negativas frente a la gestión del actual alcalde, y un porcentaje mucho mayor, emite juicios negativos frente a la gestión de los actuales concejales. Lo anterior es preocupante en la medida que, tanto el alcalde como los concejales, son actores elegidos por votación popular, lo cual significa que los ciudadanos les han delegado el poder a ellos para que tomen las decisiones en nombre de todos, y en el caso particular de los concejales, para que velen por los intereses de estos ciudadanos y el bienestar colectivo. El llamado es entonces a los ciudadanos, quienes deben elegir personas correctas

e idóneas, que ejerzan liderazgo en sus comunidades y que se interesen y comprometan con el bienestar de toda la población (DNP, 2011).

Las personas que no participan le otorgan una mejor calificación a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, a la Unidad de Salud ESE San Francisco de Asís, al Instituto Municipal de Deporte y Recreación IMDER, al Sistema Estratégico de Transporte Público en Sincelejo- Metro Sabanas y al actual concejo y alcalde la ciudad, que aquellas personas que ejercen la participación ciudadana. Además, las personas que no participan se encuentran más satisfechas con la forma en que la actual administración ha invertido los recursos del municipio, que aquellas personas que participan. En relación al Fondo de Vivienda y valorización Fovis, tanto las personas que ejercen la participación ciudadana como aquellas que no la ejercen, le otorgan más o menos la misma calificación; y, en relación al equipo de gobierno del alcalde, las personas que participan le otorgan una mejor calificación que aquellas personas que no participan.

Analizando por separado al grupo de personas que participan en organismos autónomos y al grupo personas que participan en espacios institucionalizados, las que pertenecen a este último grupo le otorgan una mejor calificación a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, a la Unidad de Salud ESE San Francisco de Asís, al Sistema Estratégico de Transporte Público en Sincelejo- Metro Sabanas, al actual concejo de la ciudad y al equipo de gobierno del alcalde, que aquellas personas que pertenecen al primer grupo.

Las personas que no participan emiten un mejor concepto frente a la gestión del alcalde que las personas que participan, pero estas últimas tienen una mejor percepción y emiten un mejor juicio frente a la gestión de los actuales concejales, que las personas que no

participan. Por otra parte, las personas que no ejercen la participación ciudadana consideran que la actual administración ha trabajado más en el ámbito de la seguridad y convivencia, la movilidad vial y el transporte, el medio ambiente, la cultura, y en políticas y programas en beneficio de la mujer, que aquellas personas que ejercen la participación ciudadana. Pero en cambio, las personas que participan se encuentran más satisfechas con la gestión que se ha realizado en el ámbito de la recreación y el deporte, la niñez, la juventud, la participación ciudadana, la reducción de la pobreza, la ampliación de la cobertura y eficiencia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, y la transparencia y eficiencia de la actual administración, que aquellas personas que no participan.

La mayoría de los encuestados consideran que la actual administración no ha sido eficiente y eficaz en la gestión pública que viene realizando, por lo tanto, son poco los estímulos que tienen los ciudadanos para confiar (Guemes, 2014). Sin embargo, las personas que participan en espacios institucionalizados si tienen una mejor percepción frente a la eficiencia y transparencia de la gestión pública, lo cual indica que la vinculación de la ciudadanía en la esfera pública y en la construcción de las políticas públicas, si es una vía que permite ir modificando ese persistente imaginario social de desconfianza y enviar señales que moldeen creencias y construyan las bases de una confianza generalizada.

Las personas que no participan se encuentran más satisfechas con la información que entrega la actual administración sobre los programas y proyectos que desarrolla, que las personas que si participan. Con respecto al nivel de transparencia y al nivel de corrupción de la actual administración, además del grado de satisfacción con la información que brinda la administración sobre los resultados obtenidos y las metas alcanzadas a partir de los programas que desarrolla, los dos grupos, tanto los que ejercen la participación ciudadana

como los que no, prácticamente coinciden en sus percepciones y el nivel de satisfacción bajo frente a esos ámbitos.

Las personas poseen unos imaginarios políticos de corrupción independientemente de que tengan información directa o no de estos actos, lo cual ha conllevado a la pérdida de credibilidad en las autoridades e instituciones públicas (LAPOP, 2011). De acuerdo a los resultados, en el municipio de Sincelejo es importante que la actual administración otorgue más atención a la rendición de cuentas, atendiendo a que solo así se podrá ejercer control social y transmitir transparencia y confianza a los ciudadanos. Además, las instituciones públicas responden ahora a un público más exigente y a un control más fuerte por parte de los ciudadanos y los medios de comunicación, lo cual le exige al gobierno y sus instituciones proporcionar constantemente información relacionada con los proyectos y las acciones que emprenden.

10. BIBLIOGRAFÍA

- Ackerman, John. (2005). *Social Accountability in the public sector. Social Development Papers*, Documento de trabajo del World Bank, 82, Washington. D.C.
- Aguilar Villanueva, Luis F. (2006). *Gobernanza y gestión pública*, México, FCE.
- Almonacid Rojas, Ana Margarita (2015). Incidencia de la sociedad civil en espacios institucionalizados de participación en Bogotá: estudios de casos. Bogotá, Ediciones Uniandes.
- Banco Mundial (1997). El Estado en un mundo en transformación. Informe sobre el desarrollo mundial, Washington, World Bank.
- Blanco, Ismael y Ricard Gomà (2003). La crisis del modelo de gobierno tradicional: reflexiones en torno a la governance participativa y de proximidad, *Revista gestión y política pública*, XII (1), CIDE, México, 5-42.
- Borja, J. (1987). “Descentralización. Una cuestión de método”. En: Acuña, C. H. (comp.) (2007). *Lecturas sobre el Estado y las políticas públicas. Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual*. Buenos Aires: Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Proyecto de Modernización del Estado.
- Burki, S. B., y G. Perry (1998). Más allá del Consenso de Washington: la hora de la reforma institucional, Washington, Banco Mundial.
- Cabrero Mendoza, E. y J. A. Pena Ahumada (2009). “Instrumentos de New Public Management para construir una New Public Governance. El caso de los gobiernos locales en México”. En: Pardo, M. C. y E. Velasco Sánchez (coords.). *La gerencia*

pública en América del Norte. Tendencias actuales de la reforma administrativa en Canadá, Estados Unidos y México. México: El Colegio de México y el Instituto de Administración Pública de Nuevo León.

CEPAL (2007). *Cohesión social: inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe*, Santiago de Chile, LC/G.2335.

CLAD (1998). Una nueva gestión pública para América Latina, Declaración de Madrid, octubre de 1998.

CLAD/ UNDESA (2003). Carta Iberoamericana de la Función Pública. Declaración de la V Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, Santa Cruz, Bolivia.

Camou, Antonio. (2000). Gobernabilidad. En: Isidro Cisneros et al. (Eds.). *Léxico de la política* (pp. 283-287). Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

Canto, M. (2010). *Participación ciudadana en las políticas públicas*. México: Escuela de Administración Pública del DF; Siglo xxi Editores.

Cano Blandón, L. F. (2008). La participación ciudadana en las políticas públicas de lucha contra la corrupción: respondiendo a la lógica de gobernanza. *Estudios políticos*, (33), 147-177.

Crozier, M., S. Huntington y J. Watanuki (1975). The crisis of Democracy. Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission, Nueva York, New York University Press.

Cunill Grau, N. (1991). *Participación ciudadana: dilemas y perspectivas para la democratización de los Estados latinoamericanos*. Venezuela: CLAD.

Cunill Grau, N. (1997). *Repensando lo público a través de la sociedad. Nuevas formas de gestión pública y representación social*. Venezuela: CLAD y Nueva Sociedad.

Cunill Grau, N. (2008). “La construcción de ciudadanía desde una institucionalidad pública ampliada”. En: Mariani, R. (coord.). *Contribuciones al debate: Democracia/Estado/Ciudadanía Hacia un Estado de y para la democracia en América Latina*. Vol. II. PNUD-UE.

DANE (2017). Caracterización de aspectos asociados a la cultura política colombiana. Encuesta de Cultura Política.

DNP (2007). Cartilla Gestión Pública Local. Recuperado de <http://www.ceppia.com.co/Herramientas/Herramientas/Cartilla-gestion-publica-local.pdf>

DNP (2011). Guías para la gestión pública territorial. Recuperado de <https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/gestion-publica-territorial/Paginas/guias-metodologias-y-publicaciones.aspx>

Gore, A. (1992). *Creating a Government that Works Better and Cost Less*, Washington, Government Printing Office.

Güemes, M. C. (2014). El papel del Estado y el impacto de las políticas públicas en la creación-destrucción de la confianza social: Latinoamérica y Argentina bajo la lupa.

Habermas, Jürgen (2005). *Facticidad y validez*, Madrid, Trotta.

- Hood, Ch. (1989). “ A Public Management for All Seasons?”, en *Public Administration*, núm. 69, pp. 3 -19.
- Kettl, D. F. (2000). *The Global Public Management Revolution: A Report on the Transformation of Governance*, Washington, Brookings Institute Press.
- Kooiman, J. (1993). *Modern Governance: New Government- Society Interactions*, Londres, Sage.
- Kooiman, J. (2000). *Working with Governance*, *Public Management Review*, n.º 2,3.
- Kooiman, J. (2003). *Governing as Governance*, Londres, Sage.
- LAPOP – Barómetro de las Américas (2011). *Cultura política de la democracia en Colombia*, 2011. Recuperado de <https://www.vanderbilt.edu/lapop/colombia/2011-Colombia-Cultura-politica-de-la-democracia.pdf>
- Luna Algarra, P. A. (2010). *Participación ciudadana... de lo consultivo a lo resolutivo*.
- Marshall, T. H. y Tom Bottomore (1998). *Ciudadanía y clase social*. Madrid, Alianza Editorial.
- Mariñez Navarro, Freddy (2007). “A manera de introducción. Democracia y administración pública”, en *Ciudadanos, decisiones públicas y calidad de la democracia*, Freddy Mariñez Navarro (coord.) México, Limusa, pp. 11-29.
- Mariñez Navarro, Freddy (2009). “Introducción: ¿Para qué sirve la participación ciudadana?”, en *Compromiso ciudadano. Participación y gestión pública en Nuevo*

- León, Freddy Mariñez Navarro (coord.), Monterrey, EGAP, CORPES, Festival Internacional Santa Lucía, Fondo Editorial Nuevo León, pp. 17-31.
- Merino, Mauricio (1997). La participación ciudadana en la democracia. Cuadernos de divulgación de la cultura democrática, México, Instituto Federal Electoral.
- Milbrath, L.W & Goel, M.L. (1977). *Political Participation: How and Why Do People Get Involved in Politics?* Chicago: Rand McNally College Pub. Co.
- Natera, A. (2004). *La noción de gobernanza como gestión pública participativa y reticular*. Madrid: Working paper del Instituto de Política y Gobernanzas, Universidad Carlos III de Madrid.
- Observatorio Internacional de Democracia Participativa (OIDP), (2007). *Observando las Democracias Participativas Locales 2004-200*. Recuperado de http://www.oidp.net/es/v_publicaciones_1.php [fecha de acceso 26 de mayo de 2009]
- Montero, J.R., Font, J., y Torcal, M., (Ed). (2006). *Ciudadanos, asociaciones y participación en España*. España: CIS.
- OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) (1995), *Governance in transition: Public Management Reforms in OECD Countries*, Paris, OECD. (Hay traducción al español: *La transformación de la gestión pública. Las reformas en los países de la OCDE*, Madrid, Ministerio de las Administraciones Publicas, 1997).
- OCDE (2000), *The Reform of Metropolitan Governance*, Washington, OECD (Policy Brief).

Olias de Lima, B. (2001). *La nueva gestión pública*, Prentice Hall, Madrid.

Percepción Ciudadana Red de ciudades Cómo Vamos. (2015). Recuperado de http://redcomovamos.org/wp-content/uploads/2015/12/Presentaci%C3%B3n-EPC-Comparada-2015_RedC%C3%B3moVamos_02122015_.pdf

Peters, Guy. (2001). *The future of governing*. Kansas: University of Kansas Press.

Peters, Guy y Jon Pierre. (2005). *Governing Complex Societies. Trajectories and scenarios*. Londres: Palgrave, Macmillan.

Pierre, J., et al. (2000). *Debating Governance*, Oxford, Oxford University Press.

PNUD (1997). *Reconceptualising Governance*, Nueva York, United Nations Development Programme.

Pollitt, Ch., y G. Bouckaert (2000). *Public Management Reform*, Oxford, Oxford University Press.

Prats, Joan (2004). “De la burocracia al management y del management a la gobernanza”, en *Instituciones y Desarrollo*, núm. 3.

Prettel, G., Miguel, E., Palacio Sañudo, J., & Aguilar Rodríguez, D. E. (2010). Análisis de la cultura política de Montería en el período 2006-2008, desde las categorías de participación y comunicación política. *Investigación y Desarrollo*, 18(1), 44-67.

Ramírez, J. (2015). *Modelos de participación ciudadana. Una propuesta integradora*. Universidad Carlos III de Madrid.

- Ramírez, R. G., Gascó, J. L. G., & Taverner, J. L. (2012). Participación y satisfacción del ciudadano en la Gestión Pública: un estudio en el ámbito de la administración local. *Auditoría pública: revista de los Organos Autónomos de Control Externo*, (58), 31-42.
- Red de Ciudades Cómo Vamos (2015). Boletín N°7-Informe de Calidad de Vida Comparado en 14 Ciudades de Colombia.
- Rhodes, R. W. A. (1997). *Understanding Governance: Policy Networks, Reflexibility and Accountability*, Londres, Open University Press.
- Salamon, L. M. (2002). *The Tools of Government: A Guide to the New Governance*, Oxford, Oxford University Press.
- Sánchez Ramos, M. Á. (2009). La participación ciudadana en la esfera de lo público. *Espacios públicos*, 12(25).
- Sarmiento, J., Tello, C., & Segura, R. (2007). Ciudadanía, sociedad civil y participación en políticas públicas. La experiencia de los foros vecinales de seguridad en el municipio de La Plata. *Revista Katálisis*, 10(2), 187-196.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN/DESA) (2001). *World Public Sector Report: Globalization and the State – An Executive Summary(Part II)*, Nueva York, United Nations Department of Economic and Social Affairs
- Uribe, M. T. (2002). Las promesas incumplidas de la democracia participativa. *El debate a la Constitución*, 191-208.

Velásquez, F., & González, E. (2003). *¿Qué ha pasado con la Participación Ciudadana en Colombia?* Fundación Corona.

Velásquez, F., González, E., & Rodríguez, C. R. (2008). Participación ciudadana y representación política en contextos de conflicto armado. *Revista Controversia*, (191).

Velásquez F. (2010). Participar en Bogotá: lo que piensa la gente. *razónpública.com*. Recuperado de <http://razonpublica.com/index.php/regiones-temas-31/838-participar-en-bogotlo-que-piensa-la-gente.html>

Velásquez F. (2011). La institucionalización de la participación en Colombia: notas para su interpretación. *Política & Sociedade*. Recuperado de <https://periodicos.ufsc.br/index.php/politica/article/view/2175-7984.2011v10n18p155/17539>

Verba S, Schlozman K S y Brady, H. (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Harvard, Harvard University Press.

Villarreal Martínez, María Teresa (2009a). Los consejos ciudadanos y la gestión pública en Nuevo León. Mención honorífica del XXII Concurso del CLAD sobre Reforma del Estado y Modernización de la Administración Pública 2009.

Villarreal Martínez, María Teresa (2009b). Participación ciudadana y políticas públicas. *Décimo Certamen de Ensayo Político*, 31-48.

Villarreal Martínez, María Teresa (2010). “La participación institucionalizada de organizaciones civiles en la construcción de gobernanza”. *Revista Legislativa de Estudios Sociales y de Opinión Pública*, Vol. 3, Núm. 5, pp. 121-154.

Villarreal Martínez, María Teresa (2012). La relación entre gobierno y organizaciones civiles: un examen crítico en tres estados mexicanos.

Ziccardi, Alicia (1998). *Gobernabilidad y participación ciudadana en la ciudad capital*, México, UNAM y Miguel Ángel Porrúa.

Ziccardi, Alicia (2004). “Espacios e instrumentos de participación ciudadana para las políticas sociales del ámbito local”. En: Ziccardi, A. (coord.). *Participación ciudadana y políticas sociales en el ámbito local*. México: UAM-Instituto de Investigaciones Sociales, Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, Instituto Nacional de Desarrollo Social.

11. ANEXOS

Instrumento de la Investigación

Encuesta de Participación Ciudadana y Percepción frente a la Gestión Pública

Fecha de la encuesta:

DD	MM	AA
		17

DEMOGRÁFICOS

NSE	EDAD	SEXO	NIVEL EDUCATIVO:
Estrato 1	1	De 18 a 25 años	1
Estrato 2	2	De 26 a 35 años	2
Estrato 3	3	De 36 a 45 años	3
Estrato 4	4	De 46 a 55 años	4
Estrato 5	5	Más de 55 años	5
Estrato 6	6		6

Objetivos de la encuesta:

- Identificar el nivel de participación de las personas en los organismos y espacios de participación ciudadana existentes en el Municipio.
- Reconocer los factores asociados en el ejercicio de la participación ciudadana
- Identificar la percepción de los ciudadanos frente a la Gestión Pública del Municipio de Sincelejo.

F1. ¿Usted vive de forma permanente en Sincelejo, o se encuentra en la ciudad por turismo o negocios? RU

1 Vive en Sincelejo → F1A ¿Hace cuánto tiempo vive en Sincelejo? → (ENC: SI ENTREVISTADO VIVE EN LA CIUDAD HACE MENOS DE DOCE MESES, TERMINE Y MARQUE EN CUADRO DE RECHAZOS COMO NO ES RESIDENTE DE LA CIUDAD)

Años _____ Meses _____

2 Está en la ciudad por turismo o negocios → (ENC: TERMINE Y MARQUE EN CUADRO DE RECHAZOS COMO NO ES RESIDENTE DE LA CIUDAD)

F2. Trabaja o ha trabajado en alguna de las siguientes entidades:

ENTIDADES	Si	No
A. Empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios (Acueducto, alcantarillado, aseo, energía, Gas combustible y telefonía pública).	01	02
B. CARSUCRE - Corporación Autónoma Regional de Sucre	01	02
C. Casa de participación ciudadana	01	02
D. Unidad de Participación Ciudadana y Veedurías- Cámara de Comercio de Sincelejo	01	02
E. Comfasucre	01	02
F. Unidad de Salud ESE San Francisco de Asís	01	02
G. Instituto municipal de Deporte y Recreación- IMDER	01	02
H. Metro Sabanas- Sistema Estratégico de Transporte Público en Sincelejo	01	02
I. Inspecciones de policía, policía de tránsito o policías del cuadrante	01	02
J. Fondo de vivienda y valorización FOVIS	01	02
K. Concejo de la ciudad	01	02
L. Alcaldía de la ciudad o alguna de sus secretarías	01	02

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PC1. Voy a mencionarle el nombre de algunos organismos y espacios de participación ciudadana para que favor me diga en cuál(es) de ellos ha participado.

ORGANISMOS AUTONOMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		Si	No
()	A. Organizaciones ambientales	01	02
()	B. Asociaciones de padres de familia y/o comités en la escuela	01	02
()	C. Asociaciones de usuarios de salud	01	02
()	D. Juntas de trabajo comunitario o asociaciones de vecinos	01	02
()	E. Asociaciones cívicas o comunitarias (asociaciones de madres comunitarias, grupos juveniles, asociaciones de grupos étnicos, grupos de mujeres, entre otros)	01	02
()	F. Organizaciones profesionales o gremios	01	02
()	G. Asociaciones Culturales	01	02
()	H. Partido o movimiento político	01	02
()	I. Sindicatos	01	02
()	J. Asociaciones deportivas	01	02
()	K. Otro. ¿Cuál?	01	02

ESPACIOS INSTITUCIONALIZADOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		Si	No
()	L. Consejo de juventud	01	02
()	M. Consejos de Planeación (Consejo Territorial de Planeación o Consejos Locales de Planeación)	01	02
()	N. Mesa Municipal de Víctimas	01	02
()	O. Mesa Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar	01	02
()	P. Consejo municipal de Política Social	01	02
()	Q. Comité Municipal de Discapacidad	01	02
()	R. Juntas administradoras locales JAL	01	02
()	S. Otro. ¿Cuál?	01	02

PC2. ¿Cuáles de las razones que están en esta tarjeta son las principales para que usted **no** participe en ninguna organización o espacio diseñado para este fin? (**ENC: PROFUNDICE**) ¿Alguna otra? **RM**

- 01 Por falta de información
- 02 No sabe cómo participar
- 03 Por miedo/ Para no meterse en problemas
- 04 Por falta de tiempo
- 05 Por desconfianza en los organismos de participación
- 06 Por insuficiencia de espacios de participación
- 07 Porque no sirven o son poco efectivos
- 89 Otra. ¿Cuál?

PC3. Entre las siguientes opciones, ¿cuál considera qué es la principal razón que lo motiva a participar?

- () 1 El Estado no ha servido para solucionar problemas
- () 2 Como ciudadano es un deber participar
- () 3 Para recibir beneficios personales
- 89 Otra. ¿Cuál? _____
- 92 No sabe

PC4. De acuerdo con lo que sabe o piensa, ¿Usted diría que la participación ciudadana en **Sincelejo** _____ (**ENC: Lea cada opción y espere respuesta**)

	SI	NO
() A. Ha logrado reducir el clientelismo y la politiquería?	01	02
() B. Ha logrado reducir la corrupción?	01	02
() C. Ha ayudado a resolver los problemas de la gente?	01	02
() D. Le ha permitido a la gente influir en las decisiones de las autoridades locales?	01	02
() E. Ha fortalecido el poder de los políticos?	01	02
() F. Ha fortalecido a las organizaciones sociales (Juntas de Acción Comunal, grupos de mujeres, de jóvenes, etc.)?	01	02

GESTIÓN PÚBLICA- Imagen, confianza y eficiencia

GPI1. Ahora voy a mencionarle el nombre de algunas entidades y algunos actores encargados de la Gestión Pública en Sincelejo, para que por favor me diga si Usted tiene, de cada uno de ellos, una imagen favorable o desfavorable. Si no conoce alguna de las entidades o de los actores, por favor dígamelo y seguimos adelante. **(ENC: LEA LAS ENTIDADES, RESPETANDO ROTACIÓN).**

- 1 Favorable
2 Desfavorable
3 No la conoce

GPFI2. (ENC: ENTREGUE TARJETA GESTIÓN) Para cada una de las entidades y los actores que menciona, dígame por favor ¿cómo califica la gestión que ha realizado hasta ahora en una escala de 1 a 5, donde 1 es muy mala gestión y 5 es muy buena gestión? Puede utilizar cualquier número de la escala. **(ENC: LEA LAS INSTITUCIONES Y PREGUNTE GESTIÓN. NO PREGUNTE POR LAS QUE NO CONOCE SEGÚN GP1) RU POR ENTIDAD**

GPEFI3. Y para las mismas entidades y actores, dígame por favor ¿qué tan insatisfecho(a) o satisfecho(a) está usted con la atención al ciudadano, en una escala de 1 a 5, donde 1 es muy insatisfecho(a) y 5 es muy satisfecho(a)? Puede utilizar cualquier número de la escala. (ENC: LEA LAS INSTRUCCIONES Y PREGUNTE SATISFACCIÓN. NO PREGUNTE POR LAS QUE NO CONOCE)

	Entidades	GP1. Imagen			GP2. Gestión	GP3. Atención al ciudadano
		No con.	Fav.	Desf.		
()	1. Empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios (Acueducto, alcantarillado, aseo, energía, Gas combustible y telefonía pública).	01	02	03	01 02 03 04 05	01 02 03 04 05
()	2.CARSUCRE - Corporación Autónoma Regional de Sucre	01	02	03	01 02 03 04 05	01 02 03 04 05
()	3.Casa de participación ciudadana	01	02	03	01 02 03 04 05	01 02 03 04 05
()	4.Unidad de Participación Ciudadana y Veedurías- Cámara de Comercio de Sincelejo	01	02	03	01 02 03 04 05	01 02 03 04 05
()	5.Comfasucure	01	02	03	01 02 03 04 05	01 02 03 04 05
()	6. Unidad de Salud ESE San Francisco de Asís	01	02	03	01 02 03 04 05	01 02 03 04 05
()	7.Instituto municipal de Deporte y Recreación- IMDER	01	02	03	01 02 03 04 05	01 02 03 04 05
()	8.Metro Sabanas- Sistema Estratégico de Transporte Publico en Sincelejo	01	02	03	01 02 03 04 05	01 02 03 04 05
()	9.Inspecciones de policía, policía de tránsito y policías del cuadrante	01	02	03	01 02 03 04 05	01 02 03 04 05
()	10. Fondo de vivienda y valorización FOVIS	01	02	03	01 02 03 04 05	01 02 03 04 05
()	11. Concejo de la ciudad	01	02	03	01 02 03 04 05	01 02 03 04 05
()	12. El actual alcalde de la ciudad	01	02	03	01 02 03 04 05	01 02 03 04 05
()	13. El Equipo de gobierno del alcalde (secretarios de despacho)	01	02	03	01 02 03 04 05	01 02 03 04 05

GPEFI4. Podría decirme ¿por qué razón califica así la gestión del Alcalde? (ENC: NO LEA, ESPERE RESPUESTA Y CLASIFIQUE)
¿Alguna otra razón? **RM**

1	Muy mala gestión	2	3	4	5	Muy buena gestión
RAZONES						

GP4_123	GP4_45
1 Por falta de comunicación de la Administración Municipal 2 Por falta de concertación con la gente 3 Porque no ha cumplido con lo prometido en su programa de gobierno 4 Porque desconoce algunas problemáticas de la ciudad 5 Por deficiencias técnicas en su equipo de gobierno 6 Porque se ha concentrado en acciones no prioritarias 7 Porque le ha faltado habilidad política en la venta de sus proyectos 8 Por su falta de liderazgo 9 Por su debilidad para tomar decisiones 10 Por su falta de autoridad frente a la ciudadanía 11 Por su deficiente relación con el nivel nacional de gobierno 12 Por su deficiente relación con los empresarios 13 Por su deficiente relación con el Concejo de la ciudad 14 Por clientelista 15 Por los escándalos de corrupción 23- Por el mal manejo del tema de valorización89 Otro. ¿Cuál? _____	1 Por eficiente comunicación con la Administración Municipal 2 Por la adecuada concertación con la gente 3 Porque ha cumplido con lo prometido en su programa de gobierno 4 Porque conoce las problemáticas de la ciudad 5 Por la eficiencia técnica de su equipo de gobierno 6 Porque se ha concentrado en acciones prioritarias 7 Porque ha sido hábil políticamente en la venta de sus proyectos 8 Por su autoridad frente a su equipo de gobierno 9 Por su autoridad frente a la ciudadanía 10 Por su liderazgo 11 Por su capacidad de tomar decisiones oportunas y adecuadas 12 Por su buena relación con el nivel nacional de gobierno 13 Por su buena relación con los empresarios de la ciudad 14 Por su buena relación con el Concejo de la ciudad 15 Por su transparencia y honestidad 21- Por el buen manejo del tema de valorización 89 Otro. ¿Cuál? _____

GPEFI5. ¿Por qué razón califica así la gestión del Concejo de Sincelejo? (ENC: NO LEA, ESPERE RESPUESTA Y CLASIFIQUE)
¿Alguna otra razón? RM

1 Muy mala gestión	2	3	4	5 Muy buena gestión
RAZONES				
GP5_12	GP5_3	GP5_45		
1 No cumplen lo que prometen 2 Son corruptos/ Se roban la plata/ Son unos ladrones 3 No trabajan por el pueblo/ por la ciudad 4 Son unos politiqueros 5 Solo trabajan para su propio beneficio 6 No se ven los resultados de su trabajo/ No se ve el trabajo 7 No apoyan al alcalde/ No trabajan con la alcaldía 8 No aprueban ningún proyecto 9 Solo hablan/ debaten y no hacen nada más 10 No conocen los problemas de la ciudad 11 No han realizado una buena gestión/ no toman buenas decisiones 12 No hacen nada/ no trabajan 13 No trabajan en equipo 14 Trabajan a medias / dejan los proyectos por la mitad 89 Otro. ¿Cuál? _____	1 No cumplen lo que prometen 2 Son corruptos/ Se roban la plata/ Son unos ladrones 3 No trabajan por el pueblo/ por la ciudad 4 Son unos politiqueros 5 Solo trabajan para su propio beneficio 6 No se ven los resultados de su trabajo/ No se ve el trabajo 7 No apoyan al alcalde/ No trabajan con la alcaldía 8 No aprueban ningún proyecto 9 Solo hablan/ debaten y no hacen nada más 10 No conocen los problemas de la ciudad 11 No han realizado una buena gestión/ no toman buenas decisiones 12 No hacen nada/ no trabajan 13 No trabajan en equipo 14 Trabajan a medias / dejan los proyectos por la mitad 89 Otro. ¿Cuál? _____	1 Están trabajando por la ciudad 2 Son los que aprueban/ gestionan los proyectos 3 Dan soluciones a los problemas de la comunidad/ del barrio 4 Trabajan/ apoyan al alcalde 5 Cumplen con lo prometido 6 Tienen una buena gestión 7 Conocen las problemáticas de la ciudad 8 Trabajan por lo que el alcalde no ha hecho 9 Tiene una buena gestión 10 Se preocupan por el bienestar de la gente/ por el pueblo 11 Trabajan por la ciudad/ se preocupan por la ciudad 12 Han trabajado por la educación 13 Han trabajado por la salud 14 Hacen control político al alcalde 15 Se preocupan por los recursos de la ciudad 16 Cumplen lo que prometen 17 Han trabajado por la vivienda 18 Han trabajado por la alimentación escolar 89 Otro. ¿Cuál? _____		

GPEFI6. (ENC: Entregue tarjeta SATISFACCIÓN) Pensando en las obras y en las inversiones que se hacen en la ciudad, en una escala de 1 a 5, donde 1 es MUY INSATISFECHO(A) y 5 es MUY SATISFECHO(A), ¿qué tan insatisfecho(a) o satisfecho(a) se siente Usted con la forma como la Alcaldía maneja e invierte los recursos y dineros de Sincelejo? Puede utilizar cualquier número de la escala.

Muy insatisfecho	Algo insatisfecho	Ni satisfecho ni insatisfecho	Algo satisfecho	Muy satisfecho
01	02	03	04	05

Gestión pública- Eficacia

GPEFA7. ¿En cuáles de los siguientes aspectos diría Usted que ha estado trabajando la actual Administración? (ENC: Lea y rote aspectos. Señale sólo los que le digan “Sí”)

GPEFA8. ENC: Entregue tarjeta SATISFACCIÓN ¿Qué tan satisfecho(a) se siente de estas acciones, en una escala de 1 a 5 donde 1 es muy insatisfecho(a) y 5 es muy satisfecho(a). Puede utilizar cualquier número de la escala. (ENC: Lea nuevamente las acciones que le dijeron Sí en la pregunta anterior. Pida una calificación para cada una)

Aspectos	P107. Ha trabajado	P108. Satisfacción
() Seguridad ciudadana y convivencia	01	01 02 03 04 05
() Educación pública	02	01 02 03 04 05
() Salud pública	03	01 02 03 04 05
() Vivienda de interés social	04	01 02 03 04 05
() Desarrollo económico de la ciudad y generación de empleo	05	01 02 03 04 05
() Servicios públicos domiciliarios (eficiencia y cobertura)	07	01 02 03 04 05
() Movilidad vial y transporte	08	01 02 03 04 05
() Recreación y deporte	09	01 02 03 04 05
() Medio Ambiente	10	01 02 03 04 05
() Cultura (promoción y acceso a diferentes expresiones artísticas)	12	01 02 03 04 05
() Programas y políticas para niños	13	01 02 03 04 05
() Programas y políticas para jóvenes	14	01 02 03 04 05
() Programas y políticas para mujeres	15	01 02 03 04 05
() Reducción de la pobreza	17	01 02 03 04 05
() Participación ciudadana	18	01 02 03 04 05
() Eficiencia y transparencia de la Gestión Pública	19	01 02 03 04 05

Gestión Pública- Transparencia

GPT1. (ENC: ENTREGUE TARJETA NADA-MUCHO) Usando las opciones de la tarjeta donde 1 es nada y 5 es mucho, ¿qué tanto cree Usted que la Administración de la ciudad ha sido transparente en sus actividades? Puede utilizar cualquier número de la escala. **RU**

Nada				Mucho
1	2	3	4	5

GPT2. (ENC: ENTREGUE TARJETA SATISFACCIÓN) Usando las opciones de esta tarjeta, ¿qué tan satisfecho(a) está usted con la información entregada a la ciudadanía por parte de la Alcaldía de Sincelejo sobre los programas y proyectos que desarrolla? Puede utilizar cualquier número de la escala. **RU**

Muy insatisfecho	Algo insatisfecho	Ni satisfecho ni insatisfecho	Algo satisfecho	Muy satisfecho
1	2	3	4	5

GPT3. (ENC: ENTREGUE TARJETA SATISFACCIÓN) Usando las opciones de esta tarjeta, ¿qué tan satisfecho(a) está usted con la información entregada a la ciudadanía por parte de la Alcaldía de Sincelejo con respecto a los resultados obtenidos y los objetivos alcanzados? Puede utilizar cualquier número de la escala. **RU**

Muy insatisfecho	Algo insatisfecho	Ni satisfecho ni insatisfecho	Algo satisfecho	Muy satisfecho
1	2	3	4	5

GPT4. (ENC: ENTREGUE TARJETA GG7) Usando las opciones de esta tarjeta, ¿qué tanto cree Usted que ha cambiado el nivel de corrupción en Sincelejo con respecto al último año? **RU**

1 Ha disminuido mucho

- 2 Ha disminuido algo
- 3 Sigue igual
- 4 Ha aumentado algo
- 5 Ha aumentado mucho

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

DATOS DEL ENTREVISTADO (ENC: SOLICITARLOS AL FINAL DE LA ENTREVISTA)	
Nombre :	Teléfono:
E-mail:	